



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

CARRERA DE DERECHO

Efectos ambientales producidos por la inobservancia de leyes y ordenanzas que regulan a las empresas que ejecutan actividades de alto impacto dentro del Distrito Metropolitano de Quito

Tesis previa a la obtención del Título de:

ABOGADO

AUTOR: Borja Urbano José Guillermo

E-mail:guilloborja@yahoo.com

TUTOR: Dr. Vela Lombeida David

Mayo, 2014

Quito

DEDICATORIA

A mis Queridos padres:

Carme Urbano. Y, Manuel Borja.

Por ser los seres más importantes del mundo que un hijo puede tener, por enseñarme a salir adelante y nunca rendirme ante ningún obstáculo que he encontrado en mi recorrido por el mundo.

A mí querida esposa por su apoyo incondicional y a mis hijos que han sido la fuerza para seguir adelante en mi trabajo investigativo.

A todos mis queridos hermanos y hermanas por todo su apoyo incondicional y desinteresado, por entenderme y apoyarme en mis sueños.

A todos mis queridos amigos y Amigas por su apoyo, consejos, comprensión, ayuda en los momentos difíciles de estudio, y nuestra vida universitaria y profesional.

*A mis profesores universitarios
Por brindarme todo su conocimiento en las aulas universitarias e impulsar el desarrollo de mi formación académica y profesional.*

José Guillermo Borja.

AGRADECIMIENTO

*Un exclusivo agradecimiento a la Universidad Central del Ecuador, a la
Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, a la
Escuela de Derecho por abrirme las puertas del conocimiento y formarme como un
Profesional competitivo.*

*Un especial agradecimiento al Doctor David Vela, por darme el apoyo y la dirección necesaria
e invaluable para la culminación del presente trabajo investigativo.*

*Un agradecimiento efusivo a todos y todas mis familiares, amigos, y profesionales que en forma
desinteresada me apoyaron en la realización del presente trabajo de investigación.*

José Guillermo Borja.

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD

Quito 07 de mayo de 2014

Yo **BORJA URBANO JOSÉ GUILLERMO**, autor de la investigación, con cédula de ciudadanía número 020151910-5, libre y voluntariamente DECLARO, que el trabajo de Grado titulado: ***“EFECTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA INOBSERVANCIA DE LEYES Y ORDENANZAS QUE REGULAN A LAS EMPRESAS QUE EJECUTAN ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO DENTRO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”***. Es de mi plena autoría, original y no constituye plagio o copia alguna, constituyéndose en documento único, como mandan los principios de la investigación científica, de ser comprobado lo contrario me someto a las disposiciones legales pertinentes.

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad.

Atentamente,



.....
JOSÉ GUILLERMO BORJA URBANO
C.I 020151910-5
Correo: guilloborja@yahoo.com

AUTORIZACIÓN DEL AUTOR INTELECTUAL

Yo, BORJA URBANO **JOSÉ GUILLERMO**, en calidad de autor del trabajo de investigación o tesis realizada sobre: ***“EFECTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA INOBSERVANCIA DE LEYES Y ORDENANZAS QUE REGULAN A LAS EMPRESAS QUE EJECUTAN ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO DENTRO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”***, por medio de la presente declaro ser autor del mismo, a la vez autorizo a la **UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR**, a hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Quito, 07 de mayo de 2014.



.....
JOSÉ GUILLERMO BORJA URBANO
C.I 020151910-5

APROBACIÓN DEL TUTOR

DR. DAVID VELA LOMBEYDA

ABOGADO M. P. 055 BOLIVAR

PROFESOR DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Quito, 17 de abril de 2014

Señora Doctora

Yolanda Yupanqui Carrillo,

DECANA DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR,

Presente.-

Señora Decana

En calidad de Tutor de la tesis **EFFECTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA INOBSERVANCIA DE LEYES Y ORDENANZAS QUE REGULAN A LAS EMPRESAS QUE EJECUTAN ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO DENTRO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**, elaborada por el señor **BORJA URBANO JOSÉ GUILLERMO**, previo a la obtención del título de **ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA REPUBLICA**, comunico a usted que el mencionado graduando ha elaborado su trabajo con responsabilidad, cumpliendo con todos los requisitos de Titulación y epistemológicos.

Además ha considerado todas las sugerencias y observaciones realizadas a este trabajo por parte del tutor.

Por lo tanto la **apruebo**, debiendo continuar con el trámite administrativo correspondiente.

Atentamente,


Dr. David Vela Lombeida
TUTOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA



RECIBIDO

Arriaga
06-04-2014

ÍNDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTO.....	iii
DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD.....	iv
AUTORIZACIÓN DEL AUTOR INTELECTUAL	v
APROBACIÓN DEL TUTOR.....	vi
ÍNDICE DE CONTENIDOS	vii
INDICE DE CUADROS.....	x
ÍNDICE DE TABLAS	xi
INDICE DE GRÁFICOS	xii
RESUMEN EJECUTIVO	xiii
ABSTRACT.....	xiv
INTRODUCCIÓN	1
 CAPITULO I	 3
MEDIO AMBIENTE Y DERECHO AMBIENTAL	3
1.1 El medio Ambiente.....	3
1.2 El Desarrollo Sustentable	6
1.3 Historia del Derecho Ambiental.....	9
1.4 Historia del Derecho Ambiental en el Ecuador.....	10
1.5 Historia del Derecho Ambiental Internacional.....	13
1.6 El Derecho Ambiental	18
1.6.1 Fuentes del Derecho Ambiental.....	21
1.6.2 Características del Derecho Ambiental	25
1.6.3 Derecho Ambiental Internacional	27
1.6.4 Desarrollo del Derecho Ambiental Ecuatoriano	28
1.6.5 Normativa Ambiental Ecuatoriana.....	29
 CAPITULO II.....	 33
GESTIÓN PÚBLICA AMBIENTAL	33
2.1 Instituciones Públicas en Materia Ambiental.....	33

2.1.1	Autoridad Ambiental Nacional	35
2.1.2	El Ministerio del Ambiente.....	37
2.1.3	Municipio del Distrito Metropolitano Quito	40
2.2	Proceso de Regularización Ambiental	67
2.2.1	Estudios Ambientales	68
2.2.2	Manejo Ambiental	68
2.2.3	La Licencia Ambiental	69
2.2.4	Auditoría Ambiental	73
2.2.5	Ficha Ambiental	76
2.2.6	Declaratorias	77
CAPITULO III.....		80
ANÁLISIS LEGAL Y DOCTRINARIO SOBRE ALTO IMPACTO AMBIENTAL.....		80
3.1	El Alto Impacto Ambiental.....	80
3.2	Normativa sobre Alto Impacto Ambiental	89
3.2.1	Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales sobre Medio Ambiente	94
3.2.2	La Constitución de la Republica del Ecuador del 2008.....	104
3.2.3	La ley de Gestión Ambiental	110
3.2.4	Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS).....	113
3.2.5	Ordenanzas Metropolitanas	123
3.3	Empresas de Alto Impacto Ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito.....	137
3.4	Infracciones	137
3.5	Sanciones.....	138
CAPITULO IV		143
REALIDAD PRÁCTICA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES AMBIENTALES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.		143
4.1	Casos existentes en la Unidad Metropolitana de Control Ambiental en el año 2013	143
4.2	Caso Práctico ejemplificativo, para ilustración en la tesis.	150
4.3	Algunos casos emblemáticos de control de perjuicios al ambiente en el Distrito Metropolitano de Quito	152
4.4	Conclusiones.	155

4.5	Recomendaciones	156
4.6	Planteamiento de Propuesta y Solución	158
BIBLIOGRAFÍA		162

INDICE DE CUADROS

Cuadro 1.....	137
Cuadro 2.....	144

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	41
Tabla 2	43
Tabla 3	43
Tabla 4	134
Tabla 5	135
Tabla 6 EXPEDIENTES ABIERTOS CON ICRES 2013.....	145
Tabla 7	147

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1	35
Gráfico 2	42
Gráfico 3	57
Gráfico 4	122
Gráfico 5	137
Gráfico 6	144
Gráfico 7	147

RESUMEN EJECUTIVO

Efectos ambientales producidos por la inobservancia de leyes y ordenanzas que regulan a las empresas que ejecutan actividades de alto impacto dentro del Distrito Metropolitano de Quito

El presente trabajo investigativo, tiene la finalidad de exponer la situación real de la contaminación de Alto Impacto Ambiental producidas por la actividad Empresarial en el Distrito Metropolitano de Quito. Si consideramos la contaminación Ambiental en que estamos viviendo en la actualidad en nuestra ciudad, tiene una gran importancia en el ámbito Ambiental ya que por mandato Constitucional tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Del diagnóstico realizado por mi persona y de los expedientes que constan en la Unidad Desconcentrada de Control Ambiental, Telecomunicaciones y Redes de Servicio de la Agencia Metropolitana de Control, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, entidad encargada de imponer sanciones a los regulados que realizan sus actividades económicas en la Capital de la República se puede observar un alto número de empresas que no cumplen la Normativa Ambiental vigente. Todas las empresas deben cumplir la Normativa Ambiental para poder vivir de acuerdo a mandato Constitucional en un Ambiente sano y Ecológicamente equilibrado.

PALABRAS CLAVE: CONTAMINACIÓN, ALTO IMPACTO AMBIENTAL, MANDATO CONSTITUCIONAL.

30 ABRIL 2014

TRADUCCIÓN CERTIFICADA

**"ENVIRONMENTAL EFFECTS CAUSED BY FAILURE OF LAWS AND ORDINANCES REGULATING
BUSINESS RUNNING HIGH IMPACT ACTIVITIES WITHIN THE METROPOLITAN DISTRICT OF
QUITO"**

ABSTRACT

This research work aims to expose the real situation of high environmental pollution caused by business in the Metropolitan District of Quito. Considering the environmental pollution that we are experiencing today in our city, it is of great importance in the environmental field as a constitutional mandate, we are entitled to live in a healthy and ecologically balanced environment. The diagnosis made by me and the files contained in Decentralized Unit of Environmental Control, Telecommunications and Service Network of the Metropolitan Control Agency, of the Metropolitan District of Quito, in charge of imposing penalties on regulated performing their economic activities in the capital of the Republic, one can observe a large number of companies that do not meet current Environmental Compliance. All companies must meet Environmental Compliance to live by constitutional mandate in a healthy and ecologically balanced environment.

KEYWORDS: POLLUTION / HIGH ENVIRONMENTAL IMPACT / CONSTITUTIONAL MANDATE

Yo, **Diego Rendón Coronel**, certifico que esta es una fiel traducción del documento original.
Para cualquier referencia, mi nombre consta en la Lista Oficial de Traductores de la Embajada de los Estados Unidos de América, en Quito.
CI: 0908847627

Diego Rendón Coronel
**LOSTIN
TRANSLATION**
Traducciones legales, personales y corporativas
lostint.ecuador@gmail.com | +593 994144197

INTRODUCCIÓN

El impulso del hombre por el cuidado y protección de la naturaleza ha existido desde los mismos principios de la humanidad. La proyección de este idealismo y la implementación de principios enfocados a cumplir dicho objetivo surgen a partir de la década de los sesenta con la preocupación de los jefes de los Estados a través de las múltiples convenciones internacionales realizadas con el afán de encontrar soluciones a los problemas ambientales a nivel mundial.

El desarrollo económico y tecnológico ha contribuido en el incremento de la contaminación en todas sus formas, lo que ha provocado un detrimento en los elementos vitales para la subsistencia del hombre. Estos fueron los motivos que sentaron las bases para la propagación de las declaraciones internacionales a favor del medio ambiente, un ejemplo: la Declaración de Río de Janeiro.

Particularmente, la cantidad de desechos sólidos y residuos peligrosos acumulados en el planeta, debido a los procesos de las diferentes actividades realizadas por el ser humano y el planteamiento de cómo deshacerse de ellos, se ha convertido tanto en un problema como en una preocupación global. Tomando en cuenta este asunto, se han realizado convenciones con respecto a este tema específico, siendo uno de los principales documentos emanados de éstas el Convenio de Basilea.

Legislaciones similares que trabajan sobre el tema en países de Latinoamérica principalmente, han logrado grandes y positivos avances en la reducción de la contaminación ambiental, a través de la gestión y tratamiento a los desechos sólidos y desechos peligrosos. Avances que servirían de ejemplo para el desarrollo de legislación aplicable a países como el nuestro, tal como es el caso de la legislación brasilera misma, que en tratamiento de residuos peligrosos ha implementado leyes especializadas en la gestión y manejo de los mismos.

En definitiva, este análisis refleja la importancia de tener formas de gestión y manejo de desechos peligrosos ambientalmente racionales y económicamente viables, logrando asegurar a la

población un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, previniendo los riesgos ambientales y garantizando la existencia de mejores prácticas aplicables en nuestro país con respecto a los desechos peligrosos. Adicionalmente es importante reconocer la necesidad de una reestructuración legal y reglamentaria que se encuentre acorde a las actuales disposiciones Constitucionales, en la que se incluyan preceptos como: los derechos a la naturaleza, los principios ambientales, la protección de las áreas consideradas vulnerables, entre otros.

CAPITULO I

MEDIO AMBIENTE Y DERECHO AMBIENTAL

1.1 El medio Ambiente

En las diferentes etapas de desarrollo de la humanidad siempre ha estado presente la preocupación por el medio ambiente. Los antecedentes más remotos son el código de Ammurabi, el Derecho Griego y el Derecho Romano, pero cabe mencionar que estos precedentes no tenían como finalidad la protección del medio ambiente, si no la de la propiedad privada y la salud pública.

En el mundo jurídico contemporáneo se ha puesto en vigencia la preocupación por la conservación del medio ambiente. En los años setenta se dejó de existir el pasado idílico del hombre y la naturaleza eterna porque en esta época el mundo comenzó a darse cuenta que la protección de la naturaleza sería parte de la supervivencia del ser humano.

El medio ambiente, concebido en un sentido amplio, es decir, abarcando a todos los componentes naturales, sociales, culturales y paisajísticos que conforman el entorno en que el hombre desenvuelve una actuación, ha sufrido un paulatino proceso de deterioro, como ejemplo de ellos tenemos la creciente destrucción de la capa de ozono por el uso de clorofluorocarbonos y otras sustancias que también la deterioran, el nivel de las aguas, además produce otros efectos como la extinción de especies de flora y fauna, etc.

El ambiente es de vital importancia para el ser humano porque existe un estrecho vínculo, por lo que se le debe respetar y proteger por ser patrimonio de la humanidad y un bien necesario para la supervivencia y el desarrollo socioeconómico de los pueblos. Sin embargo, el aumento de la industria y la economía han producido un incremento en las agresiones contra el medio ambiente y esto tiene una repercusión en la calidad de vida de los seres humanos, incluso poniéndolos en peligro de su propia existencia.

La Enciclopedia (CEDA, 2004) define al Medio Ambiente como:

El conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden influir de una manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la generación de efectos de los que se espera una modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos organismos. (P. 8).

La (Ley de Gestión Ambiental, 2004) nos da un concepto claro de Medio Ambiente:

Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, físicos, químicos o biológicos, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la naturaleza o la acción humana, que rige la existencia y desarrollo de la vida en sus diversas manifestaciones.

Pero ninguna de las definiciones antes mencionadas destaca el elemento de preservación o protección del medio ambiente. Dicho elemento genera la relación entre el ambiente y el ser humano, además de la necesidad de su protección mediante una legislación ambiental estatal adecuada.

En este sentido, la conferencia de Estocolmo de 1972 afirma que: El medio ambiente activo es un conjunto de sistemas compuestos de objeto y condiciones físicamente definibles que comprenden particularmente a ecosistemas equilibrados bajo la forma que los conocemos o que son susceptibles de adoptar en un futuro previsible, y con los que el hombre en cuanto punto focal dominante ha establecido condiciones de vida. El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y disfrutar de las condiciones de vidas adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes o futuras, en tal virtud se hace imprescindible la obligatoriedad que tiene el ser humano para proteger al ambiente, para lo cual debe diseñar mecanismos adecuados y efectivos.

El tema del medio ambiente también involucra el desarrollo sustentable, concepto que forma parte indispensable del uso y aprovechamiento del mismo, lo que implica una preservación de los recursos naturales para su utilización por las generaciones actuales y futuras.

Al tomar en cuenta el derecho dentro del medio ambiente, se lo entenderá como: “conjunto de las disposiciones legales y administrativas vigentes sobre el tema, así como la jurisprudencia de los tribunales de justicia”. El derecho Ambiental constituye entonces, las disposiciones o normas vigentes que regulan el ambiente.

Cabe destacar que el tema de la preservación y conservación del medio ambiente ha gozado de mayores avances en el campo internacional que en el campo nacional, puesto que las legislaciones se han adoptado a lo establecido por la comunidad internacional en tratados, convenios declaraciones, etc.

El Manual (CEDA, 2004,) nos da un claro concepto de Ambiente y dice:

Al definir el término “Ambiente”, se establece la base filosófica de toda legislación enfocada a la protección ambiental. De igual manera, a través de esta definición, se nos muestra las percepciones que tienen los políticos y planificadores de los estados sobre este tema, y sobre todo la relación ambiente ser humano. La definición de este término también refleja el objetivo de la legislación ambiental y el acometimiento de los Estados hacia la protección del ambiente. Por ser tan importante, es esencial definir el término ambiente.

La palabra ambiente significa diferentes cosas para distintas personas. Para algunos, el ambiente se refiere a los elementos básicos de la tierra como el aire, el agua y el suelo. Otros consideran al ambiente en relación con los recursos naturales que tienen valor para el ser humano, como aspectos de la tierra, la atmósfera y del agua que pueden ser utilizados por el hombre.

Otra definición incluye a todos los elementos vivos del planeta así como a sus recursos naturales, excluyendo de ella al ser humano, así como también, para otros

tratadistas del tema, es importante definir al ambiente en tanto en cuanto tenga relación con los seres humanos. La principal crítica a todas estas definiciones es que fallan en colocar a los seres humanos dentro del ambiente, divorciando al ser humano de su ambiente natural y por lo tanto asumiendo que los seres humanos de alguna manera son ajenos o están más allá de la naturaleza.

Cada vez más, el ambiente se describe en un sentido mucho más holístico, integrando a los seres humanos como inherentes del ambiente y viceversa. El lugar de los seres humanos dentro del ambiente ya fue reconocido en la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Estocolmo en 1972: (P. 3)

1.2 El Desarrollo Sustentable

El desarrollo que cumple con las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para obtener sus propias necesidades.

El Manual (CEDA, 2004,) dice:

Así tenemos que, la definición de desarrollo sustentable aportó con una solución conceptual al problema ambiental ya que permitió que los valores del ambiente y el desarrollo se reconcilien sugiriendo una integración entre ellos, en todos los niveles de toma de decisiones. Sin embargo del potencial del desarrollo sustentable como solución a los problemas ambientales que enfrentamos en la actualidad, las dificultades para su implementación no pueden ser puestas de lado.

Hay que mencionar que las palabras sustentable y desarrollo son en estricto sentido contradictorias. Lo sustentable implica regeneración a largo plazo, mantenimiento, reciclaje, mínima explotación de materia prima y la administración de las necesidades humanas sobre una base colectiva. El desarrollo puede ser interpretado de muchas maneras diferentes pero de acuerdo a nuestra cultura actual basada en la producción industrial este implica una

planificación a corto plazo, mantenimiento mínimo, gasto, máxima explotación de materias primas y un énfasis en el individuo. Además del crecimiento económico, en todo caso, el desarrollo también significa evolución social, cultural y espiritual. De alguna manera este aspecto de la sustentabilidad tiene que aparecer primero para el logro de un desarrollo basado en lo ecológico (p.6).

En 1997, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente publicó el Primer Informe sobre la Situación Global del Ambiente en el que se destacan las principales amenazas ambientales que enfrentan varias regiones del planeta. El informe señala una serie de estas amenazas que constituyen consecuentemente actividades no sustentables:

El primer Informe trata del proceso de evaluación de GEO-4 desde 1997, el PNUMA ha elaborado los informes y las perspectivas del Medio Ambiente Mundial (GEO por sus siglas en inglés), los cuales proveen evaluaciones sobre las interacciones entre el medio ambiente y la sociedad. Con el mandato principal de “mantener el medio ambiente mundial bajo revisión”, el PNUMA coordinó una serie de evaluaciones científicas que incluyeron consultas extensivas y procesos participativos, que dieron como resultado la publicación de los informes GEO en 1997, 1999 y 2002. El Cuarto Informe Perspectivas del Medio Ambiente Mundial: medio ambiente para el desarrollo (GEO-4), constituye el proceso GEO más exhaustivo elaborado hasta la fecha. Fue diseñado para garantizar sinergias entre la ciencia y la política, y al mismo tiempo mantener su credibilidad científica, dando respuesta a las necesidades y objetivos en materia política.

Las Principales amenazas presentadas en el informe de 1997 de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente son las siguientes:

- El uso de los recursos renovables como el suelo, los bosques, el agua dulce, las zonas costeras, los recursos pesqueros y las áreas urbanas sobrepasa su capacidad de regeneración natural y por lo tanto es no sustentable.

- Los gases de efecto invernadero todavía se emiten a niveles mayores a los internacionales acordados dentro del Convenio Marco de Cambio Climático
- Las áreas naturales y la biodiversidad contenida en ellas está disminuyendo debido a la expansión de tierras para la agricultura y colonización de grupos humanos.
- El incremento y uso extensivo de químicos como “combustible” para el desarrollo económico está causando graves riesgos a la salud, intensa contaminación ambiental y problemas de tratamiento de desechos.
- Los adelantos globales en el sector energético no son sustentables.
- El crecimiento rápido y no planificado de la urbanización, particularmente en las zonas costeras, está poniendo mayor presión en los ecosistemas adyacentes.
- Las interacciones complejas y generalmente poco entendidas de los ciclos biogeoquímicos globales están produciendo una amplia acidificación, cambios en el clima, cambios en los ciclos hidrológicos, pérdida de biodiversidad, de biomasa y bioproducción.

Existen también tendencias sociales, intrínsecamente ligadas al ambiente, que tienen efectos negativos para la protección ambiental, y resultan ser no sustentables: Un aumento de la desigualdad, en las naciones y entre naciones, en un mundo que es generalmente más saludable y más rico.

La continuación en el futuro de hambrunas y pobreza a pesar del que existe suficiente alimento disponible a nivel global; y grandes riesgos a la salud humana resultantes de la degradación continuada de los recursos y de la contaminación

química constante, hace que el Distrito Metropolitano de Quito sea una ciudad contaminada.

1.3 Historia del Derecho Ambiental

La naturaleza para el hombre antiguo estaba compuesta por múltiples dioses, luego al intentar aplicarle los principios mecanicistas de Kepler y Galileo, se la relacionó con una máquina. Posteriormente se la santificó por medio del movimiento arrogante sobre ella por culpa del culto cientificista, pero al mismo tiempo intenta restaurarla o preservarla para reutilizarla.

En las primeras décadas del siglo XX, las ciudades, principalmente aquellas que se encontraban experimentando los avances de la era industrial, comenzaron a sentir los efectos de la contaminación generada por las actividades fabriles, manifestados en daños a la salud, al entorno y a los recursos naturales. Aquí se observan daños transfronterizos como por ejemplo, el caso Trail Smelter (Canadá vs Estados Unidos), el caso del Lago Nannoux (España vs Francia) y el caso de la construcción del sistema de esclusas de Gabčíkovo (Hungria vs Checoslovaquia entonces, hoy Eslovaquia), por citar algunos casos en que, según los propios gobiernos involucrados, la responsabilidad de algunos Estados fue casi nula.

A partir de 1960, cuando los daños a la naturaleza comenzaron a ser evidentes, la ecología se hizo relevante mundialmente y se la considero una ciencia, mediante la cual se comenzaron a establecer políticas de manejo y control de los recursos naturales.

En este punto, cabe anotar que mientras se desconocía sobre las consecuencias del uso y el abuso de la naturaleza, no existía ninguna regulación. Hoy en día, a pesar de existir regulaciones, la naturaleza nos está pasando factura, ya que el ser humano ha roto con el equilibrio ambiental, poniendo en peligro a la naturaleza y al mismo ser humano.

Con los antecedentes expuestos, a continuación se establecerá la historia del desarrollo del Derecho Ambiental, tanto a nivel nacional como internacional.

1.4 Historia del Derecho Ambiental en el Ecuador

El Derecho Ambiental en el Ecuador, es una rama del derecho relativamente nueva y moderna. Su reconocimiento se encuentra establecido en la Constitución de la República y forma parte del régimen del sistema de protección de derechos humanos del Estado, conocido en la vigente Carta fundamental de nuestro Estado como Régimen del Buen Vivir. La categoría de protección de este derecho incluye dos dimensiones. Por un lado es un derecho individual en razón del cual toda persona tiene derecho a un ambiente sano, y por otro lado, es un derecho colectivo en el sentido de que el estado reconoce a la población el derecho a vivir en un ambiente sano.

El derecho ambiental o derecho a un ambiente sano, al ser parte del sistema de protección de los derechos humanos constituye un elemento de protección, garantía y satisfacción de parte del Estado. Protección en el sentido de que el Estado tiene que establecer medidas positivas para que el derecho no tenga interferencias que pueda alterar o limitar su disfrute. Garantías en cuanto el estado debe establecer medidas concretas que tiendan a establecer mecanismos efectivos para los casos en los cuales las personas o el propio estado atente contra este derecho exista la posibilidad de exigir su reconocimiento o reparación. Y la satisfacción en cuanto el estado debe generar las condiciones necesarias para que este derecho sea disfrutable y no se vea afectado.

Los daños ambientales que han sucedido en la historia ecuatoriana, ocasionado principalmente por la industria hidrocarburífera y que han provocado un evidente perjuicio socio-ambiental y principalmente por el avance del derecho internacional que ha incorporado en la última década algunas disposiciones para el control y protección de elementos concretos de la naturaleza (animales, humedales, biodiversidad, bosques, etc.) ha incidido para que en el Ecuador dentro de sus disposiciones constitucionales, legales y administrativas se establezcan normas ambientales con un enfoque eco sistémico e integral que incorpora los estándares fijados en las normas del derecho internacional de protección ambiental y principalmente los principios del soft law del derecho internacional. Así tenemos que nuestro sistema constitucional de protección del derecho ambiental

incluye todos los conceptos modernos de protección ambiental que han sido fijados en las conferencias y cumbres internacionales en las cuales se han establecido Declaraciones sobre protección ambiental.

En este sentido, el régimen constitucional de protección de derecho ambiental ecuatoriano se ve constituido de los siguientes principios, procedimientos y garantías:

- a)** El establecimiento del derecho individual y colectivo a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado;
- b)** Reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos;
- c)** Declaratoria de interés público sobre la conservación de la diversidad biológica
- d)** El deber de protección del patrimonio natural;
- e)** Reconocimiento de un modelo sustentable de desarrollo, ambiental- mente equilibrada y respetuosa de la diversidad cultural;
- f)** Establecimiento de políticas de gestión ambiental que se aplicarán de manera transversal y de obligatorio cumplimiento;
- g)** La participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales, así como en la adopción de decisiones ambientales;
- h)** Adopción de políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño (principio de prevención);
- i)** Adopción de medidas protectoras, eficaces y oportunas sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño (principio de precaución);

Establecimiento de la responsabilidad objetiva por daños ambientales;

- j)** Obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectada.

La responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente;

- k)** La imprescriptibilidad de las acciones legales para perseguir y sancionar los daños ambientales;
- l)** La acción subsidiaria del Estado para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas;
- ll)** La responsabilidad de las servidoras o servidores públicos responsables de realizar el control ambiental;
- m)** La Acción Pública que permite a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental;
- n)** La posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio;
- o)** La reversión de la carga de la prueba sobre la inexistencia del daño potencial o real que recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado;
- p)** Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas;
- q)** La consulta previa sobre toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente;
- r)** Establecimiento de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.
- s)** Establecimiento del principio in dubio pro natura, esto es, que en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.

La interrelación de estos elementos como parte constitutiva del derecho ambiental, nos permite comprender que estamos frente a un sistema de protección constitucional garantista y eco sistémico el cual establece reglas claras profundamente ecológicas y abiertamente participativas para la observancia y cumplimiento tanto del estado, los particulares y las empresas. Esta línea de acción debe ser incorporada en la legislación infra constitucional que para el efecto se expida o se reforme, sin perder de vista los principios del progreso de los empresarios conjuntamente con la sociedad.

1.5 Historia del Derecho Ambiental Internacional

Los inicios del Derecho Ambiental Internacional se dan mediante la suscripción de tratados, declaraciones y convenios internacionales que, en un principio, protegieron recursos específicos como el aire, el suelo o el agua, en un marco de cooperación de tipo económico, con la intención de salvaguardar lo que tenía utilidad para la producción. Dichos documentos dieron la pauta para el desarrollo del Derecho Ambiental Internacional; así tenemos:

- Convenio de París de 1902 sobre las Aves Útiles para la Agricultura.
- Convenio entre Estados Unidos y Reino Unido de 1909 sobre la Protección contra la Contaminación de los Ríos Fronterizos con los Dominios de Canadá.
- Convenios de Washington de 1911, entre Estados Unidos, Rusia y Japón sobre la Protección de las Focas para la Industria Peletera.
- Convenio de Londres del 8 de noviembre de 1933 para la Conservación de la Flora y la Fauna Natural en África.
- Convenio de Washington del 12 de octubre de 1940 para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Panorámicas Naturales en los países de América.

Debido a los daños y perjuicios provocados por la Segunda Guerra Mundial, la preocupación ambiental como tal, surgió; y así encontramos:

- La Conferencia de 1949, celebrada en Lake Success (Nueva York), cuya trascendencia no fue mayor. Allí se trató el tema medio ambiental en general.
- Protocolo para la Protección de las Aguas Fronterizas, firmado por Francia, Bélgica y Luxemburgo el 8 de abril de 1950.
- Convenio de Londres para la Prevención de la Contaminación del Mar por Hidrocarburos del 12 de mayo de 1954, este es el primer instrumento que regula la contaminación provocada por buques.

- Convenios para Combatir la Contaminación:
- Del Río Mosela del 27 de octubre de 1956.
- Del Lago Lemán del 16 de noviembre de 1962
- Del Río Rin del 29 de abril de 1963
- Tratado de Washington sobre la Antártica del 1 de diciembre de 1959.
- Tratado de Moscú sobre la Prohibición de Ensayos Nucleares en la Atmósfera, en el Espacio Ultra atmosférico y Bajo el Agua del 5 de agosto de 1963.
- Tratado del Espacio del 27 de enero de 1967.

A raíz de lo anteriormente anotado, existe la acertada afirmación de que el Derecho Ambiental nace del Derecho Internacional, puesto que las primeras pautas son los convenios bilaterales que han sido señalados en párrafos anteriores, los mismos que fueron ampliados y generalizados para convertirse en convenios mundiales como los que serán señalados en párrafos posteriores.

Ahora, cabe exponer que las normas ambientales han tenido diversas etapas, entre las que se distinguen tres:

1. Tiene relación con el uso de los recursos naturales.
2. Comprende legislación específica sobre cada recurso natural.
3. Orienta la normativa hacia el conjunto de recursos naturales.

Considera al entorno como un todo y éstas son las normas ambientales propiamente dichas.

Por lo tanto, la normativa ambiental nace como respuesta a la necesidad de explotar los recursos naturales de manera racional, sustentable y protegiendo el ambiente.

Para la década de los sesenta se comienzan a dar los primeros pronunciamientos del “pensamiento verde”; y así se recoge lo siguiente:

En 1962, la bióloga norteamericana Rachel Carson, escribió un libro llamado “Primavera Silenciosa”, mismo que fundó las bases de la ecología moderna. Este libro trata sobre los peligros e impactos de los insecticidas, plaguicidas y herbicidas en el medio ambiente y la salud del ser humano poniendo en peligro, inclusive, su supervivencia. El resultado de la publicación de esta obra fue que se comenzó a tomar conciencia sobre el cuidado de la naturaleza.

En 1968, el Consejo de Europa promovió la adopción de la Declaración sobre Lucha contra la Contaminación del Aire y la Carta Europea del Agua.

En 1969, se celebra el Convenio de Bonn para la Lucha contra la Contaminación de las Aguas del Mar en caso de Accidente por Hidrocarburos.

En 1971, se da el Convenio de Ramsar sobre la Conservación de las Zonas Húmedas de Importancia Internacional.

En 1972, destaca el Convenio de Londres sobre la Protección de las Focas Antárticas.

En ese mismo año, 1972, la ONU, finalmente, toma cartas en el asunto y realiza la Conferencia de Estocolmo, la cual se centró en la problemática medioambiental, especialmente, en lo relacionado con degradación ambiental y contaminación transfronteriza, a la cual asistieron 113 representantes estatales y unas 400 organizaciones no gubernamentales. En el mencionado documento, de carácter declarativo y recomendatorio, se sentaron las bases para la acción ambiental de los años siguientes. La Declaración posee 26 principios que se relacionan con los asuntos que afectan al medio ambiente y propone criterios de protección y preservación que pueden ser aplicados tanto en el ámbito internacional como nacional.

En 1987, se conoce el informe de la Comisión Brundtland, y es éste el punto de partida para el Derecho Ambiental como se lo conoce en la actualidad, en el cual se introduce el término desarrollo sustentable y la necesidad de que éste se implemente en los Estados para que se convierta en parte fundamental de los habitantes del mundo.

En 1992 se realiza en Río de Janeiro la Cumbre de la Tierra, en la que se ahondó el tema del desarrollo sustentable y la dificultad de alcanzarlo por cuestiones de pobreza y subdesarrollo. El objetivo primordial de la Cumbre fue introducir un plan de acción medioambiental en el cual se consideró la cooperación internacional para el desarrollo de los países subdesarrollados, esto basado en los Principios medioambientales ya establecidos en Estocolmo y en las conclusiones de la Comisión Brundtland. Se celebró con la asistencia de 176 representantes estatales y más de 1200 organizaciones no gubernamentales. El tema central y componente en todos los instrumentos internacionales que emanaron de esta reunión fue el desarrollo sustentable. Así surgieron:

- DECLARACIÓN DE RÍO: contiene 27 principios que, en general, establecen políticas de desarrollo sustentable para que tanto las generaciones presentes como las futuras puedan aprovechar los recursos naturales.
- DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LOS BOSQUES: surge por la presión de los países madereros, contiene 15 principios que establecen la soberanía del Estado y el derecho a comercializar estos recursos y limita las restricciones al comercio y explotación que pudieran surgir como pretexto de la protección que se debe tener sobre los recursos madereros.
- CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE DE CAMBIO CLIMÁTICO: suscrito por 153 países, entró en vigencia en 1994. Este Convenio establece la obligación de cooperar para disminuir las emisiones a la atmósfera de sustancias químicas que provocan el efecto invernadero y por ende el calentamiento global, también, hace énfasis en el desarrollo sustentable mediante la utilización de tecnologías limpias y la ejecución de medidas encaminadas a aminorar el cambio climático provocado por las actividades productivas humanas.
- CONVENIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA: suscrito por 157 países, entró en vigencia en el 2003. El tema central de este Convenio es la protección a genes, especies y ecosistemas porque se tuvo en consideración que la diversidad biológica es de interés común de la humanidad y debe ser amparado.

- AGENDA 21: establece un plan de acción para llevar a cabo los proyectos de desarrollo sustentable de tal forma que se consideran una política ambiental para los países que lo suscribieron. Es un acuerdo entre naciones que requiere un compromiso político del más alto nivel.

La Agenda se divide en cuatro secciones:

- ✓ Dimensiones social y económica
- ✓ Conservación y manejo de recursos para el desarrollo
- ✓ Fortalecimiento del papel de los principales grupos
- ✓ Medios de ejecución

Cada Estado puede llevar a cabo la Agenda según su situación, capacidad y prioridad como lo establece la propia Declaración de Río.

Otro hito importante para el derecho ambiental sucedió en 1997, cuando emana de la ONU el Protocolo de Kyoto, un instrumento internacional que tiene como objetivo general luchar contra el cambio climático a través de la reducción en forma gradual de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados considerados desarrollados. En el mencionado documento se establecen compensaciones financieras para facilitar el cumplimiento de la meta. Es importante mencionar que Kyoto es de obligatorio cumplimiento y tiene la fuerza vinculante que en su momento no tuvo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

En el 2002, se realizó la Cumbre de Johannesburgo o Río más 10, de la cual sobresale la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible. En el documento se reafirman los compromisos realizados en la Cumbre de la Tierra y se plantearon nuevos retos tales como evitar que se pierda biodiversidad, evitar que la globalización genere aún más distanciamiento entre ricos y pobres y mantener el desarrollo sustentable como modelo de desarrollo.

En 2009 se celebró la XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático, en Copenhague (Dinamarca), donde se prepararon nuevos objetivos que tienen que entrar en vigencia en 2012, luego de que termine, en ese mismo año, el Protocolo de Kyoto.

En 2010 se llevó a cabo la XVI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático o Cumbre del Clima en Cancún (México), en la cual se procuró concluir con los nuevos objetivos que deberían regir luego de Kyoto. Estos objetivos debían ser plasmados en un acuerdo jurídicamente vinculante que establezca nuevas metas de reducción de emisiones contaminantes.

En la Tesis (Pereira, 2011) nos dice lo siguiente:

Por tanto, desde que se comenzaron a cuidar el aire, el agua y el suelo por su utilidad en la producción, porque de ellos depende la vida en la tierra, se han visto gigantescos avances en el Derecho, y es esa la razón por la cual nació el Derecho Ambiental, cuyo objetivo es velar para que la explotación de los recursos sea realizada de manera racional para que las generaciones presentes y futuras puedan gozar de los mismos. Es por ello que es trascendental mantener un desarrollo sustentable y respetar, en la medida de lo posible, al medio ambiente e intentar que se mantengan inalterables los ciclos vitales para que, de esa manera, la vida en la Tierra no se vea alterada. (p. 13, 20).

1.6 El Derecho Ambiental

Es conocido que los orígenes del Derecho Ambiental son tan antiguos como la humanidad, puesto que se estima que las comunidades primitivas lo consideraban al proteger e impedir que los recursos naturales fueran explotados de manera irracional. Por tanto, la naturaleza ocupaba un lugar privilegiado, ya que estas civilizaciones antiguas reconocían la íntima dependencia que mantenían con ella. Con el tiempo esa percepción de armonía se fue perdiendo, puesto que el ser humano sintió que pudo apoderarse de la naturaleza. Hoy por hoy, el tema vuelve a tomar fuerza por el simple hecho de que el hombre la necesita para su supervivencia. Es por ello que el estudio del Derecho Ambiental comprende la relación del ser humano con su entorno natural. (P. 8)

El Manual (CEDA, 2004) nos da un relato sobre los orígenes del Derecho Ambiental:

El Derecho Ambiental es la rama del derecho de más rápido crecimiento a nivel nacional e internacional. Este campo dinámico del derecho ha asimilado la filosofía cambiante respecto a la relación del ser humano frente a la naturaleza durante los últimos años; una relación que ha girado desde una simple perspectiva de conservación y de prevención de la salud humana hacia un enfoque holístico e integrado. Con el objeto de definir y alcanzar el desarrollo sustentable, el derecho ambiental debe continuar evolucionando y adaptándose en el camino con el continuo entendimiento de las interrelaciones ambientales y ecológicas y nuestra participación en ellas.

El derecho ambiental se lo puede definir como “el conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden influir de una manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la generación de efectos de los que se espera una modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos organismos”.

Otra opinión del mismo tratadista es que el Derecho ambiental sigue siendo esencialmente público, pues aunque la corriente modernizadora se oriente cada vez más a la liberalización y a la privatización, esta tendencia no alcanza al Derecho Ambiental “por la sencilla razón de que si la sociedad espontáneamente se hubiera comportado de forma ambientalmente correcta, no habría sido necesario que el legislador ordenase a la Administración empuñar el garrote”.

Una opinión contraria a la característica esencialmente pública del derecho ambiental es la propuesta por la Dra. Eulalia Moreno Trujillo en su obra “La Protección Jurídica-Privada del Medio Ambiente y la Responsabilidad por su Deterioro”, según ella, el derecho civil contiene suficientes instituciones que se orientan hacia la conservación del medio ambiente, y es a través de la aplicación de sus normas que la sociedad civil debería actuar, la Dra. Moreno Trujillo como bien señala en su obra se refiere a instituciones útiles y eficaces del derecho civil para la protección del medio ambiente,

por ejemplo todas aquellas normas que se refieren a las relaciones de vecindad, abuso del derecho y función social de la propiedad, así como la responsabilidad civil extracontractual.

La tutela del medio ambiente ha modificado algunas características típicas del derecho, es así como el derecho ambiental tiene un énfasis preventivo que se aleja cada vez de la orientación reparadora, por otro lado se han creado principios como el contaminador-pagador, la sustitución del interés subjetivo, del patrimonio individual, del derecho subjetivo, por el reconocimiento del interés colectivo y los patrimonios comunes, “la opción por el riesgo y no por el daño dando lugar a la emergencia de la responsabilidad objetiva que ha hecho tambalearse al mundo del seguro, la globalidad en suma de sus postulados”.

Otra característica de la esencia del derecho ambiental como se ha dicho es su implicación internacional, pues se abordan problemas que afectan a la Biosfera, como el efecto invernadero, la debilitación de la capa de ozono, la contaminación de los mares y la pérdida de la biodiversidad, todos constituyen la base de la supervivencia de la especie humana. También el derecho ambiental se caracteriza por la búsqueda de soluciones solidarias en la resolución de conflictos como en el caso de la aproximación que debe existir entre los países desarrollados y los países en desarrollo para canalizar recursos orientados hacia fines que interesan a todos. Todos los elementos mencionados configuran el concepto del desarrollo sustentable, mensaje fundamental de la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo llevada a cabo en Río de Janeiro Brasil en junio de 1992.

De acuerdo a la definición del Código Civil, en el Artículo 1, la Ley es “la declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”.

Sin embargo de la definición contenida en el Artículo 1 del Código Civil, en nuestra legislación ambiental se ha incurrido muchas veces en la expedición de normas

legales que constituyen “programas de trabajo o planes o proyectos” sin contenido normativo que no tienen otro efecto que meras declaratorias que ni mandan, ni prohíben, ni permiten, esta característica es más común en el caso de las normas administrativas, pero también se la encuentra en cuerpos legales ambientales que enuncian y expresan intenciones de buena voluntad como la conservación del agua, del aire y del suelo, la aplicación del principio de “quien contamina, paga” y la utilización de la acción popular, sin que se disponga cómo se deben llevar a cabo estas intenciones, y qué Instituciones deberán tener competencia en su aplicación.

El Manual (CEDA, 2004) nos dice:

El Derecho Ambiental “existe” en tanto identifica y juridifica las actividades humanas y los recursos naturales objeto de regulación y de protección, respectivamente. ¿Por qué juridificar las actividades humanas? Es imprescindible que el Derecho Ambiental juridifique las actividades humanas porque no todas las actividades humanas pueden ser objeto de regulación por mucho que se pueda justificar que todas las actividades humanas consumen recursos naturales. Para impedir una suerte de imperialismo del Derecho ambiental y aquilatar su ámbito de regulación al ámbito material adecuado a su función, es necesario determinar cuáles son las actividades humanas que deben ser reguladas por razones ambientales. En definitiva, para agilizar su objeto de regulación. (p. 8, 9, 10)

1.6.1 Fuentes del Derecho Ambiental

Las fuentes del Derecho Ambiental, las encontramos dispersas en todas las legislaciones, pero podemos citar a las siguientes como principales fuentes de esta rama del Derecho.

- La Constitución de la República.
- Legislación propiamente ambiental: Códigos de Medioambiente: Colombia, Perú, Brasil, Venezuela etc.

- Legislación sectorial: Ley Forestal, Ley de Aguas, Ley de Régimen Municipal, Código de la Salud, Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.
- Legislación que regula otros temas: Código Civil, Códigos Penales, Códigos de Procedimiento.
- Legislación Económica y las Disposiciones de la Administración Pública en el Aspecto Ambiental.
- El Derecho Internacional: Soft Law o derecho No Vinculante.

Como dijimos anteriormente, las fuentes del Derecho Ambiental tienen un carácter difuso y , están dispersas en toda la legislación, pero por orden de jerarquía es la Constitución de un estado es la primera fuente del Derecho Ambiental.

La segunda fuente, según el tratadista Raúl Brañes está constituida por “la legislación propiamente ambiental, es decir por aquella que se refiere al conjunto de problemas ambientales”, según el mismo tratadista este tipo de legislación no es muy común en América Latina “aunque es clara su tendencia a establecerla (Colombia y Venezuela son los primeros casos, seguidos más tarde por Cuba, Brasil y otros países)”, en el Ecuador la Ley de Gestión Ambiental de 1999, es la primera norma propiamente ambiental . Es más común encontrar una fuente específica de Derecho Ambiental en la legislación sectorial en nuestro caso constituida por las leyes que se refieren a los recursos naturales renovables y no renovables y al saneamiento ambiental (Ley Forestal, Ley de Aguas, Ley de Régimen Municipal, Código de la Salud, Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental).

Como tercera fuente del Derecho Ambiental, Brañes señala a la legislación que regula otros temas y que “a diferencia de la legislación sobre recursos naturales renovables, no tienen un sentido protector del ambiente” aquí estarían incluidos los Códigos Penales, los Códigos de Procedimiento, el Código Civil. Se agregan a estas fuentes toda la legislación que trata el aspecto económico en sentido amplio, las disposiciones de la administración pública que se refieren a la conservación ambiental.

Por otro lado, a diferencia de lo que ocurre con el derecho no ambiental, el derecho internacional es una fuente de gran relevancia para el derecho ambiental a pesar de su carácter de derecho blando o “soft law” como se lo denomina en el derecho anglosajón. Las siguientes declaraciones de las principales conferencias internacionales son base fundamental del actual Derecho Ambiental:

- 1.- La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU promulgada el 10 de diciembre de 1948;
- 2.- La Conferencia Internacional de la Biosfera (Paris 1968);
- 3.- La reunión de la Organización de las Naciones Unidas que en 1972 celebró en Estocolmo la Conferencia sobre el Medio Humano en la que se adoptó el derecho a gozar de un ambiente sano así como el uso del concepto de Eco desarrollo. Se destaca en esta Conferencia la creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Declaración sobre el Medio Humano.
- 4.- La Estrategia Mundial para la Conservación adoptada en 1980 como una Declaración de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que enriqueció el marco teórico de la conservación con los conceptos de desarrollo sostenible o sustentable y el de participación social y;
- 5.-La Carta de la Naturaleza, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 37-7 de 28 de octubre de 1982. Es un documento complementario a la Declaración de Estocolmo;
- 6.-El Informe Brundtland adoptado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo creada por las Naciones Unidas en 1983. Los resultados y las propuestas de esta Comisión se reflejaron en el Informe denominado Nuestro Futuro Común de marzo de 1987. Este informe reconoció el derecho humano fundamental al medio ambiente.

7.-El Acta de Caracas de 18 de mayo de 1991 emitida por el Acuerdo de Cartagena que en el capítulo No.8 “reafirma que la dimensión ambiental es parte integral de los procesos de desarrollo...”

8.-La Reunión de Río de Janeiro, Brasil realizada en Junio de 1992 en la que se perfila la necesidad de un nuevo orden internacional en el campo ambiental y de una amplia participación de la sociedad civil.

Nota: El Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos preparó la “Declaración Americana sobre el Medio Ambiente”. Este documento y otros pueden ser consultados en la Obra del Doctor Galo Leoro Franco “El Proceso Tendiente a un Derecho Ambiental de las Américas” Ministerio de Relaciones Exteriores. 1995.

Entre las fuentes directas del Derecho Ambiental Ecuatoriano constan los primeros decretos conservacionistas para las Islas Galápagos; el Código de la Salud, expedido en 1971 que contiene normas sobre saneamiento y contaminación ambiental, la Ley de Aguas que incluye disposiciones relativas a la contaminación del agua y la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, más tarde se reglamenta su articulado, sin embargo poco o ningún efecto práctico ha tenido esta ley por la falta de apoyo político en su aplicación.

Otra fuente de nuestro Derecho Ambiental constituye La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre promulgada en 1981, que introdujo dentro del sistema legal ecuatoriano conceptos conservacionistas y de manejo sustentable de la flora y fauna silvestres creando políticas que han intentado buscar estructuras que beneficien al cuidado de la biodiversidad a través de un sistema nacional de áreas protegidas.

En 83 se introduce en la Constitución Política el Art. 19 numeral 2 como garantía constitucional de protección ambiental, siendo este el primer intento para regular la conservación y protección del medio ambiente a nivel constitucional.

Las reformas a la Constitución Política de la República, promulgadas en enero de 1996 reforzaron el mandato constitucional del artículo 19 numeral 2, introduciendo una Sección sobre el medio ambiente, además de instituciones de implicación ambiental como la acción de Amparo y la Defensoría del Pueblo.

Con la nueva Constitución Política de la República se incorpora la Sección Segunda sobre el medio ambiente bajo el capítulo V de los derechos colectivos.

Otras normas ambientales ecuatorianas están contenidas en la Ley de Minería y en la Ley de Hidrocarburos y sus Reglamentos.

1.6.2 Características del Derecho Ambiental

Es esencialmente público pero también se relaciona con el derecho civil: bienes comunes, derechos difusos o colectivos, relaciones de vecindad: servidumbres, función social de la propiedad, responsabilidad civil extracontractual.

- Tiene un énfasis preventivo que se aleja de la orientación reparadora.
- Crea nuevos principios: contaminador pagador y el precautelatorio.
- Sustituye el interés subjetivo del patrimonio individual del derecho subjetivo por el reconocimiento del interés colectivo y por los patrimonios comunes.
- Tiene una implicación internacional: aborda problemas que afectan a la Biosfera: efecto invernadero, debilitamiento de la capa de ozono, contaminación de los mares y agotamiento de las pesquerías, pérdida de la biodiversidad, desertificación, lluvia ácida.

- Procura el Desarrollo Sustentable, búsqueda de soluciones solidarias en la resolución de conflictos: lo- cal a lo global, interés comunitario y relaciones norte y sur.

En cuanto a la aplicación del Derecho ambiental, también son importantes los sujetos destinatarios de las normas; porque es más importante el cumplimiento voluntario de las normas que su ejecución, en particular, forzosa. Una de las características más sobresalientes de este Derecho es su función tuitiva o tuteladora, como hemos indicado; función que es la que justifica y legitima la propia existencia de este Derecho. Esta función la cumple el Derecho incluso negándose a sí mismo; renunciando a su juridicidad, entendida como imperatividad. El Derecho pretende convencer más que imponer, para que los sujetos asuman el cumplimiento de los objetivos ambientales y no sea necesario ni imponer ni sancionar su cumplimiento, porque en tales casos, o la eficacia de la imposición se reduce considerablemente o la sanción supone que se ha producido un daño ambiental cuya reparación es difícil o, normalmente, imposible.

El Manual (CEDA, 2004) nos dice lo siguiente:

El Derecho Ambiental posee un carácter preventivo y reparador, más que represivo. A este respecto MARTÍN MATEO (1991: 93) ha afirmado que “aunque el Derecho ambiental se apoya a la postre en un dispositivo sancionador, sin embargo, sus objetivos son fundamentalmente preventivo en el Derecho ambiental la coacción a resulta particularmente ineficaz, por un lado, en cuanto que de haberse producido ya las consecuencias, biológica y también socialmente compensará graves daños, quizá irreparables, lo que es válido también para las compensaciones impuestas imperativamente. Si el objeto del Derecho ambiental es regular las actividades humanas con incidencia ambiental para preservar la naturaleza, es lógico que el Derecho ambiental sea preventivo y reparador, porque se protege mejor la naturaleza evitando que el daño se produzca (máxime cuando es muy frecuente que la reparación de los daños producidos sea muy difícil o imposible) y, caso de haberse producido, que la naturaleza recupere, en la medida de lo posible, su estado original.

El carácter preventivo y reparador del Derecho Ambiental suscita ciertos problemas por su conflicto con la lógica y la mecánica jurídica tradicional. En cuanto a los problemas suscitados por el carácter preventivo, éstos se plantean en dos planos: en el de la estructura jurídica tradicional que vincula regla y castigo a través del acto antijurídico; y cuando, en el segundo plano, el carácter preventivo pone en cuestión la lógica de la casualidad lineal común en el Derecho. En otros términos, el Derecho ambiental pone en cuestión la estructura y la dinámica jurídicas tradicionales. En cuanto a la reparación, el Derecho ambiental reclama una recuperación íntegra, in natura y de todos los daños”. (p. 12, 13).

1.6.3 Derecho Ambiental Internacional

El derecho internacional, es el sistema de leyes que gobierna las relaciones entre los estados. Históricamente, los Estados eran las únicas entidades que gozaban de personalidad legal en el ámbito internacional como entidades que tenían derechos y obligaciones bajo el derecho internacional, pero ahora las organizaciones internacionales, los grupos no gubernamentales, y los individuos están siendo objeto de reconocimiento internacional por algunos estados.

El Manual (CEDA, 2004) Actualmente dice que el enfoque del derecho Internacional Ambiental está en expansión:

“En la segunda guerra mundial, el derecho internacional fue desarrollado especialmente bajo el auspicio de las Naciones Unidas, para incluir el esquema de cooperación internacional y derechos humanos, dentro de un marco de cooperación internacional que cree bases sólidas para asegurar un desarrollo estable desde el punto de vista económico y social, garantizando la paz y la seguridad internacional”.(p. 17)

Las fuentes del Derecho Ambiental Internacional no son sustancialmente distintas a las del Derecho en general. Los tratadistas señalan que la Constitución y demás legislaciones constituyen fuentes del Derecho Ambiental.

Como se estableció anteriormente, el Derecho Ambiental nace del Derecho Internacional, y es por ello que es preciso señalar las Fuentes del Derecho Internacional, las mismas que se encuentran señaladas en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en su artículo 38 y así tenemos:

- Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;
- La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;
- Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; y,
- Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho.

1.6.4 Desarrollo del Derecho Ambiental Ecuatoriano

Las fuentes de las que emana el Derecho Ambiental son equivalentes a las fuentes del Derecho como concepto principal. Se entiende por fuente del Derecho Ambiental a los procesos históricos mediante los cuales el derecho se manifiesta, basado en documentos, costumbres, políticas, etc., de ellos se llega a establecer la normativa ambiental vigente en un lugar y tiempo determinado.

De acuerdo a un orden jerárquico:

- La Constitución de la Republica es la primera fuente del derecho ambiental, ya que de ella emanan todo el resto de las normas que constituyen un Estado.

- Acuerdos y Convenios internacionales
- La legislación ambiental como tal, esto según el tratadista Brañes, en el caso de la legislación sectorial, como leyes de recursos naturales renovables y no renovables y las de saneamiento ambiental.
- Ley Forestal, Ley de Aguas, Ley de Régimen Municipal, Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, entre otras.- Las legislaciones encargadas de regular temas conexos al medio ambiente, legislaciones tales como códigos penales, civiles y los de procedimiento de éstos, por citar algunos,
- Código Civil
- Código Penal
- Texto Unificado de Legislación Ambiental
- Las Ordenanzas Municipales
- La Costumbre, que son reiteraciones en las actuaciones que han llegado a convertirse en prácticas rutinarias.

La Doctrina, ya que es una norma ambiental, puede no encontrarse en un ordenamiento, pero es susceptible de interpretación para prevenir, reparar o reprimir conductas ambientales negativas.

1.6.5 Normativa Ambiental Ecuatoriana

La legislación ecuatoriana, en general, es bastante amplia y en Derecho Ambiental no es la excepción. Para estudiar e interpretar la mencionada legislación es preciso dividir y agrupar los cuerpos normativos en función de su objeto y se los ha organizado según su jerarquía e incidencia en la gestión ambiental actual. Entonces, la división, es la siguiente:

Por el alcance de sus disposiciones:

- Legislación nacional
- Legislación sectorial

➤ Legislación seccional

Por el recurso o problemática que abordan:

- Legislación del agua
- Legislación del suelo
- Legislación forestal
- Legislación de la biodiversidad
- Legislación de la prevención y control de la contaminación

Dentro del tema ambiental es de vital importancia abordar la Ley de Gestión Ambiental, cuyo objeto es la gestión ambiental, entendida ésta como: conjunto de políticas, normas, actividades operativas y administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de vida.

Esta ley está enfocada en la gestión pública ambiental, en la misma se establecen principios, instrumentos de gestión, institucionalidad nacional, mecanismo de coordinación (Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental), etc. Asimismo, su objeto se complementa con las disposiciones concernientes al Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), tomando en cuenta que es una herramienta para otorgar licencias ambientales, regular la participación ciudadana, establecer los procedimientos para el juzgamiento de infracciones, etc.

Respecto de las obligaciones y los contratos, el Código Civil establece las reglas de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, así como las características del daño y sus efectos jurídicos: la obligación de reparar e indemnizar. Estos dos últimos conceptos son importantes en materia ambiental en el tema de responsabilidad de daños al ambiente.

Sin embargo, la responsabilidad civil no nace únicamente por la suscripción de un contrato, sino también por la realización de un hecho, es decir que cuando el daño se produce por el hecho provocado, de igual manera nace la obligación de reparar e indemnizar el daño.

Luego debe considerarse el Código Penal, el cual dedica un capítulo sobre los delitos contra el medio ambiente en el cual se tipifican conductas que deterioran al ambiente y así se encuentran figuras delictivas que tienen relación con la salud humana, para la protección de flora y fauna protegida, normas con respecto a residuos peligrosos, etc. el Código inclusive establece medidas cautelares para el caso en que se estén produciendo daños ambientales y aún se mantienen las contravenciones de segunda clase cuando hay afectación del saneamiento ambiental.

Las más importantes normas reglamentarias vigentes se agrupan en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), ordenada en nueve libros que contienen desde políticas y estructura institucional de la gestión ambiental hasta disposiciones específicas sobre el Régimen de Galápagos y otros recursos naturales, pasando por temas claves como lo forestal, la biodiversidad, y la calidad ambiental.

Cabe finalizar, con la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, misma que es la primera de carácter ambiental que se expidió en el país, en el año de 1976, nace de los esfuerzos paralelos que se iniciaron a escala mundial a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972). Por esa razón ésta rebasa el enfoque de saneamiento ambiental y toma en cuenta los efectos de la contaminación sobre la flora, fauna y, en general, sobre la ecología. El objeto de esta ley fue establecer la institucionalidad y mecanismos para la prevención y control de la contaminación ambiental, para lo cual, instituye prohibiciones.

Toda esta amplia normativa que hemos mencionado sería suficiente para proteger al medio Ambiente de la contaminación, pero con la aplicación correcta de toda esta Normativa en todas las aéreas como la protección de los bosques, la regulación de todas las empresas, con la disminución de los gases emitidos por el transporte en nuestra ciudad, y tener una vida sana libre de contaminación en el respeto mutuo entre los seres humanos y los empresarios.

(Guaranda, 2010) nos dice:

La omisión de la norma, esto es dejar de hacer lo que la norma establece es otro de los elementos que configuran el daño ambiental.

También la omisión puede provenir de la falta de diligencia en temas que aunque una ley no obligue específicamente a actuar, el sujeto está obligado hacerlo, como sucede con el uso de tecnologías de producción aun no prohibidas o reguladas por la ley, como por ejemplo, el bombardeo de nubes para dispersar las lluvias.

Otro elemento a considerar dentro del daño, son los daños naturales, esto es cuando existen daños que no pueden ser consecuencia de la acción u omisión de una persona, como sucede con los desastres o catástrofes naturales, en cuyo caso no se puede atribuir responsabilidad de ningún tipo por las consecuencias del mismo, al menos que, la magnitud de los efectos del daño natural pudieran darse como consecuencia de la falta de previsión o manejo inadecuado del riesgo por parte de la autoridad responsable.

CAPITULO II

GESTIÓN PÚBLICA AMBIENTAL

2.1 Instituciones Públicas en Materia Ambiental

En el Ecuador, la evolución institucional ambiental ha pasado por varias instancias, la gestión ambiental actúa mediante varios esquemas: la dispersión institucional, los departamentos ministeriales, el ministerio especializado, la entidad autónoma especializada y el sistema nacional ambiental.

Los documentos de la Consulta Nacional sobre el Proceso de Desarrollo Sostenible y el Programa 21 contienen acciones para establecer la institucionalidad adecuada desde 1993, según los Acuerdos Internacionales suscritos en aquel tiempo. Lo más importante se dio en septiembre de 1993 que fue la creación de la Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República (CAAM), pero la institucionalidad se fortaleció cuando se creó el Ministerio de Medio Ambiente en 1996, hoy denominado Ministerio del Ambiente.

El Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental nacional, pero su accionar debe estar coordinado con otras esferas del Estado que poseen competencia ambiental porque así se ha dispuesto en leyes especiales. El Ministerio asume estas competencias, a nivel ejecutivo, a través de su Secretaría y, a nivel productivo técnico, por medio de la Dirección Nacional, estableciéndose así una atención regional desconcentrada en la cual se promueven la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales.

Hoy en día, todas aquellas instituciones del Estado que poseen competencia ambiental forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA), el mismo que intenta coordinar e integrar la gestión ambiental en los ámbitos nacionales, provinciales y municipales.

En materia de prevención y control de la contaminación ambiental y para los procesos de evaluación de impactos ambientales existe la Autoridad Ambiental Nacional (AAN), ejercida por el Ministerio del Ambiente, asimismo, encontramos las Autoridades Ambientales de Aplicación (AAA) en las instituciones pertenecientes a la Función Ejecutiva y del Régimen Seccional Autónomo que poseen competencia en materia ambiental.

La Autoridades Ambientales de Aplicación se encuentran divididas en:

Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable (AAAr), las mismas que deben encontrarse acreditadas ante el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) para liderar y coordinar procesos de evaluación de impactos ambientales.

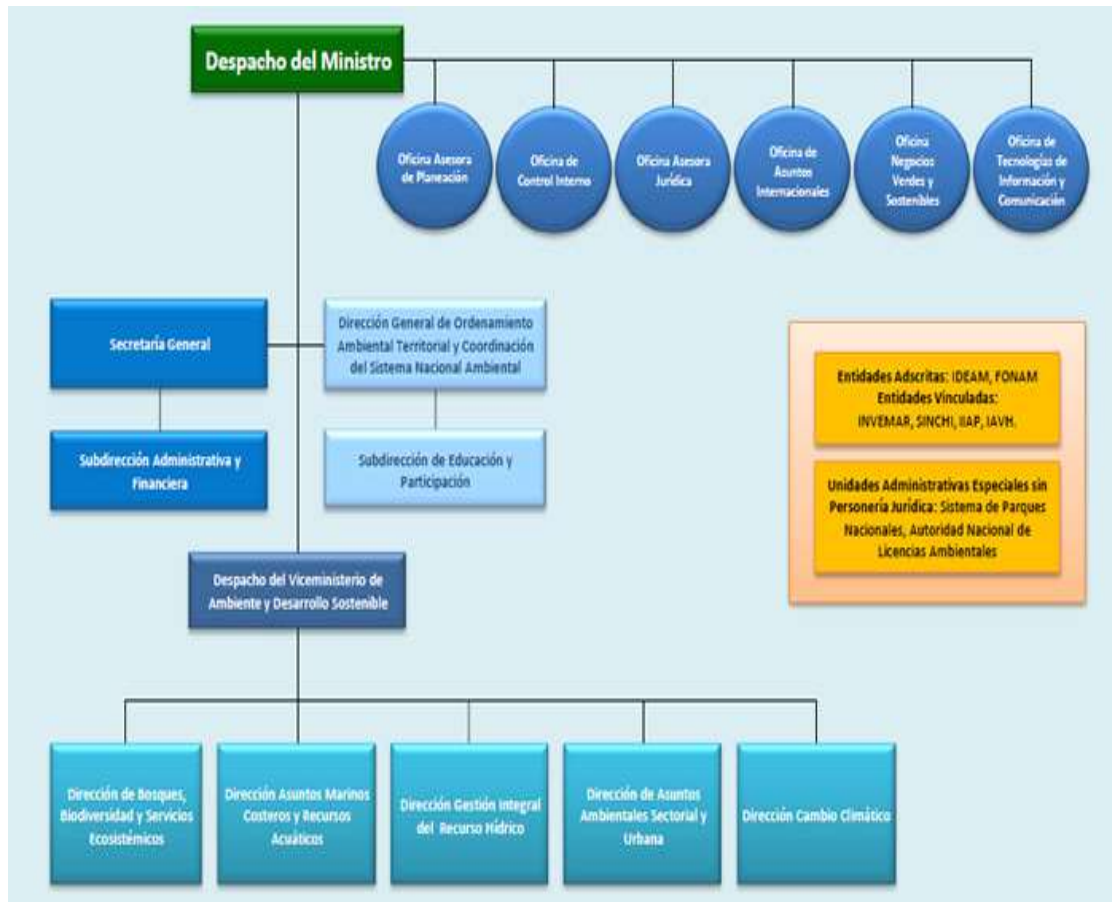
Autoridades Ambientales de Aplicación Cooperantes (AAAC), no necesariamente deben encontrarse acreditadas, pero pueden participar en los procesos de evaluación de impactos ambientales.

La acreditación sirve para certificar la aptitud para evaluar impactos ambientales y por ende ejercer el control como le corresponde a la Autoridad Nacional.

La Pagina Web (<https://www.google.com.ec>)

Gráfico 1

ORGANIGRAMA AMBIENTAL – ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



2.1.1 Autoridad Ambiental Nacional

La (Ley de Gestión Ambiental , 2004) dice:

Art. 8 “La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado.

El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnico administrativo de apoyo, asesoría y ejecución, necesario para la aplicación de las políticas ambientales, dictadas por el Presidente de la República”.

La organización administrativa ambiental es modificada porque tiene que ver con la tradición histórica, los modelos y sistemas políticos de cada país. Históricamente, había una tendencia a la concentración, ahora a la desconcentración, para no afectar la eficacia de las estrategias sectoriales privadas, públicas y de régimen seccional; y de igual manera sucede con las atribuciones ministeriales.

Una de las primeras instituciones ambientales en el Ecuador fue el Comité Interinstitucional de Protección del Ambiente (CIPA), creada mediante la Ley de Control y Prevención de la Contaminación Ambiental, pero nunca tuvo una gran incidencia en el tema. Casi al mismo tiempo se creó la Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República (CAAM) cuyas funciones fueron solamente de asesoría.

La actual Constitución considera a ciertos elementos del medio ambiente y la gestión ambiental como un sector estratégico. El sector estratégico se define como un área de gestión productiva cuya administración está en manos del Estado. Para efectos de la gestión ambiental, el Ministerio del Ambiente tiene la obligación de emitir las políticas adecuadas de conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integración del patrimonio genético, además establece los mecanismos de control y prevención de la contaminación ambiental, el aprovechamiento de los recursos naturales, el ambiente humano, el desarrollo de actividades productivas y de servicios, migración de riesgos y desastres naturales trópicos y otros.

En materia medioambiental el Estado considera como sectores estratégicos a los recursos naturales no renovables, la biodiversidad, el agua y los demás que determine la Ley, en este sentido el Estado se reserva el derecho de administrar, controlar, regular y gestionar dichos sectores a causa de la propiedad que ostenta el mismo.

La Ley de Gestión Ambiental, por su parte establece que la Autoridad Ambiental Nacional es el Ministerio del Ambiente y este es el que regula al Sistema Nacional descentralizado de Gestión Ambiental.

El Ministerio del Ambiente tiene expuestas sus atribuciones en el artículo 9 de la Ley de Gestión Ambiental y entre ellas tenemos la facultad de dirimir conflictos de competencia entre las instituciones del SNDGA, siempre y cuando no sea el propio Ministerio parte del conflicto, en este caso dirimirá el Procurador General del Estado.

Existen leyes y reglamentos que entregan otras competencias al MAE, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 49 de Libro VI de la Calidad Ambiental del TULAS, entre estas atribuciones se establecen determinar la eficacia del sistema de control de las instituciones del SNDGA, evaluar el cumplimiento de los planes y programas para la prevención y control de la contaminación ambiental, iniciar acciones administrativas, entre otras.

Por lo tanto, la Autoridad Ambiental Nacional es el Ministerio del Ambiente, y es este el que debe controlar las actividades que puedan afectar al ambiente, principalmente en materia de exploración y explotación de los recursos naturales no renovables. Existen otras actividades que han sido delegadas a los gobiernos seccionales autónomos, tanto provinciales las prefecturas, como cantonales que son los municipios.

2.1.2 El Ministerio del Ambiente

El Ministerio del Ambiente del Ecuador es la cartera de Estado o ministerio encargada de la política ambiental del Ecuador.

Es la autoridad ambiental del Ecuador, que ejerce el rol rector de la gestión ambiental, que permita garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado con el objetivo de hacer del país, una nación que conserva y usa sustentablemente su biodiversidad, mantiene y mejora su calidad ambiental, promoviendo el desarrollo sustentable y la justicia social, reconociendo al agua, suelo y aire como recursos naturales estratégicos.

La pagina web ([http://es.wikipedia.org/wiki/ Ministerio de Ambiente del Ecuador](http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Ambiente_del_Ecuador)) nos dice:

El Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador, “fue creado por el presidente Abdalá Bucaram, el 4 de octubre de 1996 mediante decreto ejecutivo. El 28 de enero de 1999, se fusionan en una sola entidad el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN), dando como entidad resultante el Ministerio de Medio Ambiente”.

De acuerdo al Art.9 de la ley de Gestión Ambiental le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente las siguientes funciones:

- a)** Elaborar la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y los planes seccionales;
- b)** Proponer, para su posterior expedición por parte del Presidente de la República, las normas de manejo ambiental y evaluación de impactos ambientales y los respectivos procedimientos generales de aprobación de estudios y planes, por parte de las entidades competentes en esta materia;
- c)** Aprobar anualmente la lista de planes, proyectos y actividades prioritarios, para la gestión ambiental nacional;
- d)** Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar normas técnicas, manuales y parámetros generales de protección ambiental, aplicables en el ámbito nacional; el régimen normativo general aplicable al sistema de permisos y licencias de actividades potencialmente contaminantes, normas aplicables a planes nacionales y normas técnicas relacionadas con el ordenamiento territorial.
- e)** Determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran someterse al proceso de aprobación de estudios de impacto ambiental.
- f)** Establecer las estrategias de coordinación administrativa y de cooperación con los distintos organismos públicos y privados.

- g)** Dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre los organismos integrantes del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental; la resolución que se dicte al respecto causará ejecutoria. Si el conflicto de competencia involucra al Ministerio del ramo, éste remitirá el expediente al Procurador General del Estado, para que resuelva lo pertinente. Esta resolución causará ejecutoria.
- h)** Recopilar la información de carácter ambiental, como instrumento de planificación, de educación y control. Esta información será de carácter público y formará parte de la Red Nacional de Información Ambiental, la que tiene por objeto registrar, analizar, calificar, sintetizar y difundir la información ambiental nacional.
- i)** Constituir Consejos Asesores entre los organismos componentes del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental para el estudio y asesoramiento de los asuntos relacionados con la gestión ambiental, garantizando la participación de los entes seccionales y de la sociedad civil.
- j)** Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes.
- k)** Definir un sistema de control y seguimiento de las normas y parámetros establecidos y del régimen de permisos y licencias sobre actividades potencialmente contaminantes y la relacionada con el ordenamiento territorial.
- l)** Regular mediante normas de bioseguridad, la propagación, experimentación, uso, comercialización e importación de organismos genéticamente modificados.
- m)** Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas y en acciones concretas que se adopten para la protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales; y,
- n)** Las demás que le asignen las leyes y sus reglamentos.

2.1.3 Municipio del Distrito Metropolitano Quito

El Distrito Metropolitano de Quito es la jurisdicción formada sobre la base del Municipio de la capital de la República, fundada en 1534, con el nombre de San Francisco de Quito y sus localidades cercanas, sede del poder político nacional de nuestro País. El Distrito Metropolitano de Quito se divide en 8 administraciones zonales, las cuales contienen a 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas. Las parroquias urbanas están divididas en barrios. En 1993 fue promulgado la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, según la cual el Municipio capitalino asumió más competencias, como la del transporte que en esa época era responsabilidad del Gobierno Nacional. Hoy con la Constitución del 2008, a Quito como Distrito Metropolitano le corresponde asumir las competencias de los gobiernos cantonales, provinciales y regionales. En Ecuador a raíz de la promulgación de la Constitución del 2008 se creó una nueva unidad territorial llamada región, por lo que el país está dividido en 9 regiones y distritos autónomos, 2 distritos metropolitanos autónomos y uno de régimen especial (Galápagos).

El Distrito Metropolitano de Quito colinda con el pequeño cantón Rumiñahui, cuyo municipio se asienta en la localidad de Sangolquí. Su jurisdicción incluye buena parte del Valle de los Chillos, considerado un suburbio de la capital, y su población es de 2.325 043, sin embargo no obstante estas divisiones administrativas, miles de personas que trabajan en Quito viajan diariamente del Valle al Distrito Metropolitano de Quito, al que se conecta por medio de la autopista General Rumiñahui.

El Alcalde Metropolitano de Quito es la máxima autoridad administrativa y política del Distrito Metropolitano de Quito, es la cabeza del Cabildo y representante del Municipio. El Alcalde Metropolitano lidera el poder ejecutivo del Gobierno Autónomo Metropolitano.

Entre otros poderes y responsabilidades, la actual Constitución de la República del Ecuador encarga al alcalde metropolitano de Quito, la autoridad de administración acompañado de un Concejo Metropolitano conformado por 15 concejales, del cual formará parte, lo presidirá y, tendrá voto dirimente. También puede formar parte del Consejo Provincial de Pichincha como miembro, aunque se puede nombrar a un Concejale Metropolitano. El Alcalde Metropolitano puede asumir funciones del Gobernador Regional y del Prefecto Provincial dentro del Distrito.

El Concejo Metropolitano de Quito ejerce el poder legislativo del Distrito Metropolitano de Quito para expedir ordenanzas, resoluciones y acuerdos. Es un órgano unicameral, compuesto por Concejales Metropolitanos elegidos para un periodo de 4 años mediante sufragio divididos entre 12 Concejales Urbanos y 3 Concejales Rurales, cada concejal metropolitano preside una comisión.

El Distrito Metropolitano de Quito está dividido en Administraciones Zonales cuyas funciones son el descentralizar los organismos institucionales, así como también mejorar el sistema de gestión participativa. Cada una es dirigida por un administrador zonal designado por el Alcalde Metropolitano el cual es responsable de ejecutar las competencias de la urbe en su sector. Actualmente existen ocho Administraciones Zonas, las cuales abarcan todo el territorio del distrito metropolitano A su vez estas se fraccionan en parroquias, 32 urbanas (ciudad), 33 rurales y suburbana.

Las 8 Administraciones Zonales del Distrito Metropolitano de Quito

Tabla 1

LAS 8 ZONAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
1. Administración Zonal La Delicia
2. Administración Zona Calderón
3. Administración Zona Norte Eugenio Espejo
4. Administración Zona Centro Manuela Sáenz
5. Administración Zona Sur Eloy Alfaro
6. Administración Zona de Tumbaco
7. Administración Zona Valle de Los Chillos
8. Administración Zona Quitumbe

Todas estas zonas se les han dividido para realizar una mejor atención al ciudadano en vista de que cada día crece más la ciudad por ende sus habitantes, por lo cual se ha hecho de sectorizar para realizar todos los trámites, por que antes se realizaban todo en el centro de la Capital ([http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio de Ambiente del Ecuador](http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Ambiente_del_Ecuador))

Gráfico 2

El Mapa de las ocho zonas del Distrito Metropolitano de Quito



Cada Zona Metropolitana o Administración Zonal del Distrito Metropolitano de Quito está dividida en 65 parroquias, 32 urbanas que conforman la ciudad de Quito y la cabecera del Distrito y 33 parroquias rurales.

Parroquias Urbanas de Quito

Tabla 2

Belisario Quevedo	El Inca	Magdalena
Carcelén	Guamaní	Mariscal Sucre
Centro Histórico	Iñaquito	Ponceano
Chilibulo	Itchimbia	Puengasi
Chillogallo	Jipijapa	Quitumbe
Chimbacalle	Kennedy	Rumipamba
Cochapamba	La Argelia	San Bartolo
Comité del Pueblo	La Ecuatoriana	San Juan
Concepción	La Ferroviaria	Solanda
Cotocollao	La Libertad	Turubamba
El Condado	La Mena	

Parroquias Rurales y Suburbanas

Tabla 3

Alangasí	Amaguaña	Atahualpa
Calacali	Calderón	Conocoto
Cumbaya	ChavezPamba	Checa
Quinche	Gualea	Guangopolo
Guayabamba	La Merced	Llano chico
Lloa	Nanegal	Nanegalito
Nayon	Nono	Pacto
Perucho	Pifo	Pintag
Pomasqui	Puellaro	Puembo
San Antonio de Pichincha	San José de Minas	Tababela
Tumbaco	Yaruquí	Zámbiza

Los barrios de Quito son la división política, y administrativa, más pequeña de la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito. Los habitantes de la urbe tradicionalmente la han dividido en cuatro grandes segmentos, los cuales abarcan en gran medida su territorio, estos son: el norte, conformado en su límite septentrional por las parroquias de Carcelén y el Condado y en el austral por Belisario Quevedo y Mariscal Sucre; el centro, compuesto por Centro histórico, San Juan e Itchimbia; el sur, en el cual en su extremo norte están halladas Magdalena, Chilibulo y Puengasí y en su borde meridional Guamaní y Turubamba; y los valles, que pese a no formar parte de la ciudad de San Francisco de Quito, componen el Distrito Metropolitano.

Las parroquias urbanas que conforman esta división no oficial, suelen subdividirse en barrios. A su vez, estos por encontrarse a diferente altitud pueden adquirir el término de bajo o alto según corresponda, sin ser por ello renombrados; así, un barrio como el Batán, dependiendo el lugar al que se refiera el interlocutor, puede ser calificado como alto o bajo esta práctica solo se utiliza en los lugares cuyas construcciones estén sobre laderas. Generalmente los habitantes suelen guiarse por esta práctica y por ello los límites geográficos de un determinado barrio están sujetos a la opinión que cada ciudadano tiene sobre él, ya que actualmente no existe una demarcación específica determinada por el Municipio de la ciudad.

Dentro de las competencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la constitución de la República del 2008 nos dice:

(La Contitucion de la República , 2008) nos dice:

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural.
2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.
3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.
5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras.
6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal.
7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.
8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines.
9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.
10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley.
11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas.
12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.
13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios.
14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales.

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito está estructurado por el Alcalde Metropolitano de Quito, quien preside el Concejo Metropolitano, escoge a Administradores Zonales, Directores Metropolitanos, Gerentes de Institutos, Agencias y Empresas Metropolitanas. El Alcalde Metropolitano de Quito es la máxima autoridad administrativa y

política del Distrito Metropolitano de Quito. Es la cabeza del cabildo y representante del Municipio. El Alcalde Metropolitano lidera el poder ejecutivo del Gobierno Autónomo Metropolitano.

Entre otros poderes y responsabilidades, la actual Constitución de la República del Ecuador encarga a los Alcaldes Metropolitano de Quito, la autoridad de administración acompañado de un Concejo Metropolitano conformado por 15 concejales, del cual formará parte, lo presidirá y, tendrá voto dirimente. También puede formar parte del Consejo Provincial de Pichincha como miembro, aunque se puede nombrar a un Concejales Metropolitano. El Alcalde Metropolitano puede asumir funciones del Gobernador Regional y del Prefecto Provincial dentro del Distrito. El Concejo Metropolitano de Quito ejerce el poder legislativo del Distrito Metropolitano de Quito para expedir ordenanzas, resoluciones y acuerdos. Es un órgano unicameral, compuesto por Concejales Metropolitanos elegidos para un periodo de 4 años mediante sufragio divididos entre 12 Concejales Urbanos y 3 Concejales Rurales, cada Concejales Metropolitano preside una comisión.

Las Secretarías Metropolitanas son las encargadas de dictar políticas públicas para el distrito y vigilar su ejecución en materias específicas. Actualmente en Quito existen 12 Secretarías Metropolitanas que enunciamos a continuación:

- Secretaría General de Planificación
- Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad
- Secretaría de Comunicación
- Secretaría de Ambiente
- Secretaría de Coordinación Territorial y Participación
- Secretaría de Educación
- Secretaría de Cultura
- Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad
- Secretaría de Movilidad
- Secretaría de Inclusión Social
- Secretaría de Salud
- Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda

La Administración General

Es la encargada de Administrar todos los bienes del Municipio y del Distrito. Es la encargada de las Direcciones:

- Dirección Metropolitana Financiera
- Dirección Metropolitana Administrativa
- Dirección Metropolitana Financiera Tributaria
- Dirección Metropolitana de Recursos Humanos
- Dirección Metropolitana de Catastro
- Dirección Metropolitana de Informática
- Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos

Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos. Las Administraciones Zonales el Distrito Metropolitano de Quito, está dividido en 8 Administraciones cuyas funciones son el descentralizar los organismos institucionales, así como también mejorar el sistema de gestión participativa. Cada una es dirigida por un administrador zonal designado por el alcalde, el cual es responsable de ejecutar las competencias de la urbe en su sector.

2.1.3.1 La Secretaria de Ambiente y Agencia Metropolitana de Control

La Secretaría de Ambiente, es la autoridad rectora de la gestión ambiental integral en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito, y como tal, determina con la participación ciudadana políticas, estrategias, directrices, normas y ejerce control para contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes a base de una cultura de respeto e integración social al ambiente natural y construido.

En el año de 1989, el Municipio de Quito crea una unidad dedicada al desarrollo de proyectos ambientales, administración del Plan de Manejo de la Calidad Ambiental y del Plan Director de Residuos Sólidos. Dos años más tarde y bajo la firme premisa de continuar y ampliar

estas actividades, se conforma el Departamento de Control de la Calidad Ambiental, área que sumada al Laboratorio de Control Ambiental, constituye la nueva Dirección Metropolitana de Medio Ambiente hoy Secretaría de Ambiente.

A finales de la década de los noventa, se marcan varios hitos importantes a nivel institucional, resumidos en la expedición de ordenanzas, desarrollo técnico y operativo del control de la contaminación atmosférica, generada en gran medida por fuentes móviles, y fuentes fijas de contaminación, estudios de diagnóstico de los principales problemas ambientales de la ciudad de Quito y sus áreas de influencia, consolidándose de esta manera la gestión de la actual Secretaría de Ambiente.

Para inicios de la última década, la entonces Dirección Metropolitana Ambiental se veía encaminada hacia una gestión cada vez más enfocada en la mejora de procesos que le permitieran ejercer su rol de ente regulador del control ambiental en el Distrito. Es así que durante los últimos años, esta institución, gracias a la labor de su capital humano, fortalece su accionar mediante la constante evaluación de las necesidades ambientales del Distrito.

La Contaminación y el deterioro de la calidad del aire dentro del perímetro urbano, de acuerdo a los resultados de diferentes encuestas realizadas de percepción ciudadana, es el principal problema ambiental de la ciudad. Está vinculado principalmente a la calidad de los combustibles, lo cual se agrava por el incremento del parque automotor, el crecimiento urbano y la preferencia de la población por el transporte privado. El 66% de los contaminantes primarios (CO , SO_2 , NO_x , PM_{10} , $\text{PM}_{2.5}$, COVNM , NH_3) son ocasionados por emisiones vehiculares. Frente a este problema, la respuesta institucional del Distrito Metropolitano Quito ha sido amplia como se puede observar en el Anexo 5.3, destacándose la Revisión Técnica Vehicular y la medida de restricción del Pico y Placa. A pesar del esfuerzo desplegado por el Municipio desde el año 2004 para disminuir la concentración de contaminantes en la ciudad, aún no se ha alcanzado a cumplir la norma nacional para el parámetro Material Particulado 2.5, ocasionado especialmente por las emisiones de vehículos a diesel. Con respecto a la contaminación acústica, el cumplimiento de la norma en fuentes fijas reportado por el sector de impacto significativo es de 42%; en las campañas de monitoreo que se realizan anualmente, 7 de las 8 Administraciones Zonales superan los 65 decibeles, principalmente por el transporte pesado y por el uso indiscriminado de dispositivos sonoros. Contaminación acústica, término que hace

referencia al ruido cuando éste se considera como un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para una persona o grupo de personas.

Podemos citar algunas causas principales de la contaminación acústica es la actividad humana como: el transporte, la construcción de edificios y obras públicas, la industria, entre otras. Los efectos producidos por el ruido pueden ser fisiológicos, como la pérdida de audición, y psicológicos, como la irritabilidad exagerada. El ruido se mide en decibelios (dB); los equipos de medida más utilizados son los sonómetros. Un informe publicado en 1995 por la Universidad de Estocolmo para la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera los 50 dB como el límite superior deseable. Además, cada país ha desarrollado la legislación específica correspondiente para regular el ruido y los problemas que conlleva.

El Distrito Metropolitano de Quito es una de las pocas ciudades capitales en América Latina que no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales; es decir, las descargas de aguas servidas van a través del sistema de alcantarillado, o directamente, a los ríos y quebradas. Por otro lado, a pesar de contar con una cobertura del servicio de agua potable del 96%, la sostenibilidad de este recurso será posiblemente uno de los principales retos ambientales de la ciudad en el futuro debido al incremento en la demanda, el cambio climático y la degradación de páramos y bosques protectores que son las principales fuentes abastecedoras del recurso. El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con reservas alternativas como yacimientos de agua subterránea, los cuales están expuestos a una alta vulnerabilidad ante vertidos contaminantes. La gestión del Municipio ha permitido un control de las descargas no domésticas del sector productivo, sin embargo persisten incumplimientos de la normativa.

La cobertura de recolección y la falta de tratamiento y reciclaje de la basura se percibe como el segundo problema ambiental más importante que tiene el Municipio. Quito genera diariamente más de 1.800 toneladas de basura (0,85kg/día por persona), que son recolectados sin una diferenciación que permita recuperar las fracciones potencialmente valorizables. Se estima que existen 5.000 recicladores informales directamente relacionados al proceso de recuperación de residuos. El Distrito Metropolitano genera aproximadamente 3.000 m³ de escombros, así como también residuos especiales, industriales y peligrosos entre los que se encuentran los residuos hospitalarios potencialmente infecciosos y dañinos a la salud de nuestra ciudad, podemos citar los siguientes:

Por peligrosidad se clasifican en:

- 1. Explosivos.** Son aquellas sustancias o preparados que pueden explosionar bajo el efecto de una llama o que son más sensibles a los choques o a la fricción que el trinitobenceno.
- 2. Comburentes.** Son sustancias sin preparados que en contacto con otros particularmente los inflamables, originan una reacción fuertemente exotérmica.
- 3. Extremadamente inflamables.** Sustancias y preparados líquidos cuyo punto de destello sea inferior a 0°C y su punto de ebullición inferior o igual a 35°C.
- 4. Fácilmente inflamables.**
- 5. Inflamables.**
- 6. Tóxico o muy tóxicos.** Aquellas que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan entrañar riesgos extremadamente graves, agudos o crónicos e incluso la muerte.
- 7. Nocivos.** Aquellas sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan entrañar riesgos de gravedad limitadas.
- 8. Corrosivos.** Aquellos que en contacto con los tejidos vivos puedan ejercer sobre ellos una acción destructiva.
- 9. Irritantes.** Sustancias y preparados no corrosivos que por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o mucosas pueden provocar una reacción inflamatoria.
- 10. Peligrosos para el medio ambiente.**
- 11. Carcinogénicos.**
- 12. Teratogénicos.** Serían las sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden inducir lesiones en el feto durante su desarrollo intrauterino.
- 13. Mutagénicos.** Sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden introducir alteraciones en el material genético de las células.

Entre las respuestas más visibles se encuentra la aprobación de las ordenanzas 213 y 332 y la calificación de gestores ambientales tecnificados que han favorecido el manejo adecuado de más de 200 mil toneladas de residuos comunes y 14.250 toneladas por año de residuos peligrosos, principalmente en el sector industrial y 1.600 toneladas anuales de residuos potencialmente infecciosos provenientes de establecimientos de salud.

La expansión de la mancha urbana y la baja densificación de la población inciden en el uso y ocupación del territorio provocando una demanda constante por servicios y accesibilidad. En el Distrito Metropolitano coexisten actividades productivas y residenciales, lo cual genera problemas sociales por la exposición permanente a las externalidades del sector productivo. En este sentido, se espera en el mediano y largo plazo el desarrollo de varias zonas industriales. Cabe citar además la explotación de materiales pétreos en sectores como San Antonio de Pichincha, Píntag y Lloa, donde subsisten conflictos socio-ambientales con una clara necesidad de gestionar un cierre técnico y el tratamiento de pasivos ambientales generados.

El liderazgo del Municipio del Distrito Metropolitano Quito deberá apuntar hacia la consolidación y el cumplimiento de normas y estándares nacionales e internacionales para minimizar el impacto al ambiente, dado que los retos presentados repercuten de manera directa en la salud de la población, profundizan la exclusión social en la ciudad y afectan la competitividad del Distrito Metropolitano Quito.

La Dirección Metropolitana de Gestión de la Calidad Ambiental de la Secretaría de Ambiente, está conformada por tres unidades, Licenciamiento, Fiscalización y Mejoramiento Continuo, Uso Sustentable de los Recursos, busca garantizar el uso sustentable de los recursos naturales del Distrito Metropolitano de Quito, los derechos ciudadanos y de la naturaleza y la provisión de servicios públicos y ambientales con un enfoque ecosistémico. A continuación se mencionan las actividades y finalidad de cada una de las unidades de la Dirección.

Unidad de Licenciamiento es la encargada de los procesos de licenciamiento y certificación ambiental de los proyectos o establecimientos del DMQ, así como también del seguimiento al cumplimiento de planes de manejo ambiental y lineamientos ambientales por parte de

los sujetos de control; su finalidad es verificar la aplicación de la normativa ambiental vigente, dentro del marco de los capítulos IV y V de la Ordenanza Metropolitana No. 213.

La unidad de Fiscalización, es la encargada de la supervisión, control y fiscalización de los proyectos o establecimientos del Municipio Capitalino. Además, participa en comisiones y delegaciones técnicas y emite criterios técnicos.

Supervisa mensualmente el servicio de recolección y barrido de 7 Juntas Parroquiales: Pifo, Tababela, Yaruquí, El Quinche, Nayón, Nanegal, Gualea; así como también la operación y manejo realizado en el Relleno Sanitario de Quito. Esta última actividad ha sido intensa durante los dos últimos años y sobre todo, durante la etapa de transición de la administración del RSQ a la Empresa de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Controla el cumplimiento ambiental, basado en la atención a las denuncias ciudadanas que comprende la realización de inspecciones, emisión de informes técnicos y direccionamiento de los trámites a los entes de juzgamiento y sanción, según proceda el caso.

Supervisa y fiscaliza aleatoriamente las actividades realizadas por los gestores ambientales en todas sus categorías actuales artesanales, artesanales tipo mediano, tecnificados; por las Entidades de Seguimiento (Auditoría Ambiental, Ricthisarm, Aldir, Congeminpa, Asforum, Renssol Group, SGS del Ecuador; por los Laboratorios actividad que se pretende realizar este año.

Unidad de Mejoramiento Continuo - Uso Sustentable de los Recursos, es la responsable de analizar, calificar y coordinar las mejores prácticas ambientales en el Manejo Integral de Desechos, a través de la calificación de gestores ambientales, coordinación de proyectos de recolección selectiva e inclusión social y mecanismos de producción más limpia en el sector productivo del Distrito Metropolitano de Quito y la elaboración del Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos. “Con respecto al mejoramiento de la calidad del aire, las actividades que se están desarrollando son campañas de monitoreo de la calidad del combustible expedido en el Municipio de Quito, proyecto Retrofit, pruebas de convertidores catalíticos para reposición de tres vías y apoyo a la investigación de proyectos que contribuyan a la reducción de emisiones

contaminantes provenientes de fuentes móviles terrestres. Con el desarrollo de estas actividades se fomenta la prevención, control y mitigación de la contaminación ambiental y por lo tanto se contribuye con la protección de la calidad ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida en el Distrito Metropolitano de Quito.

Cambio Climático en los últimos años en el Distrito Metropolitano de Quito se ha visto afectado por inundaciones, sequías y deslizamientos de tierra producto de la contaminación constante que sufre el medio ambiente por parte de quienes en él lo habitamos de una forma irrespetuosa para el mismo. “Se estima que entre 1891 y 1999, la temperatura media en la parte urbana del Distrito aumentó entre 1,2°C y 1,4°C, mientras que la precipitación presentó una tendencia general al decrecimiento”. Los cambios en la temperatura y los patrones de precipitación, junto con un aumento en la intensidad y frecuencia de eventos extremos, afectan directa e indirectamente a los ecosistemas frágiles (como los páramos y bosques tropicales), así como a la disponibilidad de agua, la salud humana, la seguridad alimentaria, la infraestructura y la generación hidroeléctrica, entre otros.

En respuesta al desafío ambiental, social y económico que representa el cambio climático, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito adoptó en 2009 la estrategia Quiteña al Cambio Climático. La Estrategia tuvo como objetivo desarrollar políticas integrales que garanticen la implementación de medidas adecuadas, transversales y equitativas de adaptación y mitigación al cambio climático; generando metodologías e instrumentos de gestión apropiados, en el marco de una amplia participación.

La página Web (<http://www.quitoambiente.gob.ec>) sobre el clima en el Distrito Metropolitano nos dice lo siguiente:

El Plan de Acción Climático de Quito 2012-2016 constituye el siguiente paso en la construcción de un modelo de gestión local de cambio climático que enfrenta los que impone el calentamiento global y aprovecha las oportunidades generadas para promover un cambio tecnológico, productivo y económico, generando además una cultura ambiental”.

Agencia Metropolitana de Control (AMC).- Ese crea mediante la Ordenanza Metropolitana 321 sancionada el 10 de octubre de 2010, como un organismo de control y sanción por los diversos incumplimientos que se presentan en la sociedad por parte de los diferentes actores, en diversas materias en el diario vivir en el DMQ; esta Agencia es la encargada de velar por el fiel cumplimiento en el MDMQ de lo prescrito en el ordenamiento jurídico metropolitano(ordenanzas) expedidas por el Consejo Metropolitano; que en lo referente a la protección al ambiente de tiene sus propias unidades especializadas para realizar el control necesario, tomar las medidas cautelares necesarias e iniciar un proceso de sanción en cuanto al conocimiento de una presunta infracción en contra del ambiente.

Es un organismo desconcentrado con autonomía administrativa y financiera, adscrito a la Alcaldía del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, encargado de ejercer la potestad administrativa sancionatoria y fortalecer el principio de autoridad pública, mediante la implementación de un nuevo modelo de gestión. Actualmente la Agencia está a cargo de la administración de las Comisarías Metropolitanas y la Unidad Técnica de Control de Construcciones, que deberán ser reemplazadas por agencias desconcentradas de Control para dar cumplimiento a las leyes y ordenanzas que garanticen el ejercicio del buen vivir en la ciudadanía.

La misión de la Agencia Metropolitana de control es la de ejercer las potestades de inspección, instrucción, resolución y ejecución en el Distrito Metropolitano de Quito, con énfasis en la prevención y disuasión, fomentando la participación ciudadana para el proceso de construcción del buen vivir.

Funciones de la Agencia Metropolitana de Control.- El Artículo 4 de la Ordenanza 321 en el Capítulo II nos dice textualmente las funciones de la Agencia Metropolitana de Control. La Agencia Metropolitana de Control es el organismo desconcentrado, con autonomía financiera y administrativa y adscrita a la Alcaldía Metropolitana de Quito.

(Ordenanza 321 Art. 5) nos dice lo siguiente:

Según la Ordenanza 321 en su Art. 5.- Potestades y Competencias.

1. A la Agencia Metropolitana de Control le corresponde el ejercicio de las potestades de inspección general, instrucción, resolución y ejecución en los procedimientos administrativos sancionadores atribuidas en el ordenamiento jurídico al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Podrá ejercer además, las potestades de inspección técnica que se le atribuyan mediante Resolución Administrativa.

2. La Agencia Metropolitana de Control, para el ejercicio de las potestades que tiene atribuidas, actuará a través de los órganos y con las funciones que le confiere el orgánico funcional del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, procurando los mayores niveles de coordinación “Con todos los órganos y organismos de la Administración del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

3. La Agencia Metropolitana de Control ostentará las prerrogativas de las que goza el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y podrá contar, incluso, con el auxilio de la Fuerza Pública para la realización de su cometido.

4. La Agencia Metropolitana de Control actuará conforme a los procedimientos administrativos previstos en el ordenamiento jurídico metropolitano.

5. La Agencia Metropolitana de Control desarrollará sus funciones tanto mediante actuaciones propias como a través de la cooperación. Podrá adoptar acuerdos y convenios o contratos con otras entidades públicas y privadas, sin que esto implique delegación de la potestad sancionadora y de control.

Por lo que se denota que se reviste legalmente de exorbitantes potestades administrativas a la Agencia Metropolitana de Control dentro de los procesos administrativos sancionadores que inicie frente a los diferentes incumplimientos que constituyen infracciones a la normativa metropolitana en el DMQ.

La (Ordenanza 321 Art. 6) nos dice:

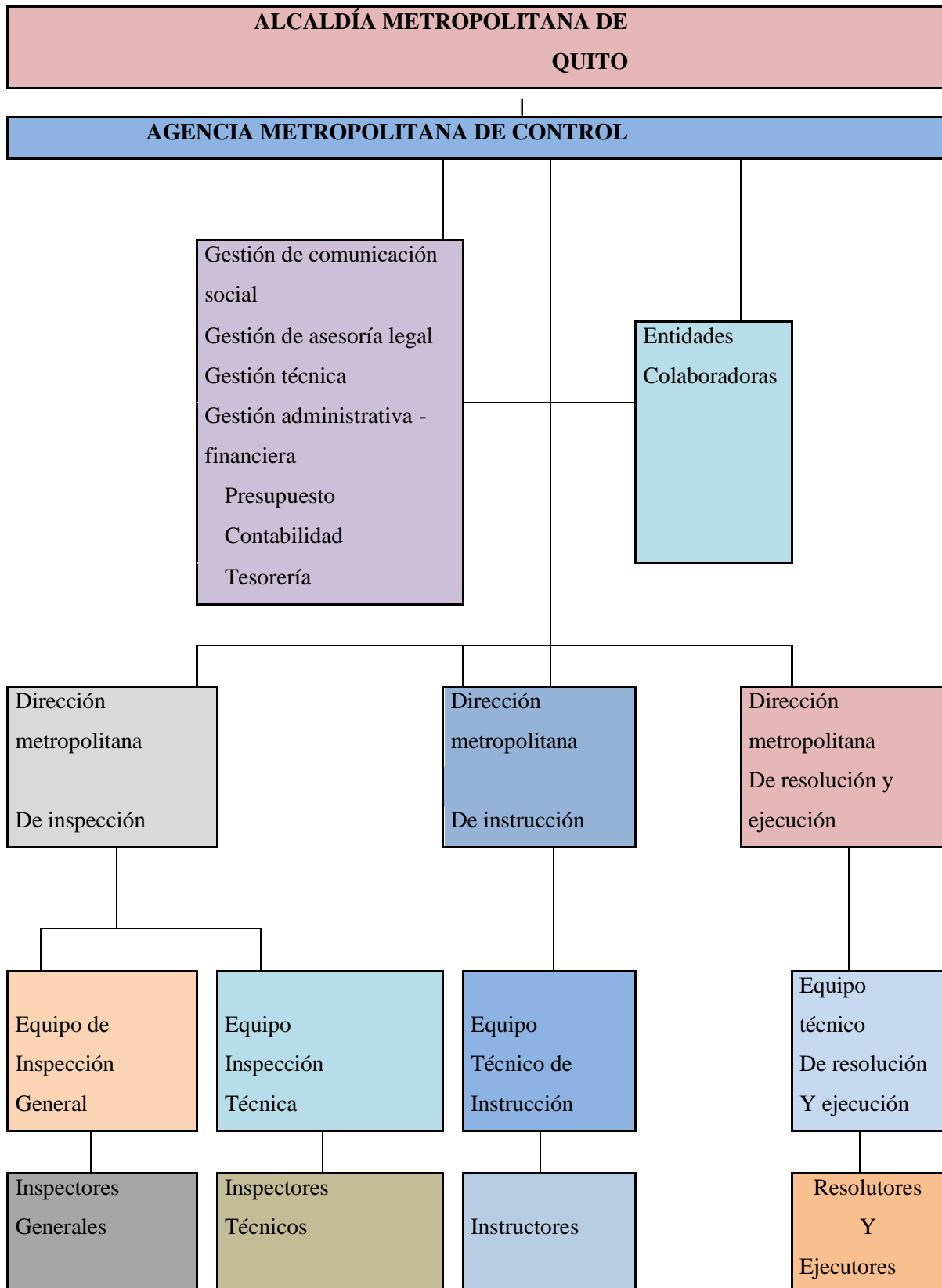
La Ordenanza 321 en su Art. 6.- Representación Institucional dice:

1. La Agencia Metropolitana de Control estará a cargo de un Supervisor Metropolitano, designado por el Concejo Metropolitano de una terna que proponga el Alcalde. El cargo de Supervisor Metropolitano es de libre remoción.

2. Para ser Supervisor Metropolitano se requiere ser profesional de tercer nivel en Derecho o Auditoría, con experiencia no menor a ocho años y tener probidad notoria.

1. El Supervisor Metropolitano, sin perjuicio de las funciones que le correspondan según el Reglamento Orgánico Funcional del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, le corresponde la representación institucional de la Agencia Metropolitana de Control.

Gráfico 3



2.1.3.2 Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA)

Consta en el libro VI de la calidad ambiental en el Título I Del Sistema Único de Manejo Ambiental en los siguientes Artículos:

El (Texto Unificado de la legislación Ambiental Secundaria (TULAS) Art.1) nos dice lo siguiente:

El Art. 1 El Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria define al SUMA como “un conjunto de elementos mínimos que constituyen un sub-sistema de evaluación de impactos ambientales al ser aplicados en las instituciones integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.

Art. 1.- Propósito y ámbito.- Reglamentase el Sistema Único de Manejo Ambiental señalado en los artículos 19 hasta 24 de la Ley de Gestión Ambiental, en lo referente a: marco institucional, mecanismos de coordinación interinstitucional y los elementos del subsistema de evaluación de impacto ambiental, el proceso de evaluación de impacto ambiental, así como los procedimientos de impugnación, suspensión revocatoria y registro de licencias ambientales.

El presente Título establece y define el conjunto de elementos mínimos que constituyen un subsistema de evaluación de impactos ambientales a ser aplicados en las instituciones integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.

Un subsistema de evaluación de impactos ambientales abarca el proceso de presentación, revisión, licenciamiento y seguimiento ambiental de una actividad o un proyecto propuesto.

El (Texto Unificado de la legislación Ambiental Secundaria (TULAS) Art. 2) dice:

Art. 2.- Principios.- Los principios del Sistema Único de Manejo Ambiental son el mejoramiento, la transparencia, la agilidad, la eficacia y la eficiencia así como la coordinación interinstitucional de las decisiones relativas a actividades o proyectos propuestos con potencial impacto y/o riesgo ambiental, para impulsar el desarrollo sustentable del país mediante la inclusión explícita de consideraciones ambientales y de la participación ciudadana, desde las fases más tempranas del ciclo de vida de toda actividad o proyecto propuesto y dentro del marco establecido mediante este Título.

Autoridad ambiental nacional (AAN).- El Ministerio del Ambiente. Autoridad ambiental de aplicación (AAA): Los Ministerios o Carteras de Estado, los órganos u organismos de la Función Ejecutiva, a los que por ley o acto normativo, se le hubiere transferido o delegado una competencia en materia ambiental en determinado sector de la actividad nacional o sobre determinado recurso natural; así como, todo órgano u organismo del régimen seccional autónomo al que se le hubiere transferido o delegado una o varias competencias en materia de gestión ambiental local o regional.

Autoridad ambiental de aplicación responsable (AAAr): Institución cuyo sistema de evaluación de impactos ambientales ha sido acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental y que por lo tanto lidera y coordina el proceso de evaluación de impactos ambientales, su aprobación y licenciamiento ambiental dentro del ámbito de sus competencias.

Autoridad ambiental de aplicación cooperante (AAAc): Institución que, sin necesidad de ser acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental, participa en el proceso de evaluación de impactos ambientales, emitiendo a la AAAr su informe o pronunciamiento dentro del ámbito de sus competencias.

(Texto Unificado de la legislación Ambiental Secundaria (TULAS) Art. 3) dice:

En el Capítulo I de la acreditación ante el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) tenemos los siguientes Artículos:

Art. 4.- El marco institucional del Sistema único de Manejo Ambiental se establece a través del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA), determinado en el artículo 5 de la Ley de Gestión Ambiental.

Para los efectos de la determinación de la competencia ambiental dentro del SNDGA, se entenderá que la tienen aquellas instituciones, nacionales, sectoriales o seccionales, que según sus correspondientes leyes y reglamentos tienen potestad para la realización de actividades, de cualquier naturaleza relacionadas con la prevención y control de la contaminación ambiental y uso, manejo y administración de los recursos naturales renovables y no renovables; y en general con el desarrollo sustentable.

(Texto Unificado de la legislación Ambiental Secundaria (TULAS) Art. 4-5) dice:

Art.4.- Por lo tanto, el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA) comprende la descentralización horizontal entre las instituciones del Gobierno Central con competencias ambientales, así como la descentralización vertical, de acuerdo a la terminología del artículo 3 de este reglamento que define la autoridad ambiental nacional (AAN) y las autoridades ambientales de aplicación (AAA) en su calidad de instituciones integrantes del SNDGA.

Art. 5.- Acreditación.- Las autoridades ambientales de aplicación que cuentan con los elementos y cumplen con los requisitos mínimos de un subsistema de evaluación de impactos ambientales establecidos en este Título, podrán solicitar la correspondiente acreditación ante el SUMA a la autoridad ambiental nacional.

(Texto Unificado de la legislación Ambiental Secundaria (TULAS) Art. 6) dice:

Art. 6.- Solicitud de acreditación.- Para la acreditación ante el Sistema Único de Manejo Ambiental, la autoridad ambiental de aplicación deberá presentar, ante la autoridad ambiental nacional:

- a)** una solicitud expresa firmada por la autoridad máxima de la autoridad ambiental de aplicación interesada en la acreditación;
- b)** las bases legales y reglamentarias en las que se encuentran determinadas y especificadas las competencias administrativas en materia ambiental de la autoridad ambiental de aplicación solicitante;
- c)** una declaración corta de la política ambiental sectorial o seccional, según el caso;
- d)** la justificación y documentación que sustente que el subsistema de evaluación de impactos ambientales de la autoridad ambiental de aplicación cumple con los elementos y requisitos mínimos establecidos en el Capítulo III de este Título, incluyendo normas, especificaciones y guías ambientales aplicables también a aquellas actividades o proyectos que no requieren evaluación de impactos ambientales; y,
- e)** La documentación que demuestre la capacidad institucional de la autoridad ambiental de aplicación en lo que se refiere a:
 - a)** Poseer una unidad de gestión, protección o manejo ambiental;
 - b)** disponer de recursos técnicos, tecnológicos y económicos, propios y/o tercerizados, para cumplir con las tareas inherentes a un subsistema de evaluación de impactos ambientales, incluyendo las respectivas actividades de control y seguimiento ambiental; y,

- c) Disponer de un equipo multidisciplinario que este técnicamente preparado para la revisión y licenciamiento de un estudio de impacto ambiental, cualquiera que sea la relación contractual o laboral que tengan los profesionales con la autoridad ambiental de aplicación interesada.

El (Texto Unificado de la legislación Ambiental Secundaria (TULAS) Art. 7) dice:

Art. 7.- Resolución de acreditación.- Luego del correspondiente análisis, la autoridad ambiental nacional resolverá dentro del plazo de 90 días, respecto de la solicitud, pudiendo:

- a) Aprobarla y conferir a la autoridad ambiental de aplicación interesada el respectivo certificado de acreditación y el derecho de utilizar el sello del Sistema único de Manejo Ambiental, creado para el efecto;
- b) Observar fundamentadamente y establecer las recomendaciones a fin de facilitar la acreditación en el menor tiempo posible; o,
- c) Rechazar fundamentadamente en el caso que existan deficiencias graves en el sub - sistema de evaluación de impactos ambientales de la autoridad ambiental de aplicación interesada con respecto al Sistema Único de Manejo Ambiental.

La decisión sobre la solicitud de acreditación, cualquiera que sea, se emitirá mediante resolución motivada que se publicará en el Registro Oficial.

El (Texto Unificado de la legislación Ambiental Secundaria (TULAS) Art. 8) dice:

Art. 8.- de acreditación.- Dependiendo del grado de cumplimiento con los requisitos del presente Título y la capacidad institucional de la autoridad ambiental de aplicación interesada, la acreditación ante el Sistema Único de Manejo Ambiental se otorgará para un de tres (3) hasta seis (6) años. Hasta 90 días antes de expirar la acreditación ante el SUMA, la

autoridad ambiental de aplicación solicitará a la autoridad ambiental nacional la renovación de la acreditación, basada en el desenvolvimiento de su sistema de evaluación de impactos ambientales documentado en los respectivos informes anuales de seguimiento y auditorías de gestión, de conformidad al artículo siguiente.

(Texto Unificado de la legislación Ambiental Secundaria (TULAS) Art. 9) dice:

Art. 9.- Seguimiento a la acreditación.- A fin de velar por el mejoramiento continuo del Sistema único de Manejo Ambiental y el fortalecimiento institucional en gestión ambiental de las autoridades ambientales de aplicación, se establecen los siguientes mecanismos de seguimiento:

- a) Informes anuales de gestión.-** La autoridad ambiental de aplicación acreditada presentará anualmente un informe de gestión a la autoridad ambiental nacional en el formato que ésta determine.
- b) Auditoría de gestión.-** La autoridad ambiental nacional conducirá auditorías de gestión periódicas a las autoridades de aplicación acreditadas ante el Sistema Único de Manejo Ambiental. Estas auditorías se realizarán en base de las disposiciones de este Título así como la normativa ambiental complementaria de cada autoridad ambiental de aplicación como marco referencial.

La (Texto Unificado de la legislación Ambiental Secundaria (TULAS) Art.9)dice lo siguiente:

Art. 9.- Los resultados de dichas auditorias serán públicos. La autoridad ambiental nacional llevará un registro de los informes anuales de gestión y de los informes de auditoría a las instituciones acreditadas.

2.1.3.3 Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA)

La (Ley de Gestión Ambiental Art. 5-10) nos dice lo siguiente:

El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA), de acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Gestión Ambiental, es:

Art. 5.- Un mecanismo de coordinación transectorial, de interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales”

Art.10.-Está integrado por las instituciones del Estado con competencia ambiental. El propósito de la norma es que los problemas ambientales sean tratados de forma integral por todas las entidades que conforman el SNDGA.

En este punto cabe señalar que la gestión ambiental es el conjunto de actividades humanas que procuran la ordenación del medio ambiente y contribuyen a que se establezca un modelo de desarrollo sustentable.

Generalmente, la gestión ambiental es considerada una potestad estatal porque el Estado es el llamado a declarar políticas, administrar justicia, expedir leyes, etc. Conforme a lo expuesto, la gestión ambiental pública se encuentra compuesta por:

1. Las políticas sobre el medio ambiente y el desarrollo.
2. Instituciones que realizan acciones de normativa, control e implementación de desarrollo sustentable.
3. Normas legales.

Instrumentos administrativos que consisten en:

- Medidas inductivas
- Estudios de impacto ambiental
- La ordenación de usos del suelo
- Concertación
- Sanción y control judicial

Dentro de las normas legales se encuentra la Ley de Gestión Ambiental, la cual establece el marco institucional a través del SNDGA para evitar el conflicto de competencias entre autoridades nacionales, sectoriales y seccionales, por lo que bajo el SNDGA se brinda seguridad jurídica tanto para el manejo de recursos naturales como para la conservación de espacios naturales y por ende a la gestión ambiental.

(Ley de Gestión Ambiental Art. 5) dice lo siguiente:

El SNDGA, permite la coordinación, interacción y cooperación entre las distintas autoridades ambientalmente competentes. El SNDGA se encuentra conformado por organismos y entidades de la Administración Pública Central, Institucional o Seccional que tanto individualmente como en conjunto administran sectores específicos de la gestión ambiental.

La actual Constitución establece las competencias territoriales, y se pueden observar los distintos niveles de entes gubernamentales que forman parte de la gestión ambiental y de esta manera tenemos:

La (Art 261-262-263-268 de la constitución de la republica 2008) nos dice los siguiente.

1. *El Estado Central tiene competencia exclusiva sobre: las áreas naturales protegidas y los recursos naturales.*

2. *Los gobiernos regionales autónomos asumen competencia exclusiva para formular planes de ordenamiento territorial y expedir normas regionales.*
3. *Los gobiernos provinciales tienen competencia para la gestión ambiental provincial.*
4. *Los gobiernos municipales poseen competencia para regular el uso del suelo, manejo de desechos, preservar el patrimonio natural del cantón, etc.*

Dentro de la norma se puede observar la cooperación e interacción que existe entre los diferentes niveles de gobierno, puesto que desde la porción territorial menor se trabaja hacia la mayor, para que de esa manera el gobierno central pueda formular sus políticas y planes generales aplicables a todo el territorio nacional en materia de gestión ambiental.

En conclusión, la gestión ambiental sería exitosa siempre y cuando exista el cabal cumplimiento de las leyes ambientales y; especialmente, si hubiera un seguimiento y supervisión rigurosa sobre las actividades económicas que causan impactos ambientales.

De la misma manera está expresado que la responsabilidad de la gestión ambiental recae en los distintos niveles de entes gubernamentales que forman parte de la gestión ambiental.

1. Estudios de línea Base,
2. Evaluación del impacto ambiental,
3. Planes de manejo y
4. Auditorías Ambientales.

Contenido de la evaluación de impacto ambiental:

1. Estimación de efectos causados,

2. Condiciones de tranquilidad pública e
3. Incidencia del proyecto.
4. Aprobación de la evaluación de impacto ambiental.

Los requisitos para poder acreditarse ante el SUMA se encuentran por el hecho de:

Contar con una Unidad de Gestión, departamento de protección ambiental,
Disponer de recursos técnicos, tecnológicos y económicos; y
Disponer de un equipo interdisciplinario de profesionales.

Los efectos de acreditarse ante el SUMA, será el poder otorgar licencias ambientales y la realización del tamizado.

2.2 Proceso de Regularización Ambiental

La Regulación Ambiental se constituye en un proceso implementado en nuestros países, con el fin de promover la creación y mantenimiento de los bienes públicos Ambientales que se asocian con el desarrollo sustentable.

En nuestro país, con la aprobación y puesta en vigencia de la nueva Constitución Política, en el año 2008, es necesario armonizar el conjunto de políticas y normas ambientales con este nuevo régimen jurídico, especialmente respecto a los novedosos principios ambientales y a los derechos de la naturaleza incorporados en la nueva Constitución de la República vigentes para nuestro país.

Es necesario plantearse la regulación ambiental como una herramienta importante en la modernización de los sectores fundamentales de la actividad económica, especialmente de aquellos que hacen un uso intensivo de bienes y servicios ambientales, reconociendo que el ejercicio regulatorio puede traducirse no sólo en los beneficios públicos, sino en las ventajas privadas que tengan un impacto favorable en la competitividad. La regularización además es muy importante

para poder convivir tanto los empresarios como sus empresas dando cumplimiento a las leyes y Ordenanzas vigentes para el Distrito Metropolitano de Quito como para el país.

2.2.1 Estudios Ambientales

Los estudios ambientales constituyen instrumentos de control y prevención que deben ser realizados previos a la ejecución, durante la ejecución y para el cese de actividades de una obra o proyecto que pueda o no causar impactos ambientales. En el Ecuador existe el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), que establece las etapas y requisitos a cumplir para cualquier actividad que cause un impacto ambiental

Siguiendo esta misma línea, luego de realizados estos estudios, se otorgará la licencia ambiental prevista en la legislación, y esta es una resolución mediante la cual se permite la ejecución del proyecto o el inicio de la actividad. Por esa razón cabe añadir que los estudios ambientales son parte de un proceso mediante el cual se garantiza el acceso a la información y principalmente la participación social. Existen tres tipos de estudios ambientales: el estudio de impacto ambiental, el plan de manejo ambiental y la auditoría ambiental.

El Estudio de Impacto Ambiental es un estudio realizado por personas técnicas en la materia y que se deben presentar para todas aquellas actividades, obras o proyectos nuevos o para modificaciones a los ya existentes que potencialmente puedan causar impactos ambientales.

2.2.2 Manejo Ambiental

Se denomina plan de manejo ambiental al plan que, de manera detallada, establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia.

Es aquello con lo que podemos mitigar a dar solución a un problema hecho en la evaluación de impactos ambiental.

Es el plan operativo que contempla la ejecución de prácticas ambientales, elaboración de medidas de mitigación, prevención de riesgos, de contingencias y la implementación de sistemas de información ambiental para el desarrollo de las unidades operativas o proyectos a fin de cumplir con la legislación ambiental y garantizar que se alcancen estándares que se establezcan.

2.2.3 La Licencia Ambiental

Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que pueda causar impacto ambiental. En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el proponente de un proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar o remediar los efectos indeseables que el proyecto autorizado pueda causar en el ambiente.

Procedimiento para la obtención de la Licencia Ambiental

1. El Proponente debe solicitar al Subsecretario de Calidad Ambiental, el Certificado de Intersección con el Sistema de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del Estado. Esta solicitud debe contener:

- Fecha de la solicitud del Certificado de Intersección
- Razón Social del Proponente
- Apellidos y Nombres del Representante Legal
- Dirección

- Ciudad

- Calle No.
 - Teléfono No.
 - E-mail
 -
- Nombre del Proyecto
 - Actividad y una breve descripción del proyecto
 - Ubicación del Proyecto en coordenadas UTM
 - Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente No. 0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de la tasa correspondiente de US/ 50.00, de conformidad con lo dispuesto en el Libro IX del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS).
 - Esta solicitud debe ser suscrita por el representante legal.
2. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, emitirá el Certificado de Intersección del proyecto con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del Estado (PFE) adjuntando el mapa correspondiente y la referencia del No. de Expediente asignado, el cual deberá ser mencionado por el Proponente en futuras comunicaciones.
3. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación de los Términos de Referencia (TdR) para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para proyectos nuevos, para actividades en funcionamiento deben presentar los Términos de Referencia para la Elaboración de la Auditoría Ambiental de Situación y el Plan de Manejo Ambiental. Esta solicitud debe contener:
- Fecha de la solicitud de los Términos de Referencia
 - Razón Social del Proponente
 - Nombre del Proyecto

- Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado de Intersección.
 - Términos de Referencia (TdR) (documento escrito y en medio magnético (WORD); una copia si NO INTERSECTA con el SNAP, 3 copias SI INTERSECTA con el SNAP)
 - Constancia debidamente documentada de que los TdR fueron puestos en conocimiento de la ciudadanía, según los mecanismos de Participación Ciudadana establecidos en el Libro VI del TULAS.
4. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, analizará los TdR y notificará al Proponente con su aprobación o con las observaciones si las hubiere, que deberán ser atendidas por el Proponente hasta lograr su aprobación.
5. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto (PMA), para proyectos nuevos, para el caso de actividades en funcionamiento la Auditoría Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental. Esta solicitud debe contener:
- Fecha de la solicitud del Estudio de Impacto Ambiental
 - Razón Social del Proponente
 - Nombre del Proyecto
 - Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado de Intersección
 - EIA y PMA (documento escrito y en medio magnético (textos en WORD, mapas en formato JPG); una copia si NO INTERSECTA con el SNAP, 3 copias SI INTERSECTA con el SNAP)
 - Constancia debidamente documentada de que el EIA y PMA fueron puestos en conocimiento de la ciudadanía, según los mecanismos de Participación Ciudadana establecidos en el Libro VI del TULAS.
 - Copia de la Factura que certifique el costo del EIA y PMA

- Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente No. 0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de la tasa correspondiente al 10% del costo del EIA y PMA, de conformidad con lo dispuesto en el Libro IX del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS).
6. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente evaluará los estudios y notificará al Proponente con la aprobación del EIA y PMA o con las observaciones si las hubiere, que deberán ser atendidas por el Proponente hasta lograr su aprobación.
7. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la emisión de la Licencia Ambiental para la realización del proyecto. Esta solicitud debe contener:
- Fecha de la solicitud de la Licencia Ambiental
 - Razón Social del Proponente
 - Nombre del Proyecto
 - Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado de Intersección.
 - Cronograma valorado de ejecución del PMA anual. (en caso de proyectos a ejecutarse en un tiempo menor a un año, cronograma por los meses de duración)
 - Certificación del costo total del Proyecto
8. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente notificará al Proponente con el valor de la tasa por emisión de la Licencia Ambiental, que corresponde al 1 por mil del costo total del proyecto y la tasa por el primer año de Seguimiento y Monitoreo al PMA según lo establecido en el Libro IX del TULAS.
9. El Proponente deberá remitir a la Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente lo siguiente:

- Razón Social del Proponente
- Nombre del Proyecto
- Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado de Intersección.
- Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente No. 0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de las tasas correspondientes a la emisión de la Licencia Ambiental y Seguimiento y Monitoreo.
- Garantía de Fiel Cumplimiento del Plan Anual de Manejo Ambiental, equivalente al 100% del Cronograma Anual Valorado, a nombre del Ministerio del Ambiente
- Póliza de Seguros por daños ambientales o daños a terceros a nombre del Ministerio del Ambiente.

10. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente inscribirá la Licencia Ambiental en el Registro de Licencias Ambientales y notificará y entregará al Proponente el original de la Licencia Ambiental emitida por el Ministro del Ambiente, que rige desde la fecha de la Resolución Ministerial, la cual contiene todas las obligaciones y responsabilidades que el Proponente asume en materia ambiental por el tiempo de vigencia de la Licencia.

11. El Proponente deberá tomar en consideración lo dispuesto en el Libro IX del TULAS, referente a Servicios Forestales y de Áreas Naturales Protegidas y Biodiversidad Silvestre (Licencias Forestales, Permisos de Investigación, etc.

2.2.4 Auditoría Ambiental

El Escritor (Andrés B. R., 2001, p. 1036) nos dice lo siguiente:

Las auditorías ambientales fueron desarrolladas en Norteamérica en los años setenta para evaluar el cumplimiento de las leyes ambientales, por lo que, desde un principio, las se encuentran

vinculadas al cumplimiento de las normas, es por ello que la Cámara de Comercio Internacional definió en 1988 a las auditorías ambientales como:

“...herramienta de gestión que comprende una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de cómo está actuando la organización con el propósito de ayudara proteger el medio ambiente...”

La Auditoría Ambiental es un proceso de evaluación sistemática documentada, periódica y objetiva de la eficiencia de la organización del sistema de gestión y de los procedimientos destinados a la protección del medio ambiente, que tiene como objetivo facilitar el control medioambiental y la adecuación de las políticas medioambientales de una empresa o proyecto.

El (Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) Art. 19 Literal C) dice ño siguiente:

En el Ecuador la auditoría ambiental es obligatoria y sirve para determinar si se está cumpliendo con lo expuesto en el plan de manejo ambiental y en el propio EIA. Así, la Ley expone que la auditoría ambiental es un proceso técnico de carácter fiscalizador que se realiza generalmente por un tercero, de manera periódica, para verificar el cumplimiento de los términos de referencia y lo establecido en el EIA.

El (Texto Unificado de legislación Ambiental secundaria Art. 16-19 Literal c) Los términos de referencia dice:

Los términos de referencia, que es el documento que expone la manera en que estos deben realizarse, presentan que el control debe ser periódico para que el Estado tome las medidas que considere oportunas para obligar al promotor de la obra o proyecto a que efectúe los correctivos necesarios para evitar mayores

impactos ambientales y posibles sanciones por incumplimiento, ya que lo que se audita es: si se están cumpliendo los requerimientos legales, si se están manejando adecuadamente los residuos peligrosos (si se producen), si las emisiones contaminantes están dentro de los parámetros establecidos, etc.

El Escritor (Andrés B. R., 2001, p. 1035) las Auditorías ambientales las divide de la siguiente manera:

1. Auditorías ambientales consideradas aisladamente como instrumento de evaluación o como técnica relacionada al sistema de gestión ambiental, es decir la auditoría permite a la empresa mantener su política ambiental y cumplir con la normativa.

Voluntarias u obligatorias, esto es si la legislación ambiental las exige o no.

Reguladas por normas privadas o técnicas o por normas jurídicas, esto significa que las primeras se refieren a normas como las ISO 14001 que hacen referencia a la implementación de un sistema de gestión ambiental y las segundas a las establecidas en los cuerpos de legislación ambiental del Estado.

El (Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental Artículos 60-61-62) dice lo siguiente:

En el Ecuador la primera auditoría ambiental de cumplimiento se lleva a cabo al año de otorgada la licencia ambiental, y posteriormente cada dos años. La AAAr puede realizar inspecciones en cualquier momento, sin necesidad de notificar, para verificar si se está cumpliendo con el Plan de Manejo Ambiental y el EIA.

En definitiva, las Auditorías Ambientales son un instrumento de gestión para la mejora continua en los procedimientos para aplicar medidas correctivas y preventivas para proteger el medio ambiente, que consiste en un proceso de revisión periódico para llevar un control sobre las actividades que se están desarrollando y que las mismas se encuentren dentro de los parámetros establecidos en los términos de referencia y la ley.

Por lo tanto, dentro del tema de desechos peligrosos, es importante la realización de una auditoría ambiental en cada una de las fases de su gestión que determine los impactos ambientales que se puedan presentar, y a través de ellos lograr mitigar los daños causados al entorno. De la misma manera se debería auditar específicamente el cumplimiento de la normativa y las regulaciones aplicables a cada proceso de gestión y manejo de los desechos, como por ejemplo evitar que un desecho peligroso no genere otro desecho peligroso.

En la legislación ecuatoriana no se ha elaborado una auditoria que sea específica para el control de las fases de gestión de desechos peligrosos, lo que se considera sumamente necesario para el cumplimiento de la normativa en el tema. El Ministerio del Ambiente, como Autoridad Ambiental Competente, debería crear una auditoria especializada en el manejo de desechos peligrosos.

2.2.5 Ficha Ambiental

La Ficha Ambiental es la obligación a realizar el Estudio de Impacto Ambiental a todos los proyectos que se lleven a cabo. El Estudio de Impacto Ambiental es un proceso destinado a mejorar las decisiones tomadas y prevenir que los proyectos a ejecutarse sean social y ambientalmente sustentables. Sirve para poder identificar, predecir e interpretar los impactos que esa actividad producirá, si es que el proyecto es ejecutado. Debe estar disponible para consulta pública y que todas las personas o instituciones interesadas puedan presentar al organismo correspondiente sus críticas y recomendaciones.

Se llama Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al procedimiento técnico, administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado, todo ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo.

Este procedimiento jurídico administrativo se inicia con la presentación de la memoria resumen por parte del promotor, sigue con la realización de consultas previas a personas e instituciones por parte del órgano ambiental, continúa con la realización del EsIA (Estudio de

Impacto Ambiental) a cargo del promotor y su presentación al órgano sustantivo. Se prolonga en un proceso de participación pública y se concluye con la emisión de la DIA Declaración de Impacto Ambiental por parte del Órgano Ambiental.

La EIA se ha vuelto preceptiva en muchas legislaciones. Las consecuencias de una evaluación negativa pueden ser diversas según la legislación y según el rigor con que ésta se aplique, yendo desde la paralización definitiva del proyecto hasta su ignorancia completa. El concepto apareció primero en la legislación de Estados Unidos y se ha ido extendiendo después a la de otros países. La Unión Europea la introdujo en su legislación en 1985, habiendo sufrido la normativa enmiendas en varias ocasiones posteriores.

El EIA se refiere siempre a un proyecto específico, ya definido en sus particulares tales como: tipo de obra, materiales a ser usados, procedimientos constructivos, trabajos de mantenimiento en la fase operativa, tecnologías utilizadas, insumos, etc.

2.2.6 Declaratorias

La Declaratoria de Cumplimiento Ambiental es el documento firmado por el interesado, bajo protesta de decir verdad, que sus proyectos, obras o actividades, no requieren de la presentación de una manifestación de impacto ambiental, informe preventivo o estudio de riesgo.

Declaración de Quito Redactada al culminar el “Encuentro Andino: El ALCA y sus impactos económicos y ecológicos”, el 30 de marzo del 2001.

Nosotros, hombres y mujeres campesinos, indígenas, negros, miembros de organizaciones no gubernamentales, académicos y ciudadanos de Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia, México y Uruguay, nos hemos reunido en el Encuentro Andino “El Alca y sus Impactos Económicos y Ecológicos”, con el propósito de reflexionar y conocer los procesos que, sobre este tema, han venido adelantando los gobiernos de nuestros países a espaldas de los pueblos y de sus parlamentos, y en abierta contradicción con sus intereses.

1. Subordina los derechos fundamentales, la sustentabilidad, los derechos laborales, los derechos de los pueblos tradicionales y de los estados nacionales, a los intereses de las corporaciones e inversionistas transnacionales.
2. Provoca más inequidad social y concentración de la riqueza.
3. Agudiza los desplazamientos y la migración masiva de refugiados económicos y ecológicos.
4. Agrava la degradación de los ecosistemas, la pérdida de diversidad biológica y los efectos del cambio climático.
5. Promueve la privatización de servicios fundamentales como la salud, la educación, el agua, etc.
6. Incluye a la diversidad agrícola y silvestre en el sistema de patentes.
7. Anula la soberanía alimentaria y cultural de los pueblos de América Latina.
8. Destruye las bases productivas de los países, convirtiéndolos en importadores de alimentos, bienes, servicios, tecnología, etc.

Por lo tanto:

1. Rechazamos los acuerdos del ALCA, a la intencionalidad hegemónica, de dependencia subordinada y a los mecanismos antidemocráticos de su discusión.
2. Exigimos a los gobiernos y parlamentos, y llamamos a los pueblos de América Latina, a trabajar sobre una propuesta de agenda de cambios sociales en que lo comercial no sea un fin en sí mismo, sino un instrumento cuyo propósito central responda a las necesidades de desarrollo humano sustentable entre nuestros países y que, por tanto:

Respete los derechos fundamentales de los seres humanos, las colectividades y los pueblos tradicionales.

- Sea justa, equitativa y armónica con la naturaleza.
- Respete las soberanías nacionales (política, alimentaria y cultural).
- Se subordine a los acuerdos internacionales multilaterales sobre medio ambiente.
- Se base en las necesidades de los pueblos y no en los intereses transnacionales.

3. Demandamos que todo acuerdo internacional se someta a un proceso plenamente participativo y controlado por los pueblos y espacios democráticos de toma de decisiones.
4. Exhortamos a las organizaciones participantes a desarrollar acciones nacionales para expresar a nuestros gobiernos la obligación de responder a las necesidades de nuestra sociedad en su conjunto.
5. Llamamos a juntar esfuerzos de coordinación con la Alianza Social Continental y todas las organizaciones empeñadas en propuestas alternativas para el desarrollo de una agenda de los pueblos.
- 6.

Los abajo firmantes suscribimos la Declaración de Quito, surgida del Encuentro Andino “El ALCA y sus impactos económicos y ecológicos”, realizado en Quito (Ecuador) el 29 y 30 de marzo del 2001.

CAPITULO III

ANÁLISIS LEGAL Y DOCTRINARIO SOBRE ALTO IMPACTO AMBIENTAL

3.1 El Alto Impacto Ambiental

El impacto ambiental es el efecto causado por una actividad humana sobre el medio ambiente. La ecología, que estudia la relación entre los seres vivos y su ambiente, se encarga de medir dicho impacto y de tratar de minimizarlo.

Desde el inicio de la era industrial hasta hace pocos años, las sociedades creían a ciegas en la doctrina del crecimiento económico exponencial, que se basaba en las posibilidades ilimitadas de la Tierra para sustentar el crecimiento económico.

Pero hoy sabemos que nuestro planeta no es capaz de soportar indefinidamente el actual orden económico internacional, que los recursos naturales no son bienes ilimitados y que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos de nuestro sistema de vida conllevan un grave riesgo para la salud del planeta, incluido lógicamente el hombre, los animales y las plantas

La actuación negativa sobre el medio ambiente que ha caracterizado a los sistemas productivos, se ha ejercido desde diferentes niveles, por ejemplo:

- 1.- Sobreutilización de recursos naturales no renovables.
- 2) Emisión de residuos no degradables al ambiente.
- 3) Destrucción de espacios naturales
- 4) Destrucción acelerada de especies animales y vegetales.

Desde la década de 1970 se aceleró la conciencia ecológica y la sociedad comenzó a entender que el origen de los problemas ambientales se encontraba en las estructuras económicas y productivas de la economía y dado que los principales problemas que aquejan al medio ambiente tienen su origen en los procesos productivos mal planificados y gestionados, es precisamente mediante la transformación de tales sistemas como se podía acceder a una mejora integral del medio ambiente.

La Definición de Evaluación de Impacto Ambiental podemos definirla como un conjunto de técnicas que buscan como propósito fundamental un manejo de los asuntos humanos de forma que sea posible un sistema de vida en armonía con la naturaleza.

La gestión de impacto ambiental pretende reducir al mínimo nuestras intrusiones en los diversos ecosistemas, elevar al máximo las posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida, por muy pequeñas e insignificantes que resulten desde nuestro punto de vista, y no por una especie de magnanimidad por las criaturas más débiles, sino por verdadera humildad intelectual, por reconocer que no sabemos realmente lo que la pérdida de cualquier especie viviente puede significar para el equilibrio biológico.

La gestión del medio ambiente implica la interrelación con múltiples ciencias, debiendo existir una inter y transdisciplinariedad para poder abordar las problemáticas, ya que la gestión del ambiente, tiene que ver con las ciencias sociales (economía, sociología, geografía, etc.) con el ámbito de las ciencias naturales (geología, biología, química, etc.), con la gestión de empresas (management), etc.

La Página web (<http://www.monografias.com>) dice:

- a) *Finalmente, es posible decir que la gestión del medio ambiente tiene dos áreas de aplicación básicas:*
- b) *Un área preventiva: las Evaluaciones de Impacto Ambiental constituyen una herramienta eficaz.*

- c) *Un área correctiva: las Auditorías Ambientales conforman la metodología de análisis y acción para subsanar los problemas existentes.*

El alto impacto Ambiental es la modificación de la naturaleza a través de la mano del hombre mediante las diversas acciones humanas que contaminan el aire el agua, el suelo, todas estas contaminaciones repercuten directamente en las personas los animales las plantas que forman parte del mundo en el que vivimos y que poco a poco estamos ayudando a que desaparezcan de este Planeta.

(Hammond, 2008) en su libro El Mundo en el 2030 advierte:

James Lovelock consiguió movilizar a la comunidad internacional en cuanto a los daños de los CFC sobre la capa de ozono. Ahora tenemos que conseguir otro acuerdo, mucho más importante que el Protocolo de Kyoto. Para lograr estabilizar el clima, las intenciones del Protocolo de Kyoto deben multiplicarse por 12¹³⁵, declara Tim Flannery: es necesario reducir el nivel de CO₂ un 70% de aquí a 2050 para conservarlo al doble de lo que era antes de la revolución industrial.

Si no hacemos nada, el nivel de CO₂ en la atmósfera se duplicará: de tres partes por 10.000 del nivel que había a principios de siglo, pasará a seis. Podría calentar el planeta unos 3° C y quizá hasta 6° C.

Actividades de Alto Impacto Según el Texto Unificado de legislación Ambiental Secundario (TULAS)

La sociedad ecuatoriana deberá observar permanentemente el concepto de minimizar los riesgos e impactos negativos ambientales mientras se mantienen las oportunidades sociales y económicas del desarrollo sustentable, solo puede alcanzarse cuando sus tres elementos se unan lo social, lo económico y lo ambiental son tratados armónica y equilibradamente en cada instante y para cada acción. Todos los habitantes del Ecuador y sus instituciones y organizaciones públicas y privadas deberán realizar cada acción, en cada instante, de manera que nos encamine en forma

simultánea a ser socialmente justa, económicamente rentable y ambientalmente sustentable. Reconociendo que la gestión ambiental corresponde a todos en cada instante de la vida y que nadie puede sustituir la responsabilidad de cada quien en esta gestión en su campo de actuación, mediante la coordinación a cargo del Ministerio del Ambiente, a fin de asegurar la debida coherencia nacional, las entidades del sector público y del sector privado en el Ecuador, sin perjuicio de que cada una deberá atender el área específica que le corresponde, contribuirán, dentro del marco de las presentes políticas, a identificar, para cada caso, las políticas y estrategias específicas, las orientaciones y guías necesarias a fin de asegurar por parte de todos una adecuada gestión ambiental permanentemente dirigida a alcanzar el desarrollo sustentable, así como colaborarán en los aspectos necesarios para lograr que cada habitante del Ecuador adecue su conducta a este propósito. Reconociendo que el ambiente tiene que ver con todo y está presente en cada acción humana y que todos los habitantes del mundo mediante la concientización podamos tener un ambiente menos contaminado y más sano para futuras generaciones.

El libro Vi Capítulo III del objetivo y los Elementos Principales del Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales nos dice:

Art. 1.- Objetivo General de la evaluación de impactos ambientales. El objetivo general de la evaluación de impactos ambientales dentro del SUMA es garantizar el acceso de funcionarios públicos y la sociedad en general a la información ambiental relevante de una actividad o proyecto propuesto previo a la decisión sobre la implementación o ejecución de la actividad o proyecto.

El (Libro VI de la Calidad Ambiental (TULAS) Art. 13) dice lo siguiente:

Para tal efecto, en el proceso de evaluación de impactos ambientales se determinan, describen y evalúan los potenciales impactos de una actividad o proyecto propuesto con respecto a las variables ambientales relevantes de los medios físico (agua, aire, suelo y clima); biótico (flora, fauna y sus hábitat); socio-cultural (arqueología, organización socio-económica, entre otros); y ,salud pública.

El (Libro VI de la Calidad Ambiental Art. 14-15) dice:

El Art. 14.- Elementos principales.- Los elementos que debe contener un sub-sistema de evaluación de impactos ambientales, para que una institución integrante del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental pueda acreditarse ante el Sistema Único de Manejo Ambiental son:

Art. 14.- Metodología y/o procedimiento para determinar la necesidad o no de un estudio de impacto ambiental para una actividad propuesta determinada, paso denominado también como tamizado;

Procedimientos para la elaboración de los términos de referencia de un estudio de impacto ambiental que permita definir el alcance de dicho estudio;

Definición clara de los actores y responsables que intervienen en el proceso de elaboración, revisión de un estudio de impacto ambiental y licenciamiento ambiental, incluyendo los mecanismos de coordinación interinstitucional;

Definición clara de los tiempos relativos a la elaboración y presentación de un estudio de impacto ambiental así como los periodos del ciclo de vida de una actividad que debe cubrir dicho estudio;

Definición de los mecanismos de seguimiento ambiental para la(s) fase(s) de ejecución o implementación de la actividad o proyecto propuesto; y,

Mecanismos de participación ciudadana dentro del proceso de evaluación de impactos ambientales en etapas previamente definidas y con objetivos claros.

Art. 15.- Determinación de la necesidad de una evaluación de impactos ambientales (tamizado).- La institución integrante del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental en su calidad de autoridad ambiental de aplicación debe disponer de métodos y procedimientos adecuados para determinar la necesidad (o no) de un proceso de evaluación de impactos ambientales en función de las características de una actividad o un proyecto propuesto. Estos métodos pueden consistir en:

Lista taxativa y umbrales que determinen las actividades y/o proyectos sujetos a un proceso de evaluación de impactos ambientales, incluyendo criterios complementarios para la determinación de la necesidad de una evaluación de impactos ambientales; o, criterios y método de calificación para determinar en cada caso la necesidad (o no) de un proceso de evaluación de impactos ambientales; entre estos métodos pueden incluirse fichas ambientales y/o estudios preliminares de impacto ambiental; o cualquier tipo de combinación de las dos alternativas mencionadas; y, tomarán en cuenta los criterios priorizados en la Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sustentable, así como las correspondientes políticas sectoriales y/o seccionales.

Además y de conformidad con la Ley Especial para la Región Insular de Galápagos, todas las acciones que se propongan para su realización o ejecución en esa jurisdicción territorial, deberán estar sujetas al proceso de evaluación de impacto ambiental. Así mismo, se someterán obligatoriamente al proceso de evaluación de impacto ambiental establecido en este Título, todas las actividades de riesgos y/o impactos ambientales que se propongan realizar en las áreas protegidas del Estado.

El (Libro VI de la Calidad Ambiental Art. 16) dice lo siguiente:

El Art. 16.- Alcance o términos de referencia.- Los términos de referencia para un estudio de impacto ambiental determinarán el alcance, la focalización y los métodos y técnicas a aplicarse en la elaboración de dicho estudio en cuanto a la profundidad y nivel de detalle de los estudios para las variables ambientales relevantes de los diferentes aspectos ambientales: medio físico, medio biótico, medio socio - cultural y salud pública. En ningún momento es suficiente presentar como términos de referencia el contenido proyectado del estudio de impacto ambiental.

Debe señalar por lo tanto y en función de la descripción de la actividad o proyecto propuesto, las técnicas, métodos, fuentes de información (primaria y secundaria) y demás herramientas que se emplearán para describir, estudiar y analizar:

- a)** línea base (diagnóstico ambiental), focalizada en las variables ambientales relevantes;
- b)** descripción del proyecto y análisis de alternativas;

- c) identificación y evaluación de impactos ambientales; y,
- d) definición del plan de manejo ambiental y su composición (sub- planes y/o capítulos).

Además, se debe incluir un breve análisis del marco legal e institucional en el que se inscribirá el estudio de impacto ambiental y se especificará la composición del equipo multidisciplinario que responderá técnicamente al alcance y profundidad del estudio determinado.

Los términos de referencia deben incorporar en la priorización de los estudios los criterios y observaciones de la comunidad, para lo cual el promotor en coordinación con la autoridad ambiental de aplicación responsable empleará los mecanismos de participación adecuados, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de este Título.

El alcance del respectivo estudio de impacto ambiental deberá cubrir todas las fases del ciclo de vida de una actividad o proyecto propuesto, excepto cuando por la naturaleza y características de la actividad y en base de la respectiva normativa sectorial se puedan prever diferentes fases y dentro de éstas diferentes etapas de ejecución de la actividad.

De acuerdo al estudio de impacto ambiental se hace para determinar el alcance, la focalización y los métodos y técnicas que se aplicará en la elaboración de dicho estudio en cuanto a la profundidad y nivel de los estudios que daños puede causar a la naturaleza y poder determinar si es factible o no dicho proyecto, cumpliendo toda la normativa vigente para el Distrito Metropolitano de Quito.

El (Libro VI de la Calidad Ambiental Art. 17) dice:

Art. 17.- Realización de un estudio de impacto ambiental.- Para garantizar una adecuada y fundada predicción, identificación e interpretación de los impactos ambientales de la actividad o proyecto propuesto, así como la idoneidad técnica de las medidas de control para la gestión de sus impactos ambientales y riesgos, el estudio de impacto ambiental debe ser realizado por un equipo multidisciplinario que responda técnicamente al alcance y la profundidad del estudio en función de los términos de referencia previamente aprobados. El

promotor y/o el consultor que presenten los Estudios de Impacto Ambiental a los que hace referencia este Título son responsables por la veracidad y exactitud de sus contenidos.

Un estudio de impacto ambiental deberá contener como mínimo lo siguiente, sin perjuicio de que la autoridad ambiental de aplicación establezca normas más detalladas mediante guías u otros instrumentos:

- a) Resumen ejecutivo en un lenguaje sencillo y adecuado tanto para los funcionarios responsables de la toma de decisiones como para el público en general;
- b) Descripción del entorno ambiental (línea base o diagnóstico ambiental) de la actividad o proyecto propuesto con énfasis en las variables ambientales priorizadas en los respectivos término de referencia (focalización);
- c) Descripción detallada de la actividad o proyecto propuesto;
- d) Análisis de alternativas para la actividad o proyecto propuesto;
- e) Identificación y evaluación de los impactos ambientales de la actividad o proyecto propuesto;
- f) Plan de manejo ambiental que contiene las medidas de mitigación, control y compensación de los impactos identificados, así como el monitoreo ambiental respectivo de acuerdo a las disposición del artículo 19 de este Título; y,
- g) Lista de los profesionales que participaron en la elaboración del estudio, incluyendo una breve descripción de su especialidad y experiencia (máximo un párrafo por profesional).

Los estudios de impacto ambiental debe ser claros y precisos y de fácil interpretación tanto para los técnicos que van a ejecutar dicho proyecto como para la gente común, además debe contener con exactitud todos los detalles sin margen de error para que la comunidad sepa lo que pueda provocar dicha obra o proyecto y saber las ventajas y desventajas que pueda ocasionar una vez que entre en funcionamiento dicha obra o proyecto.

El (Libro VI de la Calidad Ambiental Art. 18) dice:

Art. 18.- Revisión, aprobación y licenciamiento ambiental.- El promotor de una actividad o proyecto presentará el estudio de impacto ambiental ante la autoridad ambiental de aplicación responsable (AAAr) a fin de iniciar el procedimiento de revisión, aprobación y licenciamiento por parte de la referida autoridad, luego de haber cumplido con los requisitos de participación ciudadana sobre el borrador de dicho estudio de conformidad con lo establecido en el artículo 20, literal b) de este Título. La AAAr a su vez y de conformidad con lo establecido en el título I del presente Título, coordinará la participación de las instituciones cooperantes (AAAc) en el proceso.

La revisión del estudio se efectuará a través de un equipo multidisciplinario que pueda responder técnicamente y a través de sus perfiles profesionales y/o experiencia a las exigencias múltiples que representan los estudios de impacto ambiental y aplicando un sistema de calificación para garantizar la objetividad de la revisión. La revisión del estudio se documentará en el correspondiente informe técnico.

El licenciamiento ambiental comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una cobertura de riesgo ambiental, seguro de responsabilidad civil u otros instrumentos que establezca y/o califique la autoridad ambiental de aplicación, como adecuado para enfrentar posibles incumplimientos del plan de manejo ambiental o contingencias, de conformidad con la guía técnica específica que expedirá la autoridad ambiental nacional, luego de los respectivos estudios técnicos.

No se exigirá la cobertura de riesgo ambiental o la presentación de seguros de responsabilidad civil establecidos en este artículo en las obras, proyectos o actividades que requieran licenciamiento ambiental, cuando sus ejecutores sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en las dos terceras partes a entidades de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del plan de manejo ambiental de la obra, proyecto o actividad licenciada y de las contingencias que puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros.

Una vez aprobado la obra proyecto o actividad para ejecutarse debe haber cumplido todo lo estipulado por la ley deberá responder civilmente cuando causen daños a la comunidad o a la naturaleza para poder garantizar el buen servicio y poder ir de acuerdo con las empresas y la comunidad, ya que es necesario para el desarrollo de la colectividad y más aun de nuestra naturaleza y del ambiente.

3.2 Normativa sobre Alto Impacto Ambiental

En este numeral es necesario analizar sobre la Normativa Ambiental ya que es la encargada de difundir la política de gestión ambiental para precautelar la contaminación del aire, agua y del suelo ya que es lo más importante para los seres humanos también regular, fiscalizar y auditar para el buen funcionamiento de los gestores ambientales,

También la participación de los ciudadanos es un punto muy importante ya que mediante el cual se da paso a la ejecución de una actividad obra o proyecto que estén de acuerdo a la normativa ambiental para hacer correctivos si es necesario para el desarrollo empresarial como de la comunidad.

Art.11.380.6.- Autoridad Ambiental Distrital como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable.

La Autoridad Ambiental Distrital tendrá las siguientes funciones:

- a) Formular y difundir la política local de gestión ambiental integral para la prevención y control de la contaminación de los recursos aire, agua, suelo, manejo y conservación de la biodiversidad, además de las estrategias para la aplicación de la política local de gestión ambiental. Esta política deberá enmarcarse en lo establecido en la política nacional de protección ambiental.

- b)** Expedir y aplicar normas técnicas, métodos, manuales y parámetros *de* protección ambiental procedentes en el ámbito local, guardando siempre concordancia con la norma técnica ambiental nacional.
- c)** Establecer costos por vertidos y otros cargos para la prevención y control de la contaminación y conservación ambiental, acorde con las atribuciones ejercidas.
- d)** Regular, fiscalizar y auditar la participación de las entidades de seguimiento, laboratorios ambientales y gestores ambientales calificados.
- e)** Incluir la participación ciudadana en los procesos de gestión ambiental
- f)** Efectuar la categorización ambiental en función de la significación del impacto ambiental, riesgo ambiental o de ambos, de toda obra, proyecto, actividad y en general de toda acción que vaya a ejecutarse o que se encuentre en funcionamiento y que esté sujeta al cumplimiento de las disposiciones del presente Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales.
- g)** Evaluar y aprobar los documentos técnicos ambientales.
- h)** Emitir Licencias Ambientales, aprobar Fichas Ambientales y demás autorizaciones ambientales.
- i)** Suspender y/o revocar Licencias Ambientales, Fichas Ambientales y demás autorizaciones ambientales.
- j)** Realizar el seguimiento y control del cumplimiento por parte de los regulados, respecto de las obligaciones previstas en la presente ordenanza, normas Públicas, Planes de Manejo Ambiental, obligaciones originadas en las autorizaciones ambientales o incluidas en ellas y las demás previstas en los demás instrumentos vigentes en el Distrito Metropolitano de Quito.

Analizando lo dicho encontramos que todos los regulados deben cumplir con la normativa vigente para el Distrito Metropolitano de Quito para poder tener empresas con todos sus permisos y documentos requeridos para su funcionamiento, ya que solo así podemos tener un desarrollo empresarial y ambiental adecuado, sin contaminación

ambiental ya que ese es el problema más grave que hoy en día tenemos en todo el mundo y en especial en nuestro Distrito Metropolitano.

La (Ordenanza 404 Art. II.380.8-380.9) dice lo siguiente:

Art. 11.380.8.- Agencia Metropolitana de Control.- La Agencia Metropolitana de Control será el organismo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito competente para el ejercicio de las potestades de inspección general, instrucción, resolución y ejecución en los procedimientos administrativos sancionadores, conforme lo dispuesto en el Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales y de Control Ambiental de la presente ordenanza en la normativa que regula su creación y funciones.

Art. 11.380.9.- Entidades de seguimiento.- Las entidades de seguimiento (ES) tendrán a su cargo el apoyo a la Autoridad Ambiental Distrital en la aplicación de la presente ordenanza, acuerdo con lo establecido en el Art. 11.380.75.

Las entidades de seguimiento son aquellas que nos dan apoyo mediante sus estudios técnicos realizados a las empresas mediante los cuales determinan si cumplen o no con la normativa mediante el cual se abre un expediente administrativo sancionador. Los estudios realizados por las entidades de seguimiento son de vital importancia para los empresarios como para la comunidad para poder saber quiénes incumplen y poder regular de acuerdo a la ordenanza vigente para el Distrito Metropolitano de Quito.

Art. 11.380.10.- Categorización ambiental.- Para efectos de la aplicación del proceso de evaluación de impactos ambientales y de las demás disposiciones previstas en el Subsistema, todas las obras, proyectos, actividades y en general toda acción regulada en esta ordenanza, que se desarrolle en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito y que su pongan o generen impactos o riesgos ambientales, en virtud de la magnitud y significado de los mismos, determinada como tal a través del proceso de evaluación de impactos, serán clasificadas dentro de las siguientes categorizaciones ambientales:

1. Actividades que generan impactos o riesgos ambientales significativos altos;
2. Actividades que generan impactos o riesgos ambientales significativos bajos; y,
3. Actividades que generan impactos o riesgos ambientales no significativos.

Actividades que generan impactos o riesgos ambientales significativos altos.-
Corresponden a esta categoría los proyectos, obras o actividades que a criterio de la Autoridad Ambiental Distrital, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos en la presente ordenanza, tienen la potencialidad de generar, en cualquiera de sus fases, impactos o riesgos ambientales significativos altos, cuyo control se rige al cumplimiento de las acciones contempladas en la Licencia Ambiental otorgada.

Actividades que generan impactos o riesgos ambientales significativos bajos.-
Corresponden a esta categoría los proyectos, obras o actividades que a criterio de la Autoridad Ambiental Distrital, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos en la presente ordenanza, tienen la potencialidad de generar, en cualquiera de sus fases, impactos o riesgos ambientales significativos bajos, cuyo control se rige al cumplimiento de las acciones contempladas en la Ficha Ambiental aprobada.

Actividades que generan impactos o riesgos ambientales no significativos.-
Corresponden a esta categoría las obras o actividades que a criterio de la Autoridad Ambiental Distrital, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos en la presente ordenanza, pudieren generar impactos o riesgos ambientales no significativos, y cuya ejecución se realice de forma automática, sin necesidad de inspección previa.

El control de estas actividades se realizará ex post, sobre la base del cumplimiento de las Guías de Prácticas Ambientales emitidas por la Autoridad Ambiental Distrital.

Los grupos de actividades productivas que tengan capacidad de generar impactos ambientales no significativos, que no cuenten con una Guía de Prácticas

Ambientales Sectorial específica, estarán sujetos al cumplimiento de la Guía de Prácticas Ambientales General.

La (Ordenanza 404 Art. II.380.8-10) dice lo siguiente:

Todas aquellas actividades que no se encuentren categorizadas como de impacto significativo alto, bajo o no significativo, se presumirá que provocan impactos o riesgos ambientales mínimos y por tanto no requerirán de ningún proceso de evaluación de impacto ambiental, ni de autorización ambiental.

La (Ordenanza 404 Art. II.380.11) dice:

Art. II.380.11.- Criterios para la categorización de actividades que deben sujetarse al proceso de evaluación y autorizaciones.- Los criterios de categorización constituyen la metodología y procedimientos a utilizar.se para determinar el proceso de evaluación de impactos ambientales al que debe someterse wla actividad propuesta o en ejecución, que genere o pueda generar impactos ambientales.

Para dicho efecto, la Autoridad Ambiental Distrital, en base a la información proporcionada por el sujeto de control a través del Formulario de Identificación de la Actividad, Ficha Ambiental o Términos de Referencia de Estudios de Impacto Ambiental, procederá a efectuar la categorización ambiental de obras, proyectos, actividades y de cualquier tipo de acción, aplicando uno o varios de los siguientes instrumentos y criterios:

1. Lista taxativa: Es el criterio inicial de carácter referencial respecto de la capacidad de generación de impactos ambientales o riesgos ambientales, y su nivel de significancia.

2. Evaluación preliminar de impactos ambientales: Sin perjuicio de la referencia que pueda proporcionar la lista taxativa en cuanto a la categorización ambiental de una acción,

obra, actividad o proyecto, la evaluación preliminar de impactos ambientales por parte de la Autoridad Ambiental Distrital definirá en forma específica la categoría ambiental a la que corresponde dicha acción proyecto o actividad.

3. Inspecciones in situ: A criterio de la Autoridad Ambiental Distrital, éstas podrán ser efectuadas tanto en los sitios donde se construirán u operarán proyectos nuevos, así como en los sitios, instalaciones e infraestructuras de actividades o acciones en funcionamiento, para su categorización o re categorización.

Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales sobre Alto Impacto Ambiental

Dentro de los convenios y Acuerdos Internacionales sobre Alto Impacto Ambiental trataremos puntos de vital importancia ya que se ha logrado el compromiso de los grandes países industrializados que son los que más contaminan al ambiente, se ha logrado que a largo plazo bajemos en una forma importante la contaminación ambiental. Pero todos estos acuerdos y convenios internacionales no han sido cumplidos por los grandes países contaminaste que son los que deben tomar correctivos antes de que sea demasiado tarde para las futuras generaciones, ya que no se ha encontrado el mecanismo para hacer cumplir con la norma a nivel mundial y en este caso de nuestro Distrito Metropolitano de Quito.

3.2.1 Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales sobre Medio Ambiente

Comenzaremos dando un concepto de Acuerdo o Convenio Internacional y son los sujetos acuerdan, comprometiéndose recíprocamente, a cumplir las obligaciones y respetar los derechos contenidos en un instrumento escrito o establecidos verbalmente, estos acuerdos se realizan con una finalidad de establecer compromisos de honor denominados Acuerdos Convencionales.

Los sujetos acuerdan comprometiéndose recíprocamente a cumplir las obligaciones y respetar los derechos contenidos en instrumentos escritos o realizados verbalmente, que producen efectos Jurídicos.

Los tratados pueden ser bilaterales, es decir entre dos estados contratantes o multilaterales que quiere decir entre más de dos Estados que forman parte del Convenio, los tratados multilaterales que se refieren a la protección del medio ambiente también pueden tener ya sea una aplicación global o una aplicación regional específica.

Solo hace 100 años el impacto ambiental del hombre era insignificante en términos globales, este no es el caso ahora, puesto que la población mundial en aumento sigue explotando los recursos naturales de manera no sustentable, contaminando la atmósfera y afectando a la capacidad de la naturaleza para asimilar desechos.

El derecho internacional gobierna las relaciones entre Estados independientes. Las reglas de derecho obligatorias entre Estados emanan de su propia libre intención como se expresa en las convenciones o por usos generalmente aceptados como principios de derecho establecidos para regular las relaciones entre estas coexistentes comunidades independientes o con el objetivo de alcanzar propósitos comunes.

En el caso del Derecho Ambiental, los instrumentos ambientales internacionales principalmente incluyen a convenciones, protocolos e instrumentos conocidos como de “derecho blando”, como guías o códigos de conducta. También son relevantes los acuerdos, resoluciones, guías y declaraciones adoptadas para facilitar la aplicación de tratados y convenios. El derecho internacional ambiental procura obtener el consenso entre naciones respecto a objetivos de protección ambiental, conservación y uso sustentable de recursos.

Hay que recalcar que actualmente estamos presenciado un desarrollo acelerado del derecho internacional en general y en particular del derecho ambiental internacional.

Existe considerable evidencia de que el desarrollo del derecho ambiental internacional se está moviendo en dirección de desarrollo sustentable. En realidad el derecho internacional ambiental, es probablemente una de las ramas más dinámicas y de mayor evolución dentro del derecho internacional. Las convenciones internacionales se convierten cada vez más, en fuentes importantes de derecho ambiental internacional. En la actualidad, cientos de convenciones internacionales han sido expedidas en el campo ambiental. Es importante mencionar que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 1996, estableció el Registro de Tratados y otros Acuerdos en el Campo Ambiental con un listado de 216 instrumentos multilaterales ambientales, de los cuales.

Entre los Acuerdos, Convenios y Tratados Internacionales sobre Medio Ambiente analizaremos los más importantes:

El Manual (CEDA, 2004) dice lo siguiente sobre los tratados:

La conferencia de Estocolmo.- se realizó en junio de 1972. En ella se elaboró un Plan de Acción que contiene 106 recomendaciones y una Declaración sobre 26 Principios del Medio Humano. Se propuso la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El mismo que tiene un rol muy importante en el desarrollo del Derecho Internacional Ambiental, con sus auspicios y colaboración en cuatro convenios globales, (p. 31).

La Convención para el Control del Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna en Peligro (CI- TES), Washington 1973;

- La Convención sobre especies migratorias, Bonn 1979.
- La Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, Viena, 1985 y el Protocolo de Montreal sobre Substancias que Agotan la Capa de Ozono, Montreal 1987,y;

- La Convención de Basilea sobre Control Transfronterizo de Desechos Tóxicos, Basilea, 1989.

El proceso de cooperación internacional generado a partir de la Conferencia de Estocolmo de 1972 estableció una serie de principios incluyendo: la responsabilidad de los Estados para asegurar que las actividades dentro de sus jurisdicciones no afecten al medio ambiente de los Estados vecinos o del mundo entero.

La Declaración de Estocolmo no creó un régimen de derecho obligatorio inmediato pero existen evidencias que sus principios de derecho blando se está consolidando en el tiempo para constituir la base sobre la cual una estructura legal permanente puede asentarse.

Una de las cosas más importantes es la responsabilidad de todos los estados miembros que conforman dicho convenio se comprometieron en mantener la naturaleza sana y libre de contaminación es el principio de obligar a los Países industrializados mediante leyes que hasta el momento no se han hecho. Por otro lado es de vital importancia crear leyes que impidan el tráfico de especies exóticas que se encuentran en peligro de extinción que más tarde solo conoceremos en libros y por la historia de que existieron en la tierra, todas estas cosas por la contaminación, la tala indiscriminada de bosques, transporte, industrias, minas, todas estas producidas por la mano del hombre.

La Declaración de Río.- El medio ambiente y el desarrollo de 1992 sobre los Estados del mundo para asegurar la integridad del sistema ambiental sin poner en cuestión el desarrollo mundial para proveer la satisfacción de las necesidades, así como las aspiraciones a más altas cuotas de bienestar de todos los seres humanos, en particular, de los pobres. Porque en la Declaración de Río, el desarrollo sostenible es un objetivo de varias caras. El concepto de desarrollo sostenible resume en cuatro elementos y son: En primer lugar, la necesidad de preservar los recursos naturales para el beneficio de las generaciones futuras (principio de la equidad inter- generacional); en segundo lugar, la explotación de los recursos naturales debe ser sostenible, prudente, racional, juiciosa o apropiada (principio del uso sostenible); en tercer lugar, el uso equitativo de los

recursos implica que el uso que un Estado hace de los recursos toma en cuenta las necesidades de otros Estados (principio de uso equitativo o de equidad intergeneracional); y en cuarto lugar, la necesidad de asegurar la integración de las consideraciones ambientales en los planes, programas y proyectos, y que las necesidades de desarrollo deben tener en cuenta la aplicación de los objetivos ambientales (principio de integración).

La Legislación Ambiental y las Políticas después de Río

Los veinte años de la creación del PNUMA fueron marcados con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente que tuvo lugar en Río de Janeiro en Julio de 1992 UNCED. El objetivo de esta conferencia fue formular mecanismos apropiados para enfrentar de manera practica la crisis ambiental de la humanidad y al mismo tiempo garantizando un nivel mínimo de desarrollo. La conferencia produjo la Declaración de Río sobre Desarrollo y Medio Ambiente que contiene 27 principios básicos para guiar las actividades que aseguren que los estilos de vida sean sustentables, y la Agenda 21, que es una propuesta de estrategias para el desarrollo sustentable y para la gestión ambiental a nivel global. Desde este enfoque, ofrece a los gobiernos mecanismos a manera de políticas, planes, programas y guías para poner en práctica los principios de la Declaración de Río. Sus recomendaciones no tienen efecto legal. También se suscribió la Convención sobre Biodiversidad, la Convención Marco sobre Cambio Climático y los Principios sobre Bosques. Todos estos documentos sirvieron para el propósito trascendental de la conferencia: el desarrollo sustentable. Para efectos de monitorear la implementación de las decisiones de la Conferencia y particularmente de la Agenda 21, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó en 1992 la Comisión sobre Desarrollo Sustentable.

Este tratado trata sobre el desarrollo mundial mediante una organización de los empresarios y la comunidad para desarrollar tecnología de punta en las empresas sin hacer daño a la naturaleza y al medio ambiente con acuerdos y tratados serios y que cumplan todos los Países y así poder tener una mejor calidad de vida y sin pobres.

El Manual (CEDA, 2004) nos explica lo siguiente:

La Agenda 21.- Constituye el antecedente de las políticas nacionales sobre medio ambiente, y fue aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo CNUMAD, celebrada en Río en junio de 1992. Es un programa de acción para el desarrollo sustentable acordado por todos los gobiernos durante la Cumbre de Río.

En efecto, la Agenda 21 está compuesta por una serie de normas blandas, prescripciones y recomendaciones para los países sin fuerza de ley. (p.33).

La Agenda 21 se complementa con la Declaración de Río y con la declaración sobre Bosques y debe ser leída en conjunto. Contiene 40 capítulos divididos en 4 secciones:

- Dimensiones económicas y Sociales
- Conservación y manejo de recursos
- Fortalecimiento de ciertos grupos
- Medios para su implementación

La Agenda 21 trata del manejo de recursos sin causar daños al ambiente en este caso de las petroleras, canteras, la tala de bosques, las grandes carreteras que daña el ecosistema, todo esto es necesario pero mediante estudios técnicos por que también necesitamos el progreso y la evolución de nuestra población.

El Manual (CEDA, 2004) dice:

El Convenio de Basilea.- Este Convenio sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos, fue suscrito el 22 de marzo de 1989, cuyos principales lineamientos encuentran su base El Cairo de 1985.

Es así como en el capítulo 20 de la Agenda 21 principalmente, se discutieron los siguientes asuntos cruciales para el Mundo y la Humanidad, y estos son:

- El manejo ambientalmente sano de desechos peligrosos y la minimización de la generación de desechos.
- El manejo seguro de desechos sólidos y aguas servidas.
- La ratificación del convenio de Basilea y,
- El diseño de mecanismos de aplicación del mismo.

El objetivo primordial del Convenio, radica en promover que los estados tomen las medidas necesarias para que el manejo de los desechos peligrosos y otros desechos, incluyendo sus movimientos transfronterizos y su eliminación, sea compatible con la protección de la salud humana y el medio ambiente. Todo eso basado en el derecho soberano de los estados de prohibir la entrada o eliminación de desechos peligrosos y otros desechos ajenos a su territorio.

Hace una clasificación de los desechos que deben ser sometidos a control, así como aquellos que requieren un tratamiento especial. Además se tratan aspectos importantes como el reciclaje, regeneración, reutilización directa etc.

El Convenio de Basilea es ley para aquellos países signatarios y que lo hayan ratificado tal como lo dispone el Derecho Internacional, pero para su ejecución práctica, se requiere que los países suscriptores elaboren una normativa nacional que lo vuelva aplicable y efectivo para cada legislación.

Aun cuando el Convenio de Basilea constituye un gran avance en la lucha contra la contaminación por sus claros y definidos lineamientos sobre el control de desechos tóxicos, cabe anotar que no trata acerca de desechos radioactivos. Estos

por el contrario son tratados en otras normas internacionales e instituciones como la Agencia Internacional de Energía Atómica. (p. 34-35).

Este convenio trata del control de los desechos tóxicos y peligrosos, principalmente los industriales, que ha generado una gran preocupación mundial por su repercusión devastadora en el medio ambiente, ya sea por la contaminación del agua, aire, suelo, ya que no tienen un tratamiento adecuado o hay empresarios sin escrúpulos que no dan un tratamiento adecuado. También existen los elementos radioactivos, la energía atómica que son elementos sumamente peligrosos para el medio ambiente si no le damos un tratamiento adecuado podría ser catastrófico para la humanidad y el medio ambiente.

El Manual (CEDA, 2004) dice sobre el Protocolo lo siguiente:

El Protocolo de Montreal.- En el año de 1987 se firma el protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de Ozono y posteriormente, en 1989 se acuerdan reducciones específicas en la producción de emisiones y gases que dañan la Capa de Ozono por parte de los países participantes.

Estas reducciones debían realizarse continuamente hasta finales del siglo.

Una de las recomendaciones que constan en el capítulo 9 de la Agenda 21, hacen relación a la necesidad de tomar medidas encaminadas a prevenir el agotamiento de la Capa de Ozono y consecuentemente el efecto invernadero como producto de las actividades provenientes del consumo de combustibles fósiles y sólidos, así como el uso intensivo de la energía. Una de estas medidas señaladas en la Agenda apunta a la optimización de la producción, el uso y consumo sustentable de la energía y el control de emisiones atmosféricas. (p. 35-36).

El Protocolo de Montreal se ha ido actualizando desde entonces, a la vista de su insuficiencia para detener la progresiva destrucción de la capa de ozono. En 1990 se aprobaron las enmiendas de Londres, en 1992 las de Copenhague, en 1995 las de Viena

y en 1997 las de Montreal. En todas esas enmiendas se fueron añadiendo nuevas sustancias a controlar bajo el Protocolo, y se acordaron nuevas fechas de reducción y/o eliminación de las distintas sustancias.

Según algunos estudios realizados, en la actualidad, a través de cuadros ejemplificativos, se puede observar como los países partes del Protocolo, han reducido notablemente en los últimos años la fabricación de ciertas sustancias, como fuera su compromiso adquirido en 1989.

Este Protocolo trata fundamentalmente de las sustancias que agotan la capa de Ozono que es algo fundamental para la humanidad y el medio ambiente ya que cada día aumenta la temperatura y esto provoca frecuentes lluvias y por ende inundaciones con graves consecuencias y en otras partes del planeta sequías hambre y muerte, por todos estos problemas debemos tener normas y leyes que todos los miembros de la naturaleza cumplan para garantizar la vida.

El Manual (CEDA, 2004) sobre el Convenio de Ramsar dice:

El Convenio de Ramsar.- Llamado también Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas, fue firmado en la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971 y entró en vigor en 1975. Actualmente cuenta con 123 Partes Contratantes de Estados miembros en todo el mundo.

Este acuerdo internacional es el único de los más modernos convenios en materia de medio ambiente que se centra en un ecosistema específico, los humedales, y aunque en origen su principal objetivo estaba orientado a la conservación y uso racional en relación a las aves acuáticas, actualmente reconoce la importancia de estos ecosistemas como fundamentales en la conservación global y el uso sostenible de la biodiversidad, con importantes funciones (regulación de la fase continental del ciclo hidrológico, recarga de acuíferos, estabilización del clima local), valores (recursos biológicos, pesquerías,

suministro de agua) y atributos (refugio de diversidad biológica, patrimonio cultural, usos tradicionales) (p. 36).

Esta presencia internacional de Ramsar en los más importantes foros mundiales en materia de conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenible contribuye al logro de sus objetivos y a la difusión global de sus actuaciones.

Este convenio trata principalmente de los Humedales y la conservación de especies acuáticas que están desapareciendo al igual que la capa de ozono, los glaciares, las montañas, que son parte fundamental para la vida de la humana ya que sin estos elementos no podríamos existir.

El Protocolo de Kioto.- El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009, eran 187 estados los que ratificaron el protocolo. EE. UU., mayor emisor de gases de invernadero mundial, no ha ratificado el protocolo.

Trata sobre el cambio climático es un protocolo de la CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO₂), gas metano (CH₄) y óxido nitroso (N₂O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF₆), en un porcentaje aproximado de al menos un 5 %, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990.

Además del cumplimiento que estos países hicieron en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero se promovió también la generación de un desarrollo sostenible, de tal forma que se utilice también energías no convencionales y así disminuya el calentamiento global.

El gobierno de Estados Unidos firmó el acuerdo pero no lo ratificó (ni Bill Clinton, ni George W. Bush), por lo que su adhesión solo fue simbólica hasta el año 2001 en el cual el gobierno de Bush se retiró del protocolo, no porque no compartiese su idea de fondo de reducir las

emisiones, sino porque considera que la aplicación del Protocolo es ineficiente e injusta al involucrar solo a los países industrializados y excluir de las restricciones a algunos de los mayores emisores de gases en vías de desarrollo (China e India en particular), lo cual considera que perjudicaría gravemente la economía estadounidense.

Hasta el 2004 las emisiones de CO₂ han subido en España un 45,61% frente al valor del 1990, mientras según el protocolo de Kioto esa subida no debería haber pasado del 15%. Dentro de la Unión Europea, España es, por lo tanto, el país que menos cumple el Protocolo de Kioto. Sin embargo España había obtenido el permiso para aumentar en una pequeña cantidad su emisión de gases, ya que en ese momento acababa de entrar a la unión europea y no estaba tan desarrollada como otros países. Uno de los principales problemas es que estados unidos no lo ha ratificado, y es el país con mayor emisión de gases en el mundo.

Los Antecedentes de este convenio es que todos los Países industrializados se comprometieron, en la ciudad de Kioto, a ejecutar un conjunto de medidas para reducir los gases de efecto invernadero, todos estos gobiernos pactaron reducir en un 5,2% de media las emisiones contaminantes entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de 1990, pero no se ha cumplido por que sigue la contaminación de las grandes potencias industriales las mismas que han firmado muchos acuerdos y convenios sin mayores resultados en la reducción de los gases que contaminan el medio ambiente,

3.2.2 La Constitución de la República del Ecuador del 2008

La (Contitucion de la República , 2008) dice:

La Constitución de nuestro País garantiza y protege a la naturaleza y a todos los habitantes del Ecuador y del Mundo a vivir en un ambiente equilibrado y libre de contaminación como nos indica en su Art. 14 y 15 de la sección segunda de Ambiente Sano:

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.

En Capítulo séptimo de los Derechos de la Naturaleza no habla de cómo tenemos que mantenerlo a nuestra tierra, sin causar daño ni contaminación de ninguna clase en su Art. 71, 72, 73, 74, nos dice:

La (Constitución de la República , 2008) en sus Artículos 71 al 74 dice lo siguiente:

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.

El buen vivir, sumak kawsay está consagrado en la Constitución de la República del Ecuador en donde nos da derechos y obligaciones que cumplir mediante la aplicación de leyes y Ordenanzas que regula el Distrito Metropolitano de Quito en el cual trabajamos y vivimos. El Estado adoptará medidas adecuadas para la explotación, construcción, el funcionamiento de las industrias, explotación de bosques, transporte garantizando a todos los ciudadanos del Distrito a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación.

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.

En el Capítulo Segundo sobre Biodiversidad y recursos Naturales en la sección Primera Naturaleza y Ambiente nos da a conocer las obligaciones que tiene el estado para con la Naturaleza y quienes conformamos la misma, con Políticas de Gobierno sustentable que estén de acuerdo a la población y personas que habitamos dicha tierra, y estar preparados para cualquier impacto ambiental, ya sea producido por el hombre o por causas naturales, por lo que es necesario citar textualmente dichos Artículos.

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.

En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.

El Estado Ecuatoriano garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras, aplicando las leyes más favorables a la naturaleza para así poder mantener nuestros bosques, paramos, manglares, y las especies que son únicos en nuestro medio ambiente.

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente.

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.

Todo daño al medio ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas, claro está que una vez cometida la contaminación difícilmente se puede recuperar el medio ambiente como era antes. Es fundamental garantizar a la comunidad trabajo desarrollo industrial pero cumpliendo con la normativa vigente para el Distrito, todas estas Leyes, Ordenanzas no se han cumplido hasta este momento.

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que

la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.
2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.
3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.
4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado.
5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad.

El Estado Central y los Gobiernos Autónomos serán los encargados de regular el crecimiento poblacional, flora, fauna y de crear zonas verdes, de cuidar el agua y ofrecer un mejor futuro de vida a los habitantes de nuestras ciudad.

Es oportuno analizar en el caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud de las personas y la restauración de los ecosistemas mediante un plan efectivo con resultados. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre los servidores responsables de realizar el control ambiental. El Estado es el encargado de garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado respetando al medio ambiente.

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías.

Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos, la conservación de nuestros bosques que aún nos quedan, se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías, caminatas para usar menos los vehículos y así ayudar al medio ambiente en nuestro Distrito Metropolitano.

3.2.3 La ley de Gestión Ambiental

Esta ley determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los fines permisibles, controles y sanciones en esta materia. El proceso de Gestión Ambiental, se ubicará según los principios universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

El aprovechamiento racional de los recursos naturales de nuestra naturaleza se realizara en función de los intereses nacionales dentro del patrimonio nacional de áreas naturales protegidas del Estado Ecuatoriano y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos ambientales.

En el Capítulo II de la Evaluación de impacto ambiental y del control ambiental nos indica los estudios en las zonas que van a ser explotadas para no causar Impacto Ambiental en contra de nuestra Pacha Mama y así poder explotar los recursos para nuestra subsistencia de manera moderada y no modificar a la naturaleza, así tenemos los siguientes Artículos en los que menciona los Impactos Ambientales:

La (Ley de Gestión Ambiental Art. 19-20-21-22-23) dice lo siguiente:

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.

Todas estas obras, proyectos o actividades que una persona natural o jurídica quiera realizar en el Distrito Metropolitano de Quito deben cumplir ciertos requisitos que constan en la carta magna de nuestro país, y en la Ley de Gestión Ambiental para salvaguardar el medio ambiente con obras, proyectos que cumplan con las Ordenanzas y demás leyes para no contaminar y tener una mejor calidad de vida.

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente.

Las Auditorias deben a las empresas se deben realizar a todas la empresas para poder determinar el grado de contaminación, y de impacto ambiental puedan causar de acuerdo a la actividad que realicen las diferentes empresas, y para que luego de las auditorias los técnicos determinen si cumplen con los requisitos y poder dar o negar las licencias de funcionamiento, que quiere decir que han cumplido con todos los requisitos y pueden funcionar en el Distrito Metropolitano de Quito.

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas.

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse.

Para las empresas que cumplan con todos los requisitos y tengan Licencia Ambiental podrán ser evaluados en cualquier momento ya que pueden estar incumpliendo con derrame de fluidos o diferentes tipos de infracciones que tienen que ser sancionados ya que deben dar cumplimiento con todos los requisitos estipulados en la ley.

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:

La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada;

Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y,

La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.

La Contraloría General del Estado podrá, en cualquier momento, auditar los procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto ambiental, determinando la validez y eficacia de éstos, de acuerdo con la Ley y su Reglamento Especial. También lo hará respecto de la eficiencia, efectividad y economía de los planes de prevención, control y mitigación de impactos negativos de los proyectos, obras o actividades. Igualmente podrá contratar a personas naturales o jurídicas privadas para realizar los procesos de auditoría de estudios de impacto ambiental.

En las contrataciones de acuerdo a esta Ley que deban contar con estudios de impacto ambiental, los documentos precontractuales contendrán las especificaciones, parámetros, variables y características de esos estudios y establecerán la obligación de los contratistas de prevenir o mitigar los impactos ambientales. Cuando se trate de concesiones, el contrato incluirá la correspondiente evaluación ambiental que establezca las condiciones ambientales existentes, los mecanismos para, de ser el caso, remediarlas y las normas ambientales particulares a las que se sujetarán las actividades concesionadas.

3.2.4 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS)

El Libro VI de la calidad Ambiental, en su Título I del Sistema único de Manejo Ambiental nos da a conocer, el proceso de evaluación de impacto ambiental, así como los procedimientos de impugnación, suspensión revocatoria y registro de licencias ambientales, nos explica también un Subsistema de evaluación de impactos ambientales que abarca el proceso de presentación, revisión, licenciamiento y seguimiento ambiental de una actividad o un proyecto propuesto.

Los principios del Sistema Único de Manejo Ambiental son el mejoramiento, la transparencia, la agilidad, la eficacia y la eficiencia así como la coordinación interinstitucional de las decisiones relativas a actividades o proyectos propuestos con potencial impacto y/o riesgo ambiental, para impulsar el desarrollo sustentable del país mediante la participación ciudadana, desde las fases

más tempranas del ciclo de vida de toda actividad o proyecto propuesto y dentro del marco establecido mediante este Título para poder beneficiarnos de la riqueza de nuestra Madre naturaleza y trabajar de acuerdo con los empresarios, la ciudadanía y el ente regulador en este caso el Gobierno Nacional mediante su Ministerio correspondiente para el desarrollo de nuestra población y en general del País y del mundo entero.

Toda Actividad o proyecto propuesto es decir toda obra, instalación, construcción, inversión o cualquier otra intervención que pueda crear ocasiones de impacto ambiental durante su ejecución o puesta en vigencia, o durante su operación o aplicación, mantenimiento o modificación, y abandono o retiro requiere la correspondiente licencia ambiental conforme el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental y las disposiciones del presente reglamento.

El (Art. 17 Texto Unificado de la legislación Ambiental Secundaria (TULAS) nos dice lo siguiente:

Art. 17.- Realización de un estudio de impacto ambiental.- Para garantizar una adecuada y fundada predicción, identificación e interpretación de los impactos ambientales de la actividad o proyecto propuesto, así como la idoneidad técnica de las medidas de control para la gestión de sus impactos ambientales y riesgos, el estudio de impacto ambiental debe ser realizado por un equipo multidisciplinario que responda técnicamente al alcance y la profundidad del estudio en función de los términos de referencia previamente aprobados. El promotor y/o el consultor que presenten los Estudios de Impacto Ambiental a los que hace referencia este Título son responsables por la veracidad y exactitud de sus contenidos.

Un estudio de impacto ambiental deberá contener como mínimo lo siguiente, sin perjuicio de que la autoridad ambiental de aplicación establezca normas más detalladas mediante guías u otros instrumentos:

a) Resumen ejecutivo en un lenguaje sencillo y adecuado tanto para los funcionarios responsables de la toma de decisiones como para el público en general;

b) Descripción del entorno ambiental (línea base o diagnóstico ambiental) de la actividad o proyecto propuesto con énfasis en las variables ambientales priorizadas en los respectivos término de referencia (focalización);

c) Descripción detallada de la actividad o proyecto propuesto;

d) Análisis de alternativas para la actividad o proyecto propuesto;

e) Identificación y evaluación de los impactos ambientales de la actividad o proyecto propuesto;

f) Plan de manejo ambiental que contiene las medidas de mitigación, control y compensación de los impactos identificados, así como el monitoreo ambiental respectivo de acuerdo a las disposición del artículo 19 de este Título; y,

g) Lista de los profesionales que participaron en la elaboración del estudio, incluyendo una breve descripción de su especialidad y experiencia.

En el Capítulo IV del proceso de evaluación de impactos ambientales vamos a enunciar textualmente lo que dice la Ley.

El consultor encargado de presentar los Estudios de Impacto Ambiental a los que hace referencia este Título es responsables por la veracidad y exactitud de sus contenidos, los consultores deben tener un equipo de técnicos en diferentes áreas para determinar las diferentes infracciones en las que recaen los empresarios y poder rectificar o sancionar dichas infracciones y poder tener empresas que cumplan con la normativa legal y tener un medio ambiente libre de contaminación y una mejor calidad de vida.

Art. 21.- Análisis institucional.- Antes de iniciar el proceso de evaluación de impactos ambientales, esto es previo a la elaboración de la ficha ambiental o el borrador de los

términos de referencia, según el caso, y en función de la descripción de la actividad o proyecto propuesto, el promotor identificará el marco legal e institucional en el que se inscribe su actividad o proyecto propuesto. El análisis institucional tiene como finalidad la identificación de todas las autoridades ambientales de aplicación que deberán participar en el proceso de evaluación de impactos ambientales, así como la autoridad ambiental de aplicación responsable (AAAr) que liderará el proceso. Este análisis formará parte integrante de la ficha ambiental o del borrador de los términos de referencia para el estudio de impacto ambiental a ser presentado ante la AAAr para su revisión y aprobación.

La Autoridad Ambiental Nacional elaborará una norma técnica para la identificación de las Autoridades Ambientales de Aplicación - AAA, así como de la responsable de entre ellas, en línea con el presente Título.

En este Artículo se explica cual es la función de la Autoridad Ambiental responsable, una vez que los técnicos Auditores realicen sus estudios ambientales y den sus informes correspondientes la Autoridad Ambiental debe analizar y determinar si cumple con todos los requisitos se aprueba la ficha ambiental o del borrador de los términos de referencia para el estudio de impacto ambiental a ser presentado ante la Autoridad Ambiental para su revisión y aprobación.

Art. 22.- Inicio y determinación de la necesidad de un proceso de evaluación de impactos ambientales.- Antes de iniciar su realización o ejecución, todas las actividades o proyectos propuestos de carácter nacional, regional o local, o sus modificaciones, que conforme al artículo 15 lo ameriten, deberán someterse al proceso de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo a las demás normas pertinentes y a la Disposición Final Tercera de este Título así como los respectivos sub - sistemas de evaluación de impactos ambientales sectoriales y seccionales acreditados ante el SUMA. Para iniciar la determinación de la necesidad (o no) de una evaluación de impactos ambientales (tamizado), el promotor presentará a la autoridad ambiental de aplicación responsable (AAAr)

a) la ficha ambiental de su actividad o proyecto propuesto, en la cual justifica que dicha actividad o proyecto no es sujeto de evaluación de impactos ambientales de conformidad con

el artículo 15 de este Título y la Disposición Final Quinta; o,

b) el borrador de los términos de referencia propuestos para la realización del correspondiente estudio de impacto ambiental luego de haber determinado la necesidad de una evaluación de impactos ambientales de conformidad con el 15 de este Título.

En el caso de que el promotor tenga dudas sobre la necesidad de una evaluación de impactos ambientales de su actividad o proyecto propuesto o sobre la autoridad ambiental de aplicación responsable, deberá realizar las consultas pertinentes de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de este Título.

La ficha ambiental será revisada por la AAAR. En el caso de aprobarla, se registrará la ficha ambiental y el promotor quedará facultado para el inicio de su actividad o proyecto, sin necesidad de evaluación de impactos ambientales pero sujeto al cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Si la AAAR observa o rechaza la ficha ambiental por considerar que la actividad o proyecto propuesto necesita una evaluación de impactos ambientales, el promotor deberá preparar un borrador de términos de referencia a fin de continuar con el proceso de evaluación de impactos ambientales. Si la autoridad ambiental de aplicación concluye de la revisión de la ficha ambiental que no es AAAR, notificará al promotor para que presente su ficha ambiental a la AAAR competente o en su defecto inicie las consultas de conformidad con el artículo 11 de este Título.

Una vez aprobada se registrará la ficha ambiental y el empresario quedará facultado para el inicio de su actividad o proyecto, sin necesidad de evaluación de impactos ambientales pero sujeto al cumplimiento de la normativa ambiental vigente, esto quiere decir que dicha empresa. Si la ficha ambiental por considerar que la actividad o proyecto propuesto necesita de una evaluación de impactos ambientales, el empresario deberá preparar un borrador de términos de referencia a fin de continuar con el proceso de evaluación de impactos ambientales para determinar el grado de contaminación que esta empresa puede ocasionar al medio ambiente.

Art. 23.- Términos de referencia.- Los términos de referencia para la realización de un estudio de impacto ambiental serán preparados inicialmente por el promotor de la

actividad o proyecto para la revisión y aprobación de la autoridad ambiental de aplicación responsable, previo a la incorporación de los criterios de la comunidad, de acuerdo al artículo 20 de este Título.

La AAAR podrá modificar el alcance y la focalización de los términos de referencia previo a su aprobación que se emitirá dentro del término de 15 días, modificaciones que obligatoriamente deben ser atendidos por el promotor en la realización de su estudio de impacto ambiental.

Los términos de referencia pueden ser modificados inicialmente por el empresario que está emprendiendo la obra, proyecto o actividad a realizarse previo a los criterios de la comunidad que son el ente para que una obra, proyecto o actividad se pueda realizar y es uno de los puntos más difíciles para lograr este proyecto y luego debe cumplir todos los pasos estipulados en la ley.

Art. 24.- Realización de un estudio de impacto ambiental.- El estudio de impacto ambiental se realizará bajo responsabilidad del promotor y conforme al artículo 17 de este Título y las regulaciones específicas del correspondiente sub - sistema de evaluación de impactos ambientales sectorial o seccional acreditado.

El Estudio de Impacto Ambiental tiene que realizar la persona propietaria de la obra proyecto, actividad con personas acreditadas por el Ministerio de Ambiente y deben ser personas técnicas y con amplios conocimientos en el tema para tener estudios confiables y poder desarrollar un proyecto que se beneficie la Comunidad como los empresarios.

Art. 25.- Revisión de un estudio de impacto ambiental.- La revisión de un estudio de impacto ambiental comprende la participación ciudadana sobre el borrador final del estudio de impacto ambiental, así como la revisión por parte de la AAAR en coordinación con las AAAC a fin de preparar las bases técnicas para la correspondiente decisión y licenciamiento.

Revisión, la decisión de la autoridad ambiental de aplicación responsable, que constituye la base para el respectivo licenciamiento puede consistir en:

a) observaciones al estudio presentado a fin de completar, ampliar o corregir la información;

b) un pronunciamiento favorable que motiva la emisión de la respectiva licencia ambiental;

c) un pronunciamiento desfavorable que motiva el rechazo del respectivo estudio de impacto ambiental y en consecuencia la inejecutabilidad de la actividad o proyecto propuesto hasta la obtención de la respectiva licencia ambiental mediante un nuevo estudio de impacto ambiental.

Tanto en la etapa de observaciones como en el pronunciamiento favorable o desfavorable, la autoridad ambiental de aplicación podrá solicitar:

a) Modificación de la actividad o proyecto propuesto, incluyendo las correspondientes alternativas;

Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el estudio, siempre y cuando éstas no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el dimensionamiento de la actividad o proyecto propuesto;

Realización de correcciones a la información presentada en el estudio;

Realización de análisis complementarios o nuevos; o,

Explicación por qué no se requieren modificaciones en el estudio a pesar de comentarios u observaciones específicos.

b) Aprobación. Si la autoridad ambiental de aplicación responsable considerase que el estudio de impacto ambiental presentado satisface las exigencias y cumple con los requerimientos previstos en su sub - sistema de evaluación ambiental acreditado, lo aprobará. Si el estudio fuese observado, la autoridad ambiental de aplicación deberá fijar las condiciones requisitos que el promotor deberá cumplir, en un término de 30 días, contados a partir de la fecha de presentación del mencionado estudio.

c) Resolución y Licenciamiento. AAAr notificará la aprobación del estudio de impacto ambiental al promotor, mediante la emisión de una resolución que contendrá:

C.1) La identificación de los elementos, documentos, facultades legales y reglamentarias que se tuvieron a la vista para resolver;

C.2) Las consideraciones técnicas u otras en que se fundamenta la resolución;

C.3) La opinión fundada de la autoridad ambiental de aplicación, y los informes emitidos durante el proceso, de otros organismos con competencia ambiental;

C.4) Las consideraciones sobre el proceso de participación ciudadana, conforme a los requisitos mínimos establecidos en este Título y en el respectivo sub - sistema de evaluación de impactos ambientales de la autoridad ambiental de aplicación;

C.5.) La calificación del estudio, aprobándolo y disponiendo se emita el correspondiente certificado de licenciamiento.

La licencia ambiental contendrá entre otros: el señalamiento de todos y cada uno de los demás requisitos, condiciones y obligaciones aplicables para la ejecución de la actividad o proyecto propuesto, incluyendo una referencia al cumplimiento obligatorio del plan de manejo ambiental así como el establecimiento de una cobertura de riesgo ambiental o seguro de responsabilidad civil u otros instrumentos que establezca y/o califique la autoridad ambiental de aplicación como adecuado para enfrentar posibles incumplimientos del plan de manejo ambiental o contingencias relacionadas con la ejecución de la actividad o proyecto licenciado.

En el caso de que la autoridad ambiental de aplicación determine que el estudio de impacto ambiental no satisface las exigencias y requerimientos mínimos previstos en su sub-sistema de evaluación ambiental acreditado procederá a calificarlo desfavorablemente y, acto seguido, comunicará esta decisión al promotor, mediante la resolución correspondiente.

Si un estudio de impacto ambiental ha sido calificada desfavorablemente y rechazado, de acuerdo a lo establecido en el inciso precedente, el promotor podrá impugnar esta decisión ante la autoridad ambiental de aplicación responsable de conformidad con el 26 de este Título, sin perjuicio de las acciones contenciosas a que considere con derecho.

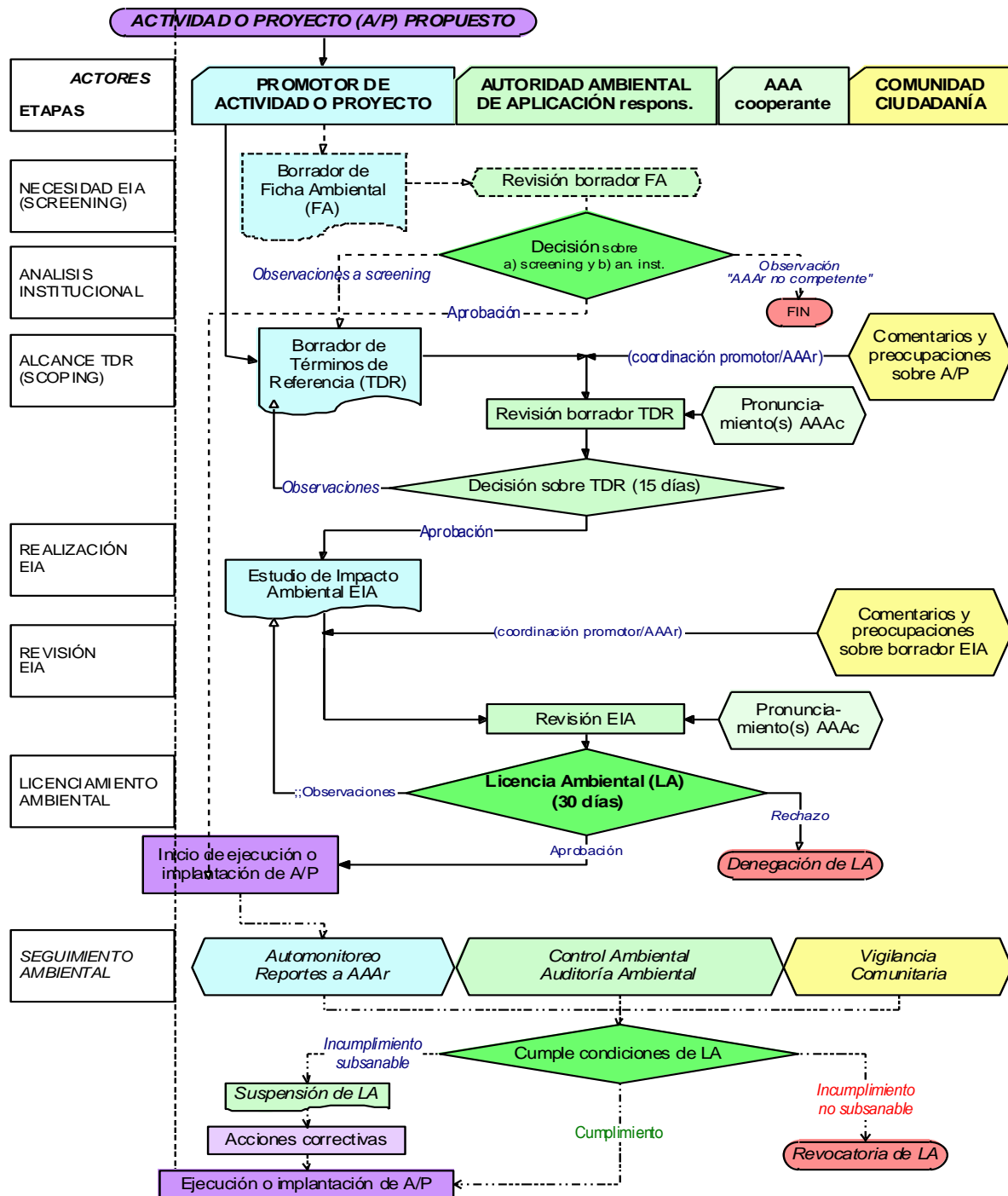
El promotor podrá presentar, cuantas veces estime conveniente, nuevos estudios de impacto ambiental que satisfagan todas las condiciones técnicas y legales, del sub-sistema de evaluación de impacto ambiental acreditado de la autoridad ambiental de aplicación haciendo referencia a las observaciones que dieron lugar a la resolución desfavorable el estudio de impacto ambiental y la denegación de la licencia ambiental.

La decisión de la autoridad ambiental de aplicación responsable después de la revisión y del análisis de todos los estudios y documentos presentados se aprueba la Licencia Ambiental y pueda comenzar con el funcionamiento de la obra, proyecto o actividad. Pero si no se aprueba dicha obra, proyecto o actividad puede impugnar dicha decisión y pueda presentar nuevos estudios con los correctivos legales del caso hasta poder obtener la Licencia Ambiental.

(Texto Unificado de la legislación Ambiental Secundaria (TULAS) p.200)

IMPACTOS AMBIENTALES DE ACUERDO AL SUMA.

Gráfico 4



3.2.5 Ordenanzas Metropolitanas

Como Antecedente tenemos a la Ordenanza No. 0146, la cual comenzaremos dando un concepto de Impacto Ambiental.- Es la alteración positiva o negativa del ambiente, provocada directa o indirectamente en forma simple o acumulada, por una obra, infraestructura, proyecto o actividad en un área determinada, teniendo en cuenta la estructura y función de los ecosistemas presentes incluyendo factores como el aire, minerales, flora, fauna, ruido y vibraciones, emanaciones y otras formas de contaminación; objetos o aéreas de valor histórico, arqueológico, estético o paisajístico, y aspectos económicos, sociales, culturales o de salud pública.

Anteriormente se le conocía con el nombre de Impacto Ambiental significativo, es el efecto sustancial y/o modificadorio, causado por una acción, o por la ejecución de una obra, infraestructura, proyecto o actividad, de uno o varios elementos del ambiente, tales como: una población biótica, un recurso natural, el ambiente estético cultural, la calidad de vida, la salud pública, los recursos naturales renovables o no renovables que pueda sacrificar los usos benéficos del ambiente a largo plazo o a corto plazo.

La (Ordenanza Metropolitana 0146) como antecedente dice lo siguiente:

La infracción está enmarcada en el Art. II.382.29 de las Infracciones en la categoría II en su literal c) Que es “Incumplir con los compromisos asumidos en el Plan de Manejo Ambiental.”

La Ordenanza Metropolitana 146 es un antecedente de la Ordenanza 213 y este Artículo trata de las infracciones sobre el plan de manejo ambiental de las actividades que se están consideradas de Alto Impacto Ambiental para el medio ambiente por parte de las empresas que han incumplido con la Ordenanza antes mencionada, esto quiere decir que deben cumplir con todos los requisitos para poder funcionar en el Distrito Metropolitano de Quito.

Las Sanciones están enmarcadas en el Art. II.382.30, en la Categoría II en el Literal c) por “Incumplir con los compromisos asumidos en el Plan de Manejo Ambiental, con una multa de 30 remuneraciones Básicas unificadas Mínimas.”

La Ordenanza antes citada en su Artículo de las sanciones impone una multa de 30 remuneraciones básicas a quienes no hayan cumplido con el proceso de regularización de dichas actividades, obras o proyectos para su funcionamiento, se ha impuesto esta sanción punitiva por el incumplimiento de los empresarios ya que se contamina el medio y no se hace nada por subsanar dichas contaminaciones al medio ambiente, con repercusiones catastróficas para la comunidad y el medio ambiente.

Ordenanza Metropolitana 213, Edición Especial No. 4, Publicada en el Registro oficial el 10 de septiembre del 2007, dividida en 8 capítulos que comprende:

Capítulo I De la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, Domésticos, Comerciales, Industriales y Biológicos potencialmente Infeccioso.

Capítulo II De la contaminación Acústica

Capítulo III De la Contaminación Vehicular

Capítulo IV De la Evaluación de Impacto ambiental

Capítulo V Del Sistema de Auditorías Ambientales y Guías de Prácticas Ambientales

Capítulo VI Del Control de la Calidad de Los Combustibles de Uso Vehicular en el Distrito Metropolitano y la Regulación de su Comercialización

Capítulo VII Para la Protección de las Cuencas Hidrográficas que abastecen al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Capítulo VIII Protección del Patrimonio Natural y Establecimiento del Subsistema de Áreas Naturales Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito

El Tema de nuestro Análisis investigativo es el Capítulo IV De la Evaluación de Impacto ambiental y el Capítulo V Del Sistema de Auditorías Ambientales y Guías de Prácticas Ambientales de la Ordenanza Metropolitana 213, que es el tema de nuestra tesis.

Capítulo IV De la Evaluación de Impacto ambiental.- Concepto.- Se llama Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al procedimiento técnico, administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado, todo esto con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo. Este procedimiento jurídico administrativo se inicia con la presentación de la memoria resumen por parte del promotor, sigue con la realización de consultas previas a personas e instituciones por parte del órgano ambiental, continúa con la realización del EsIA (Estudio de Impacto Ambiental) a cargo del promotor y su presentación al órgano sustantivo. Se prolonga en un proceso de participación pública y se concluye con la emisión de la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) por parte del Órgano Ambiental.

La (Ordenanza Metropolitana 213 Art. II.380.64) de las Infracciones dice:

En la Sección V

De las Infracciones, Sanciones, Competencia y Procedimiento dice lo siguiente:

Art. II.380.64.- INFRACCIONES.- Se consideran infracciones a las disposiciones del presente capítulo, sin perjuicio de que constituyan delito, las siguientes:

- a) Ejecutar una obra, proyecto o actividad, sin someterse al proceso de evaluación de impactos ambientales. Se incluyen las modificaciones o ampliaciones de actividades que cuentan con Certificado Ambiental por Guías de Prácticas Ambientales, Auditoría Ambiental y Auditoría Ambiental de Cumplimiento;
- b) Aportar información incompleta o errónea con el fin de obtener subrepticamente la aprobación de algún documento ambiental;
- c) La inobservancia de los términos de la aprobación de un documento ambiental (PMA), en la ejecución de una acción, obra, proyecto o actividad propuesta;

- d) No presentar los alcances, observaciones y requerimientos exigidos por la DMMA en los plazos establecidos; y,
- e) No informar a la DMMA el inicio de la acción aprobada mediante el licenciamiento ambiental.

La (Ordenanza Metropolitana 213 Art. II.380.65) sobre las Sanciones dice lo siguiente:

Art. II.380.65.- SANCIONES.- Para las infracciones tipificadas en el artículo precedente se impondrán las siguientes sanciones, sin perjuicio de aplicar las señaladas en el Código Penal o en el Art. 46 de la Ley de Gestión Ambiental y otras que en aplicación del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito sean pertinentes:

Para Estudios de Impacto Ambiental:

- a) La infracción señalada en la letra a del Art. 380.64 se sancionará con la suspensión de la ejecución de la obra. Proyecto o actividad y multa de diez a cien remuneraciones básicas unificadas mínimas (RBUM), dependiendo de la magnitud del impacto ambiental causado, posible o previsible. El proponente deberá realizar la evaluación de impacto ambiental que corresponda y obtener los permisos pertinentes, dentro del plazo que al efecto se le conceda; si vence este plazo y no se ha dado cumplimiento a esta disposición, se mantendrá la suspensión de la ejecución del proyecto, obra o actividad.
- b) La infracción de la letra b del Art. 380.64, se sancionará con una multa de diez a cincuenta remuneraciones básicas unificadas mínimas (RBUM), y anulación del trámite para la obtención de la aprobación de un documento ambiental: y si es del caso, la revocatoria de la aprobación del documento ambiental y de todas las autorizaciones, permisos y licencias que se hayan emitido, y se dispondrá la suspensión de la ejecución del proyecto, obra y actividad hasta que obtenga el nuevo documento que le habilite a ejecutarla.
- c) La infracción de la letra c) del Art. 380.64. se sancionará con la revocatoria de la aprobación

del documento ambiental y de todas las autorizaciones, permisos y licencias que se hayan emitido: suspensión de la ejecución de la obra, proyecto o actividad y multa de diez a veinte remuneraciones básicas unificadas mínimas RBUM, dependiendo de la magnitud del impacto ambiental causado, posible o previsible, hasta tanto se realicen los correctivos pertinentes y se obtengan los permisos correspondientes.

- d) La infracción de la letra d) del Art. 380.64, se sancionará con una multa de una a cinco remuneraciones básicas unificadas mínimas y su reincidencia con la iniciación del trámite de EIA.
- e) No informar a la DMMA el inicio de la acción aprobada se sancionará con una multa de un RBUM.

En caso de incumplimiento de la sanción impuesta, se le impondrá una multa del 100% al 1.000% de lo sancionado previamente y se suspenderá en forma indefinida la ejecución de la obra, proyecto o actividad.

Todo lo que se recaude en concepto de multas, ingresará al Fondo Ambiental y servirá para financiar proyectos ambientales. La autoridad que emita la exención prevista en el Art. II.380.2, de manera diferente a la establecida, estará sujeta a ser destituida en caso de hacer uso doloso de esta facultad, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar.

La Ordenanza Metropolitana 213 está vigente para el Distrito Metropolitano de Quito para identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado, todo esto con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo. También está estipulada la sanción administrativa que varían de acuerdo a la infracción cometida, esto puede ser una multa económica o también la suspensión definitiva o provisional para poder entrar en funcionamiento dicha actividad, proyecto o actividad.

Para Declaraciones Ambientales

- a) La infracción señalada en la letra a) del Art. 380.64, se sancionará con la suspensión de la ejecución de la obra, proyecto o actividad y multa de dos a diez remuneraciones básicas unificadas mínimas (RBUM), dependiendo de la magnitud del impacto ambiental causado, posible o previsible. El proponente deberá realizar la declaración ambiental y obtener los permisos pertinentes, dentro del plazo que al efecto se le conceda; si vence este plazo y no se ha dado cumplimiento a esta disposición, se mantendrá la suspensión de la ejecución del proyecto, obra o actividad.

- b) La infracción de la letra b) del Art. 380.64, se sancionará con una multa de dos a cinco remuneraciones básicas unificadas mínimas (RBUM) y anulación del trámite para la obtención de la aprobación de un documento ambiental; y si es del caso, la revocatoria de la aprobación del documento ambiental y de todas las autorizaciones y permisos que se hayan emitido, y se dispondrá la suspensión de la ejecución del proyecto, obra o actividad hasta que obtenga el nuevo documento que le habilite a ejecutarla.

- c) La infracción de la letra c) del Art. 380.64, se sancionará con la revocatoria de la aprobación del documento ambiental y de todas las autorizaciones y permisos que se hayan emitido, suspensión de la ejecución de la obra, proyecto o actividad, y multa de una a cinco remuneraciones básicas unificadas mínimas RBUM, dependiendo de la magnitud del impacto ambiental causado, posible o previsible, hasta tanto se realicen los correctivos pertinentes y se obtengan los permisos correspondientes.

En caso de incumplimiento de la sanción impuesta, se le impondrá una multa del 100% al 1.000% de lo sancionado previamente y se suspenderá en forma indefinida la ejecución de la obra, proyecto o actividad.

Todo lo que se recaude en concepto de multas, ingresará al Fondo Ambiental y servirá para financiar los proyectos ambientales y pagar el servicio prestado por revisión y seguimiento de la DAM y PMA a las entidades de seguimiento contratadas.

La autoridad que emita la exención prevista en el Art.11.380.2, de manera diferente a la establecida, estará sujeta a ser destituida en caso de hacer uso doloso de esta facultad, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar.

En lo que se refiere a Declaraciones Ambientales también se trata de las sanciones impuestas por la Autoridad Administrativa a las empresas que incumplen la Ordenanza 213 vigente para el Distrito Metropolitano de Quito y la sanción puede ser económica o puede ser la suspensión definitiva o temporal de la obra, proyecto o actividad para garantizar de esta manera el funcionamiento de las empresas de acuerdo con la Comunidad y mediante el cumplimiento de la Norma.

Art. 11.380.66.- COMPETENCIA.- Es competente para conocer las infracciones a las normas de este capítulo y establecer las sanciones correspondientes, el Comisario Metropolitano Ambiental, cuando no se tratare de acciones civiles o penales, en cuyo caso lo serán los jueces competentes. Para sancionar las infracciones correspondientes a la Sección II de este capítulo, referente a la Declaración Ambiental, serán competentes las Comisarías de Salud y Ambiente.

Art. 11.380.67.- PROCEDIMIENTO.- El procedimiento a aplicarse para el juzgamiento de las infracciones administrativas que contiene este capítulo, será el señalado en el Art. 398 del Código de Procedimiento Penal, y en forma supletoria, en lo que no se oponga. Se aplicará el procedimiento señalado en el Código de la Salud para el juzgamiento de infracciones, sin perjuicio de las acciones legales civiles o penales, será competencia del Comisario Metropolitano Ambiental y Comisarios de Salud y Ambiente; y en caso de que se trate de problemas de zonificación, también intervendrán los comisarios metropolitanos zonales.

La competencia para conocer y sustanciar dicho procedimiento administrativo es del Comisario Metropolitano Ambiental que se iniciara con un Auto Motivado, y seguirá el proceso hasta cuando el regulado presente los documentos o subsane la infracción en la etapa de prueba si esto sucede se Archivara el Proceso Administrativo Sancionador, caso contrario el Comisario realizará la Resolución Motivada imponiendo una multa de acuerdo a la infracción que haya cometido. El Procedimiento Administrativo Sancionador tiene la competencia el Comisario de hacer cumplir con lo estipulado en la Ordenanza 213, mediante el Archivo o la Resolución e imponiendo una multa económica o la suspensión de la obra, proyecto o actividad.

Capítulo V del Sistema de Auditorías Ambientales y Guías de Prácticas Ambientales

Concepto de Consultoría Ambiental.- Es la especialidad de ofrecer asesoría, capacitación y trámites relacionados con todos los asuntos en materia ambiental de una empresa u organización. Un consultor ambiental trabaja con el cliente en áreas como la contaminación de agua, el aire y el suelo, la evaluación de impacto ambiental, auditoría ambiental, la gestión de residuos, política ambiental, gestión ecológico-territorial, el ruido y la medida de las vibraciones y la gestión ambiental. La auditoría medioambiental surge como resultado de esta creciente preocupación acerca de la problemática medioambiental y del papel asumido por las empresas en cuanto a la responsabilidad que les concierne. Se trata de una herramienta poderosa, capaz de evaluar y sentar las bases de una política cuidadosa con el medioambiente, que tenga en cuenta el entorno que rodea a las industrias.

Así para analizar los riesgos medioambientales que pudiera generar el desempeño de una actividad y evaluar su impacto, se desarrollan auditorías medioambientales con objeto de formular programas que permitan cumplir con legislación vigente sobre estos temas en cada país, sector de actividad, región, etc.

Las empresas que desean conocer y analizar su situación respecto al medio ambiente realizan auditorías de este tipo, ya sean internas, efectuadas por la propia empresa o externas, solicitadas organizaciones especializadas.

La (Ordenanza Metropolitana 213 Art. II.381.27) dice:

Art. 11.381.27.- INFRACCIONES.- El procedimiento a aplicarse para el juzgamiento de las infracciones administrativas contenidas en esta sección de la presente ordenanza, será el señalado en el Art. 398 del Código de Procedimiento Penal y en forma supletoria, en lo que no se oponga, a lo señalado en el Código de la Salud.

Se consideran infracciones a las disposiciones de este capítulo las que se determinan a continuación, cuya gravedad está dada de acuerdo a la categoría en la que se encuentran:

1) Categoría 1

- a)** No estar registrado en la DMMA o su delegado;
- b)** No disponer de facilidades técnicas para la realización del monitoreo y toma de muestras de las descargas y emisiones;
- c)** Incumplir con la presentación de los reportes de caracterización o presentar caracterizaciones con número de muestreos incompletos;
- d)** Presentar reportes de caracterización extemporáneos;
- e)** Incumplir con lo dispuesto en el Art. 11.381.51, de la Notificación de Situaciones de Emergencia:
- f)** Presentación de documentos ambientales extemporáneos (auditorías, alcances solicitados, documentos de descargo, planes de manejo, programas perentorios de cumplimiento);
- g)** No presentar, los documentos, aclaraciones o alcances solicitados por la DMMA o su delegado;
- h)** Aprobar documentos ambientales por parte de las entidades de seguimiento, sin observar los lineamientos establecidos por la DMMA y sin contar con medidas para mitigar los impactos ambientales:
- i)** Presentar información errónea por parte del regulado, sobre la base de cualquier documento Auditoría Ambiental, Plan de Manejo Ambiental y alcance solicitado;
- j)** Realizar la gestión de los residuos sin contar con la certificación como gestor ambiental;
- k)** No cumplir con la entrega de residuos a los gestores autorizados;

- l)** Transportar residuos sin la debida autorización;
- m)** Los consultores que hayan sido objeto de una queja formal debidamente justificada por parte del contratante por algún tipo de incumplimiento de orden ambiental;
- n)** Los que se encuentren involucrados en problemas por utilización fraudulenta de documentos;
- ñ)** Los laboratorios ambientales que presten sus servicios sin estar debidamente registrados en la DMMA; y,
- o)** Los regulados que contraten a consultores que no están registrados y calificados en la DMMA.

2) Categoría II

- a)** Los laboratorios ambientales que ofertan análisis y que reporten datos sin aplicar los procedimientos establecidos y sin contar con equipos para realizar los análisis;
- b)** No contar con el CA en los plazos y bajo los lineamientos establecidos por la DMMA;
- c)** No haber cumplido con la presentación de la AA, PMA o alcance solicitado;
- d)** Incumplir con los compromisos asumidos en el PMA;
- e)** No permitir la práctica de inspecciones de control o muestreo de descargas líquidas y emisiones a la atmósfera que realice el personal legalmente autorizado;
- f)** Causar derrames o emisiones de materias primas, productos químicos peligrosos, residuos sólidos no domésticos, o lodos potencialmente contaminantes que perjudiquen la salud y bienestar de la población, la infraestructura o el medio ambiente en general, sin perjuicio de

las acciones civiles y penales que estos hechos pueden producir, excepto en situaciones de emergencia;

- g)** Realizar la gestión de residuos tóxicos y peligrosos, sin la debida delegación o acreditación de parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, o cualquier incumplimiento en los temas del Art.11.381.9 sobre los Gestores Ambientales; y,
- h)** Por realizar una denuncia que en el debido proceso se determina que es falsa.

La (Ordenanza Metropolitana 213 Art. II.381.28) dice lo siguiente:

Art. II.381.28.- SANCIONES.- Para determinar el monto de la sanción que corresponda, se aplicará el siguiente criterio de clasificación de los regulados de acuerdo a los ingresos totales de la declaración impositiva anual realizada por los regulados al SRI, estableciendo dos categorías: A el de mayor ingreso, que supera los 519.999 dólares americanos de ingresos totales al año declarados al SRI; y, B cuyos ingresos totales declarados al SRI son inferiores a los 520.000 dólares americanos.

Para determinar el tipo de categoría, el regulado deberá presentar una copia certificada de la declaración en caso de que no se encuentre registrado en la base de datos de la DMMA, entregada por el SRI.

Las sanciones a las infracciones determinadas en el artículo anterior serán impuestas por la Comisaría Metropolitana Ambiental. De acuerdo con la gravedad de las mismas. Actuará de oficio o a petición de parte, es decir previa denuncia ciudadana de conformidad con el artículo 11.381.52. E informe de la DMMA. Las Sanciones a imponerse se aplicarán sobre la base de la Remuneración Básica Unificada Mínima (RBUM) vigente a la fecha de la sanción y serán las siguientes:

Tabla 4

Categoría 1

Infracción	Tipo de Regulado A	Tipo de Regulado B
	RBUM	RBUM
A	2	1
B	5	2.5
C	5	2.5
D	2	1
E	5	2.5
F	5	2.5
G	5	3
I-1	1	0.5
I	5	2.5
K	1	0.5
L	5	5
M	1	1
O	1	1

Realzar la gestión de los residuos sin contar con la certificación como gestor ambiental: 1.5 RBUM para gestor artesanal y 5 RBUM para gestor tecnificado.

N. Los que se encuentren involucrados en problemas por utilización fraudulenta de documentos, se someterán a la justicia ordinaria sin que esto afecte al regulado.

Ñ. Los laboratorios ambientales que presten sus servicios sin estar debidamente registrados en la DMMA 0.5 RBUM por cada fuente o punto de descarga monitoreada.

Tabla 5

Categoría II:

Infracción	Tipo de Regulado A	Tipo de Regulado B
B	10	5
C	20	10
D	30	15
E	20	10
F	50	25
G	30	15

A. Los laboratorios ambientales que oferten análisis y que reporten datos sin aplicar los procedimientos establecidos y sin contar con equipos para realizar los análisis. 1 RBUM por cada parámetro.

B. Si el incumplimiento causa contaminación ambiental a los recursos se incrementará la sanción de la siguiente forma:

La evaluación de la caracterización mostrará en cuales parámetros se supera la Norma Técnica.

En base a la relación [Valor Medido del Parámetro Excedido (VMPE)/Límite Máximo Permissible (LMP) de cada uno de los parámetros excedidos se obtiene una razón que al multiplicar por la sanción administrativa definida en D entrega el valor que se aumentará a la sanción inicial.

Se aplicará la siguiente fórmula:

C. Al denunciante, si luego del proceso se determina que el contenido de su denuncia no tiene fundamento de riesgo: 4RBUM.

Los casos de primera reincidencia comprobada serán sancionados con la duplicación de la multa impuesta y la paralización de la fuente generadora del impacto, hasta que se implemente la medida o se propongan las medidas actualizando el PMA.

Los casos de segunda reincidencia serán sancionados con la suspensión del Certificado Ambiental, paralización del establecimiento hasta por cinco días y la duplicación de la multa impuesta en la primera reincidencia.

La (Ordenanza Metropolitana 213 Art. II.381.28) dice:

Los casos de tercera reincidencia serán sancionados con revocatoria del Certificado Ambiental y la clausura del establecimiento.

La (Ordenanza Metropolitana 213 Art. II.381.29) estipula lo siguiente:

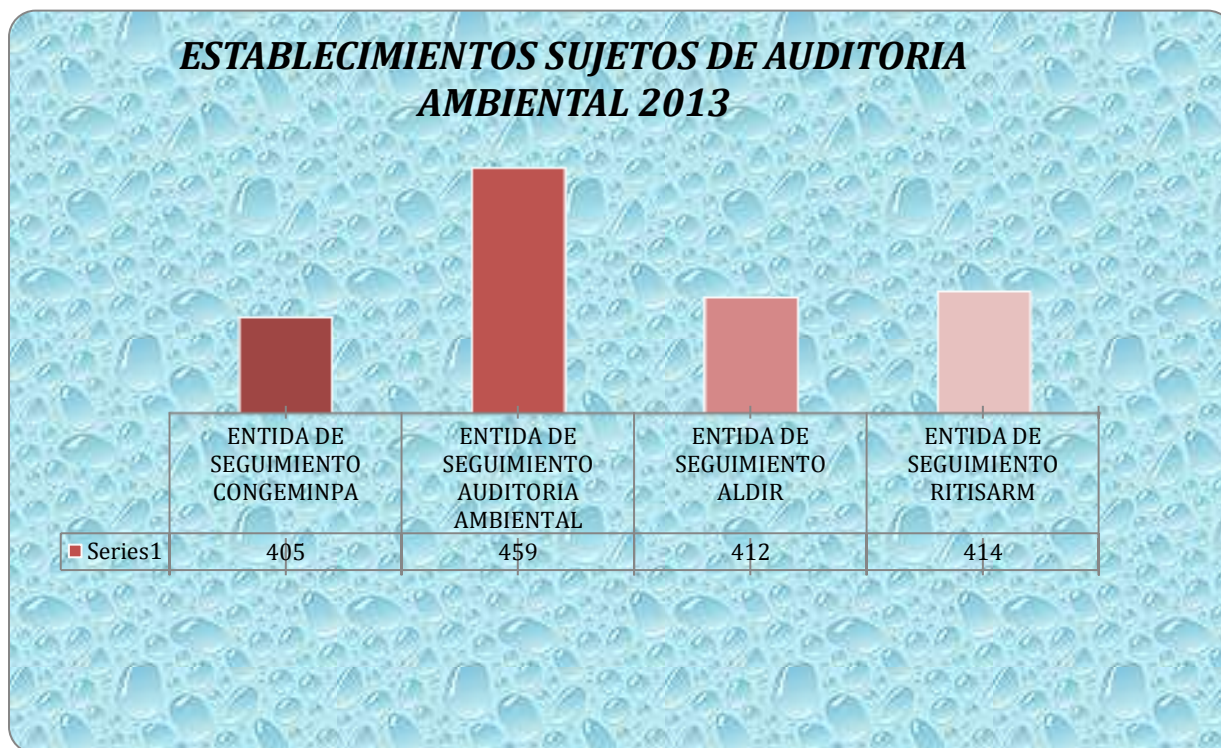
Art. II.381.29.- EXENCIÓN DE SANCIONES.- Si el regulado informa a las autoridades correspondiente que se encuentra en incumplimiento de las normas técnicas ambientales, causadas por procedimientos de puesta en marcha de medidas técnicas o emergencias, dentro de las 24 horas de haber incurrido en tal incumplimiento o dentro del primer día hábil después de feriados o fines de semana, no será sancionado con la multa prevista.

3.3 Empresas de Alto Impacto Ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito.

Cuadro 1

ESTABLECIMIENTOS SUJETOS DE AUDITORIA AMBIENTAL DEL 2013			
ENTIDAD DE SEGUIMIENTO CONGEMINPA	ENTIDAD DE SEGUIMIENTO AUDITORIA AMBIENTAL	ENTIDAD DE SEGUIMIENTO ALDIR	ENTIDAD DE SEGUIMIENTO RITISARM
405	459	412	414

Gráfico 5



La (Ordenanza Metropolitana 213 Art. II.380.64) dice lo siguiente:

Art. II.380.64.- Se consideran infracciones a las disposiciones del presente capítulo, sin perjuicio de que constituyan delito, las siguientes:

- a) Ejecutar una obra, proyecto o actividad, sin someterse al proceso de evaluación de impactos ambientales. Se incluyen las modificaciones o ampliaciones de actividades que cuentan con Certificado Ambiental por Guías de Prácticas Ambientales, Auditoría Ambiental y Auditoría Ambiental de Cumplimiento;
- b) Aportar información incompleta o errónea con el fin de obtener subrepticamente la aprobación de algún documento ambiental;
- c) La inobservancia de los términos de la aprobación de un documento ambiental (PMA), en la ejecución de una acción, obra, proyecto o actividad propuesta;
- d) No presentar los alcances, observaciones y requerimientos exigidos por la DMMA en los plazos establecidos; y,
- e) No informar a la DMMA el inicio de la acción aprobada mediante el licenciamiento ambiental.

3.5 Sanciones

La (Ordenanza Metropolitana 213 Art. II.380.65) dice:

Art. II.380.65.- Para las infracciones tipificadas en el artículo precedente se impondrán las siguientes sanciones, sin perjuicio de aplicar las señaladas en el Código Penal o en el Art. 46 de la Ley de Gestión Ambiental y otras que en aplicación del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito sean pertinentes:

- a) La infracción señalada en la letra a del Art. 380.64. Se sancionará con la suspensión de la

ejecución de la obra. Proyecto o actividad y multa de diez a cien remuneraciones básicas unificadas mínimas (RBUM), dependiendo de la magnitud del impacto ambiental causado, posible o previsible. El proponente deberá realizar la evaluación de impacto ambiental que corresponda y obtener los permisos pertinentes, dentro del plazo que al efecto se le conceda; si vence este plazo y no se ha dado cumplimiento a esta disposición, se mantendrá la suspensión de la ejecución del proyecto, obra o actividad.

b) La infracción de la letra b del Art. 380.64, se sancionará con una multa de diez a cincuenta remuneraciones básicas unificadas mínimas (RBUM), y anulación del trámite para la obtención de la aprobación de un documento ambiental: y si es del caso, la revocatoria de la aprobación del documento ambiental y de todas las autorizaciones, permisos y licencias que se hayan emitido, y se dispondrá la suspensión de la ejecución del proyecto, obra y actividad hasta que obtenga el nuevo documento que le habilite a ejecutarla.

c) La infracción de la letra c) del Art. 380.64. se sancionará con la revocatoria de la aprobación del documento ambiental y de todas las autorizaciones, permisos y licencias que se hayan emitido: suspensión de la ejecución de la obra, proyecto o actividad y multa de diez a veinte remuneraciones básicas unificadas mínimas RBUM, dependiendo de la magnitud del impacto ambiental causado, posible o previsible, hasta tanto se realicen los correctivos pertinentes y se obtengan los permisos correspondientes.

d) La infracción de la letra d) del Art. 380.64, se sancionará con una multa de una a cinco remuneraciones básicas unificadas mínimas y su reincidencia con la iniciación del trámite de EIA.

d) No informar a la DMMA el inicio de la acción aprobada se sancionará con una multa de un RBUM.

En caso de incumplimiento de la sanción impuesta, se le impondrá una multa del 100% al

1.000% de lo sancionado previamente y se suspenderá en forma indefinida la ejecución de la obra, proyecto o actividad.

Todo lo que se recaude en concepto de multas, ingresará al Fondo Ambiental y servirá para financiar proyectos ambientales. La autoridad que emita la exención prevista en el Art.11.380.2, de manera diferente a la establecida, estará sujeta a ser destituida en caso de hacer uso doloso de esta facultad, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar.

De un análisis a la Ordenanza metropolitana 213 vemos que a los regulados que incumplen la Ordenanza antes citado las sanciones son muy drásticas y la multa es muy alta sin embargo no se cumple ya que hemos comprobado en los archivos de la Agencia Metropolitana de Control con alto índice que de una u otra manera contaminan al medio ambiente.

La Ordenanza Metropolitana 0404 reformativa de la Ordenanza Metropolitana No.213, la misma que se divide en tres Capítulos que comprende:

Capítulo IV Del Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales y Control Ambiental.

Capítulo V de la Regulación, Sección I

Procedimiento de Regulación para Actividades que Generan Impactos o Riesgos Ambientales Significativos, Actividades que generan Impactos o Riesgos Ambientales Significativos Altos.

Capítulo VI régimen Sancionatorio

La (Ordenanza 404 Art. II.380.22 Art. II.380.62) dice lo siguiente:

Nos da una definición clara sobre Estudios Impactos Ambientales.- Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los impactos ambientales. Además, describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensa las alteraciones ambientales significativas.

Actividades que generan Impactos o Riesgos Ambientales significativos altos

Art.II.380.62.- Obligatoriedad de someterse al proceso de evaluación de impactos ambientales.- En virtud de lo establecido, toda obra, proyecto, actividad y en general toda acción que se desarrolle dentro del territorio del Distrito Metropolitano de Quito y que haya sido categorizada como de impacto o riesgo ambiental significativo alto, está obligada a la obtención de la Licencia Ambiental a través de la aprobación de los Términos de Referencia y Estudio de Impacto Ambiental.

De las infracciones relativas al Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales.

Art.II.380.104.-Infracciones y sanciones durante el proceso de categorización y regulación ambiental.- Se consideran infracciones a las disposiciones del presente capítulo, sin perjuicio de que puedan constituir delito, las siguientes:

- a) La falta de información a la Autoridad Ambiental Distrital con anterioridad al inicio de la acción aprobada mediante el licenciamiento Ambiental, lo cual se sancionará con una multa equivalente a una remuneración básica unificada.
- b) La ejecución de una obra, proyecto o actividad categorizada como de impacto ambiental significativo bajo, sin contar con la aprobación de la correspondiente Ficha Ambiental lo cual sancionará con la suspensión de la actividad y una multa equivalente a 30 remuneraciones básicas unificadas.

- c) La ejecución de una obra, proyecto o actividad categorizada como de impacto ambiental significativo alto, sin contar con licencia Ambiental, lo cual se sancionará con la suspensión de la actividad y una multa equivalente a 50 remuneraciones básicas unificadas.
- d) La declaración o presentación de información falsa, con el fin de obtener la aprobación de la autoridad o de algún documento ambiental, lo cual se sancionará con una multa equivalente a 100 remuneraciones básicas unificadas y la anulación del trámite para la obtención de la aprobación de un documento ambiental.

Si una vez obtenida la aprobación del documento ambiental se llegare a determinar la falsedad de la información proporcionada, se revocará el acto de aprobación del documento ambiental y todas las autorizaciones, permisos y licencias que se hayan emitido, se dispondrá la suspensión de la ejecución del proyecto, obra o actividad y se impondrá la multa detallada en el inciso anterior.

La Ordenanza Metropolitana 404, reformativa de la Ordenanza Metropolitana 213 dentro de un análisis se puede observar que se ha reducido drásticamente las multas que se imponían después de un proceso administrativo sancionador, cabe señalar que con la anterior ordenanza no se cumplía con regularización y seguían contaminando, no se podrá cambiar mientras no concienticemos a la sociedad empresarial a vivir conjuntamente dentro un ambiente sano y equilibrado.

CAPITULO IV

REALIDAD PRÁCTICA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SANCIONADORES AMBIENTALES EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO.

En el presente capítulo se abordará la realidad estadística de los expedientes administrativos sancionadores iniciados y existentes solo en el año 2013 en la unidad desconcentrada metropolitana de control en materia ambiental, iniciados a empresas sometidas a control por parte de las entidades colaboradoras, por los serios incumplimientos ambientales registras en aras de una protección ambiental, o la prevención, mitigación del mismo; para lo cual se describe lo que sigue:

4.1 Casos existentes en la Unidad Metropolitana de Control Ambiental en el año 2013

Para iniciar la presente es preciso describir que los datos que se presentaran se tomaran de una fuente oficial con las respectivas autorizaciones para nuestros fines investigativos en el tema de los impactos ambientales por parte de empresas que generan contaminación en el DMQ.

Los datos que a continuación se detallan se han obtenido de la secretaria de la unidad desconcentrada metropolitana de control en materia ambiental, para lo cual se ha realizado cuadros estadísticos exhaustivos de los datos que arrojan, para la cual se han trabajado con los funcionarios de la misma.

Los datos reales de contaminación de Alto Impacto encontrados en la Comisaria Metropolitana Ambiental perteneciente al año 2013 son los siguientes:

Cuadro 2

ICRES DEL 2013

<i>CRES ABIERTOS</i>	<i>ICRES ARCHIVADOS</i>	<i>ICRES DEVUELTOS</i>	<i>ICRES POR ABRIR</i>	<i>TOTAL DE ICRES INGRESADOS</i>
204	0	13	1	218

Gráfico 6

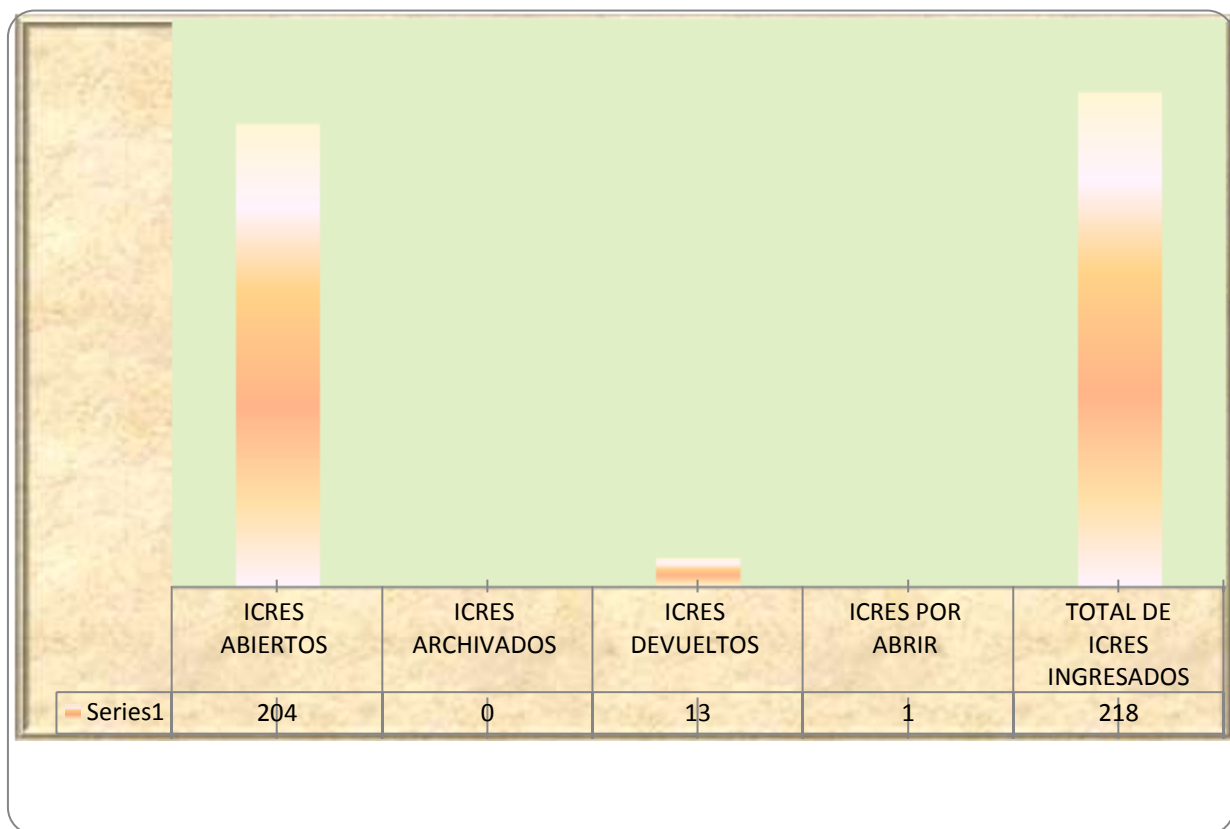


Tabla 6 EXPEDIENTES ABIERTOS CON ICRES 2013.

ADECUARON SU CONDUCTA A LA NORMA	RESUELTOS CON SANCIÓN	ANULADOS	EN TRAMITE	TOTAL DE EXPEDIENTES
62	37	0	105	204

Dentro de las tablas 01 y 02; y el cuadro No. 01 anteriores se verifica que los actos administrativos de inicio de información de incumplimiento de normativa metropolitana ambiental ingresados en la Unidad de Metropolitana de Control Ambiental hasta la fecha de corte de la Información se ha denotado en una regularización de conducta típica que dio inicio de apertura de expediente en un 30.4 % , es decir que solo este pequeño porcentaje adecuó su conducta y por lo contrario lo restante continuó con su tradicional proceso de contaminación ambiental, por lo como se describen los datos, a pesar de que exista expediente administrativo, ello no implica que inmediatamente se vaya a adecuar su conducta infractora, a pesar de que en muchos de estos casos se impongan multas drásticas al administrado infractor que le interesa más su beneficio personal poco o nada parece importarle pagar una multa, para poder continuar en su actividad económica contaminadora, al parecer esto de la multa en ciertos casos solo parece ser una especie de patente de corso para seguir contaminando.

De los cuadros anteriormente presentado se visibiliza un porcentaje de 51.4% en trámite pese a que la normativa jurídica dice que los procesos no deben demorar más de treinta días, empero en esta investigación que estamos realizando por el mes de marzo de 2014 aún se verifica la no culminación de los expedientes, por parte de los mismos administrados que por lo general son grandes empresas, que estas a su vez a través de su representante jurídico buscan los medios para dilatar un proceso por medio de sus representantes legales y estos a su vez se valen de diferentes medios para retrasar los procesos o buscar que no se lleguen a una resolución, para lo cual hasta pueden llegar a interponer recursos extraordinarios.

En lo que respecta a expedientes que de una u otra forma se observa alguna dilatación indebida aparece en lo que en la vía ordinaria judicial se conoce como incidente, lo que la doctrina no le ubica con un nombre en específico como tal pero que a la postre el efecto ultimo casi siempre el parecido solo que con diferentes finalidades, más allá que estamos dentro una vía administrativa y que existen potestades exorbitantes de administración pública limitado al principio constitucional del Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador y que además de la existencia de intereses de grandes empresas que no les interesa proteger al medio donde se desenvuelven, sino solamente sus propios fines mediáticos e individualistas.

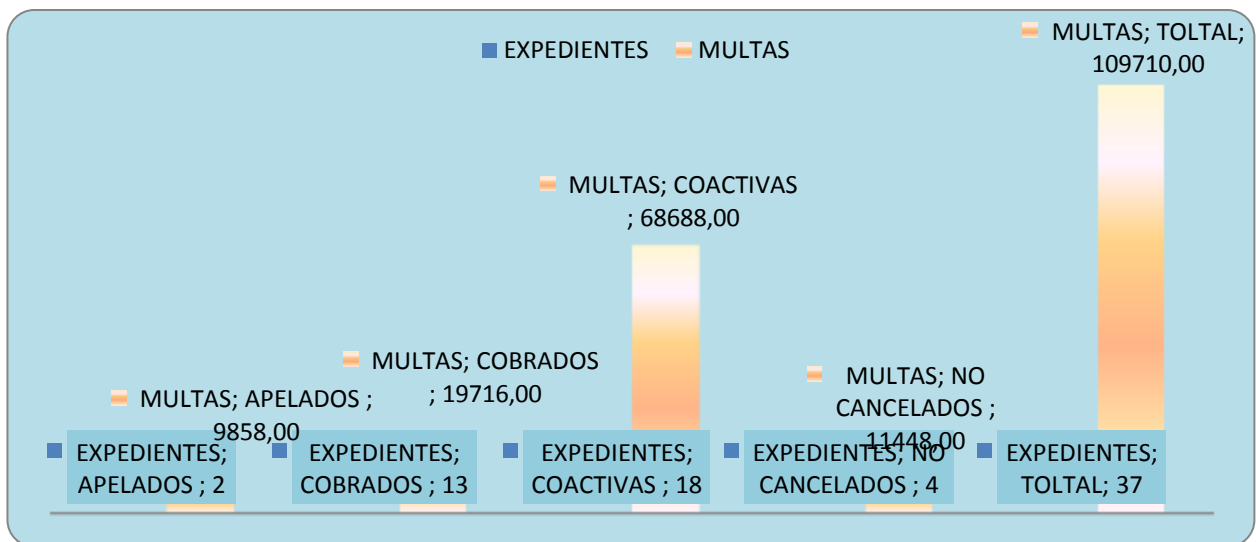
Cabe destacar que también existen de las otras empresas que si se preocupan del bienestar del ambiente que aunque ya después de un informe de incumplimiento y con una posterior notificación de un “Auto de inicio para iniciar un Proceso Sancionador” si muestran su posterior preocupación para lo cual posteriormente con toda la predisposición de adecuar su conducta se asesoran para efectivizar la misma, y en ciertas ocasiones se allanan a un proceso de adecuación y multa, mostrando toda la intencionalidad y la buena fe dentro las actuaciones de las empresas; claro que a estos casos también se debe sumar los existentes que no hicieron falta que se le emita un informe de incumplimiento sino que por todo lo alto cumplieron con todos los requerimientos exigidos por la norma y la comunidad, lo se demuestran altos estándares de calidad y niveles elevados de compromiso con el ambiente, el país y el mundo.

Del porcentaje 30.4% que corresponde a los expedientes que dentro del ejercicio fiscal 2013 se efectivizó una resolución se determinará que siguen mostrando subdivisiones por temas de clasificación y diferenciación, ya que si bien es cierto que la autoridad competente se encarga de imponer una sanción pecuniaria que términos morochos es el equivalente a la multa, no todos son los que efectivamente llegan a cumplir con dicha orden, por lo cual plantean los diferentes recursos administrativos que les dé la ley, o simplemente con el cumplimiento o no cumplimiento con la obligación (dar, hacer o no hacer) se incurre en una condición que conlleva a una nueva categorización, en función del cumplimiento o no de un presupuesto previsto por la ley; así tenemos en la tabla No. 03:

Tabla 7

ESTADO	EXPEDIENTES	MULTAS
APELADOS	2	9858,00
COBRADOS	13	19716,00
COACTIVAS	18	68688,00
NO CANCELADOS	4	11448,00
TOTAL	37	109.710,00

Gráfico 7



De los datos obtenidos en la tabla anterior se clasifican los expedientes por de acuerdo con su encasillamiento en un presupuesto fáctico en razón del cumplimiento de lo ordenado en la resolución administrativa en:

a) apelados, si dentro del término legal después de haber sido notificado legalmente con la resolución respectiva se ha interpuesto un recurso vertical ante la autoridad superior, con el cumplimiento de los demás requisitos que exige la ley, es decir el pago en consignación del valor de la multa.

A lo que respecta sobre la apelación se puede complementar con lo que sigue “Una apelación, consiste en una solicitud para reconsiderar una decisión oficial por parte de un tribunal, o más bien todo el proceso involucrado en ello; por esto es considerada un “recurso procesal”, o sea un medio legal para modificar una resolución judicial.

Dependiendo de cada caso y la ley vigente en cada país, el procedimiento varía enormemente, pero básicamente te puedo decir que la idea es que un órgano jurisdiccional jerárquicamente superior, puede revisar las decisiones de los órganos inferiores en este ordenamiento, dando lugar a la posibilidad de revisiones en las decisiones tomadas. Entonces básicamente en la apelación lo que se hace es llevar el caso a un órgano jurisdiccional de superior jerarquía, con la capacidad de revisar la sentencia o decisiones tomadas.”

Lo que en sentido estricto de la realidad se plantea este recurso ante la autoridad jerárquica superior que es el alcalde metropolitano, pero que como una de sus atribuciones consiste en delegar sus funciones, las delega a la procuraduría metropolitana para que ésta a su vez con su cuerpo colegiado de profesionales se encarguen de solicitar el expediente a la primera autoridad que emitió la resolución inicial dentro del caso apelado, para una revisión integral de todo lo actuado y así verificar si existe armonía entre lo resuelto y la normativa legal, para lo cual se verificará previamente si existe los elementos esenciales de toda infracción, es decir la materialidad y la responsabilidad.

Terminado el proceso que se inicia en la procuraduría metropolitana, dependiendo del resultado que se arroje en la resolución, la unidad correspondiente debe dar cumplimiento de lo dispuesto en la resolución de recurso una vez que se encuentre ejecutoriada, empero si el administrado como tal aún se siente perjudicado y tiene nuevos elementos que no se pusieron a consideración del expediente, puede plantear un nuevo recurso extraordinario de revisión.

De los datos presentados se verificaron que a la fecha de corte de la información existieron solo dos expedientes apelados.

b) cobrados, si después haber sido legalmente notificados con su respectiva resolución de multa se ha procedido a realizar el pago de la orden girada para tal efecto y su respectiva emisión del título de crédito en las cuentas manejadas por la tesorería metropolitana, o si se encuentra realizando el pago mediante un convenio de facilidades de pago para la obligación legalmente establecida.

De los datos presentados se verificaron que a la fecha de corte de la información existieron trece expedientes cobrados.

c) Coactivados, si después de haber sido legalmente notificados con la respectiva resolución con la multa, orden de pago, y vencido que haya sido el plazo para pagar o apelar, el administrado no haya hecho ninguna de las opciones que pudo haber tomado, por lo cual el funcionario competente se ve en la obligación de remitir dicho acto administrativo al departamento correspondiente para que se encargue de cobrar por dicha obligación, que pasa a convertirse en una acreencia y un derecho para la administración, que lo realizará mediante el seguimiento de un proceso especial llamado proceso coactivo o mal llamado “juicio coactivo”, en donde ya no se encarga de determinación de la obligación sino exclusivamente al cobro de la misma mediante el uso de la fuerza.

De los datos presentados se verificaron que a la fecha de corte de la información existieron dieciocho expedientes coactivados.

d) No Cancelados, si luego de haber sido legalmente notificados con la respectiva notificación, los administrados responsables no han pagado la obligación ya impuesta o determinada, a lo cual puede responder a diferentes factores como que están dentro del término legal para interponer recurso o que estén pendientes de enviarse a coactivas.

De todos los valores que se recauden por concepto de multas ambientales se recaudan en una cuenta especial, para lo cual se crea un fondo ambiental, pensando en la utilización de estos valores para una remediación ambiental a los impactos causados por las empresas contaminadoras que en su debido momento se multa y se obliga a corregir su conducta infractora.

4.2 Caso Práctico ejemplificativo, para ilustración en la tesis.

Para temas de comprensión y estudio nos vemos en la obligación de realizar la ilustración de un caso práctico de la Unidad Desconcentrada de Control Ambiental, Telecomunicaciones y Redes de servicio (UDCATYRS) de la Agencia Metropolitana de Control, datos que se han tomado de un expediente real, empero que por temas de protección de identidades e imagen de la empresa sindicada en este caso se ha ocultado la identidad con nombres ficticios.

Expediente referencial No. **382-2012-POFASA (PLANTA DE FAENAMIENTO POLLO FAVORITO S.A.)**, *“Ejecutar una Actividad sin someterse al proceso de Evaluación de Impactos Ambientales”*.

Este proceso Administrativo se ha tramitado en la Unidad Desconcentrada de Control Ambiental, Telecomunicaciones y Redes de servicio (UDCATYRS) de la Agencia Metropolitana de Control del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

El Expediente Administrativo que se encuentra siendo materia de estudio consta de doscientos sesenta y nueve (269) fojas y en el mismo se ha cumplido requisitos contemplados en el Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano, el mismo que va de la Constitución de la República, Normas, Leyes, Reglamentos, Acuerdos Ministeriales, Ordenanzas Metropolitanas y otros mandatos Jurídicos, que son analizados para emitir la respectiva Resolución final.

Empieza el Proceso en virtud del oficio No.1002, de fecha 10 de febrero del 2012, suscrito por el Ing. Byron Arregui Gallegos Director Metropolitano de Gestión de la Calidad Ambiental, en que adjunta el ICRE No. 4975 (Informe a Comisaria de Incumplimiento de Regulados), en el que se determina que el Regulado a Ejecutado una serie de actividades sin someterse al proceso de Evaluación de Impactos Ambientales.

Con de 15 de marzo del 2011, el Economista Ramiro Morejón Secretario de Ambiente adjunta el informe técnico No. 56-GCA-LIC-11 suscrito por la Doctora Gladys Colagua en el que se manifiesta el Incumplimiento de Regulado indicado anteriormente.

Con estos antecedentes la UDCATYRS dicta el Auto de Inicio No. 382-CMA-2012 de 16 de octubre de 2012, en que se hace conocer al Regulado compañía POLLO FAVORITO S.A. POFASA el incumplimiento a fin de que de contestación a la misma en defensa de los intereses de la Empresa.

El Regulado da contestación al Auto de Inicio negando los Fundamentos de Hecho y de Derecho de la Acción propuesta y adjuntando los documentos solicitados en el Auto de Inicio, relacionados a la capacidad Legal, del Regulado en este caso el Señor Jorge Villamizar Cajiao, y se opone a la pretensión de la autoridad Ambiental, indicando que lo manifestado en los documentos presentados por la Secretaria de Ambiente no son verdaderos.

Con Providencia 1374-PA-CMA-2012 de 29 de octubre del 2012 se abre la causa a Prueba, se adjunta los medios de verificación presentados por el Regulado y se despacha la misma con providencia 1502-PA-CMA-2012 de fecha 14 de noviembre del 2012.

El presunto infractor POFASA ha solicitado una Audiencia, la misma que se lleva a cabo el 26 de noviembre del 2012, en la cual el Regulado a tratado de justificar la Infracción por la cual se abierto el presente Proceso Administrativo.

A fojas 246 del expediente administrativo consta el Informe técnico presentado por la Ing. Cecibel Escalante técnica de la UDCATYRS en la que en conclusiones informa que de acuerdo a la documentación que consta en el expediente administrativo, una vez evaluado y tramitado el mismo no levanta el incumplimiento por el cual se abre el presente expediente administrativo. A fojas 255 del citado expediente se encuentra el Informe técnico No. 98-CMA-2013 de fecha 25 de febrero 2013 con el cual la Ing. Cecibel Escalante se ratifica en el incumplimiento.

La Resolución No.52-2013 de fecha 04 de marzo del 2013 con el cual la Comisaria Ambiental (Actual UDCATYRS) impone una multa de diez remuneraciones básicas unificadas equivalentes a tres mil ciento ochenta dólares americanos en aplicación a la Ordenanza Metropolitana No. 2013, Art.II.380.64 literal a), Infracción que se encuentra tipificada como: **“Ejecutar una Obra, proyecto o actividad sin someterse al proceso de evaluación de impactos ambientales”.**

Una vez que la Resolución a causado estado es decir que se encuentra ejecutoriada, se ha procedido a ejecutar la misma y se ha emitido la Orden de emisión de título de crédito 0000059 de fecha 13 de marzo del 2013 por el valor de la multa impuesta y que de acuerdo a la que consta en el proceso la misma ha sido cancelada.

Con Providencia No. 399-PA-CMA-2013 de fecha 25 de marzo de 2013 se ha dictado el Archivo de este expediente por cuanto el Regulado ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Ambiental.

4.3 Algunos casos emblemáticos de control de perjuicios al ambiente en el Distrito Metropolitano de Quito

Este proceso Administrativo se ha tramitado en la Unidad Desconcentrada de Control Ambiental, Telecomunicaciones y Redes de servicio (UDCATYRS) de la Agencia Metropolitana de Control del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

El Expediente Administrativo que se encuentra siendo materia de estudio consta de ciento seis (106) fojas y en el mismo se ha cumplido requisitos contemplados en el Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano, el mismo que va de la Constitución de la República, Normas, Leyes, Reglamentos, Acuerdos Ministeriales, Ordenanzas Metropolitanas y otros mandatos Jurídicos, que son analizados para emitir la respectiva Resolución final por contaminación al Medio Ambiente.

Empieza el Proceso Administrativo mediante un Acta de verificación No. 12-CMA-2012, de fecha 29 de febrero del 2012, suscrito por la Ingeniera Cecivel Escalante, técnica de la Comisaria

Metropolitana Ambiental, por la Infracción estipulada en el Art.II.380.64.literal a) **“Ejecutar una obra, proyecto o actividad sin someterse al Estudio de Impactos Ambientales”**

Con estos antecedentes la Unidad Administrativa “UDCATYRS” dicta el Auto de Inicio No. 77-CMA-2012 de fecha 29 de febrero de 2012 en que se hace conocer al Regulado **CANTERA TERRAZAS DE MANDINGO** el incumplimiento a fin de que de contestación a la misma en defensa de los intereses de la Empresa.

El Regulado da contestación al Auto de Inicio negando los Fundamentos de Hecho y de Derecho de la Acción propuesta y adjuntando los documentos solicitados en el Auto de Inicio, relacionados a la capacidad Legal, del Regulado en este caso el Señor Jorge Gabriel Pérez Pozo quien manifiesta que contrato los servicios de un profesional en la materia a fin de que proceda con los trámites legales, por lo que solicita el archivo del expediente administrativo.

Con Providencia 191-PA-CMA-2012 de 08 de marzo del 2012 se abre la causa a Prueba, se adjunta los documentos de prueba presentados por el Regulado y se provee la misma con providencia 265-CMA-2012 de fecha 29 de marzo del 2012 mas la documentación adjunta que serán tomados en cuenta en el momento resolver.

CASPIGASI ha solicitado que las Terrazas Mandingo al igual que san Luis han suspendido sus actividades conforme lo dispuesto por su Autoridad.

La Resolución No.42-2012 de fecha 19 de abril del 2012 con el cual la Comisaria Ambiental (Actualmente UDCATYRS) encuentra culpable de cometer la infracción y Resuelve SUSPENDER LAS ACTIVIDADES DE LA Cantera “TERRAZAS DE MANDINGO” Representada por el señor Jorge Gabriel Pérez Pozo para lo cual se mantendrán los sellos como medida cautelar, y se impone una multa de CIEN Remuneraciones Básicas Unificadas Mínimas, equivalentes a veinte y nueve mil doscientos dólares Americanos (29.200,00) en aplicación a la Ordenanza Metropolitana No. 2013, Art.II.380.64 literal a), Infracción que se encuentra tipificada como: **“Ejecutar una Obra, proyecto o actividad sin someterse al proceso de evaluación de impactos ambientales”.**

Una vez que la Resolución se encuentra ejecutoriada, se ha procedido a ejecutar la misma y se ha emitido la Orden de emisión de Título de Crédito 0000058 de fecha 24 de abril del 2012 por el valor de la multa impuesta y que de acuerdo a la que consta en el proceso la misma ha sido cancelada.

Con Providencia No. 1302-CMA-2013 de fecha 25 de marzo de 2013, se concede al regulado el plazo de sesenta días para que cumpla con todas las actividades de su Cronograma de Cumplimiento inmediato para actividades por daño ambiental de Impactos causados por la extracción del material pétreo.

4.4 Conclusiones.

La Constitución ecuatoriana establece en el Art. 396 que la responsabilidad por daños ambientales es objetiva, sin embargo el Reglamento para la prevención y control de la contaminación por contaminación no reconoce dicha responsabilidad y su falta de regulación dificulta la actuación de las autoridades competentes para sancionar de manera inmediata los daños ambientales provocados, ya sea por personas naturales o jurídicas de naturaleza pública o privada , a causa del mal manejo de los desechos peligros, emisión de gases, y otras sustancias que provoquen algún daño al ambiente, también el estado adoptara medidas protectoras eficaces y oportunas además de las sanciones implicara también la obligación de restaurar íntegramente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas por la contaminación de alto impacto ambiental. También el estado Ecuatoriano deberá efectuar medidas de prevención y control ambiental, para lo cual enunciare algunas conclusiones:

- La Contaminación poco a poco está destruyendo la salud de los seres vivos sin que hagamos algo por cambiar el rumbo de la Madre Naturaleza.
- Hay mucho que hacer para remediar este grave problema que no solo nos perjudicara a nosotros sino a las futuras generaciones, las cuales no serán responsables de las irresponsabilidades que cometamos en la actualidad.
- La contaminación es un problema del que nadie quiere responsabilizarse y que, hasta en algunos casos, no se percibe hasta cuando es ya demasiado tarde.
- La Contaminación ambiental es un grave problema que amenaza con acabar con la vida en la tierra.
- Las normas legales ambientales son bastante vagas y vacilantes en temas de procedimentales y sancionatorias, lo que permite que existan vacíos legales y por temas de principio de legalidad no se pueda juzgar oportunamente ni imponer una sanción proporcional u ordenar medidas mitigadoras inmediatas, para la prevención de la contaminación, así como sancionar conforme la contaminación causada.

4.5 Recomendaciones

La Constitución ecuatoriana, en materia ambiental, ha reconocido a la naturaleza como sujeto de derechos y vincula el desarrollo sustentable con la protección del medio ambiente y el derecho al buen vivir *sumak kawsay* de los individuos, por tanto es necesario que las disposiciones contenidas en el Reglamento para la prevención y control de la contaminación ya sea por desechos peligrosos, empresas que se encuentran dentro del Distrito Metropolitano, también encontrar una solución con las empresas de autobuses que causan contaminación de alto impacto ambiental, todas las leyes que regulan todo lo referente al medio ambiente sean reformadas, estén acorde a los mandatos constitucionales y a los Tratados, Convenios, Acuerdos, Internacionales para poder vivir dentro de un ambiente sano y libre de contaminación.

El Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos debe estar acorde a los mandatos constitucionales y regular entre sus disposiciones la responsabilidad objetiva para que el Estado, mediante sus organismos competentes, sancione por los daños ambientales producidos, imponga la obligación de restaurar íntegramente todos los ecosistemas e indemnice a las personas y comunidades afectadas por la irresponsabilidad en el manejo de los desechos peligrosos, y sus limitaciones a la aplicación de la responsabilidad objetiva se presentan al no poder identificar quien fue el generador de dichos desechos. Para que la responsabilidad objetiva surta efecto, se tendrá definitivamente que identificar al responsable. Esto se lo hace por medio del manifiesto, instrumento que ayudará a determinar la responsabilidad.

El Código Penal ecuatoriano en su artículo 437-A y el 437 B debe ser más preciso en la definición de lo que es considerado como contaminación de alto impacto, causados por las fábricas, empresas de transporte, hospitales, y la comunidad en general, para que no se discrimine a ningún residuo nocivo y contaminante para el ser humano y el medio ambiente.

El contenido de la evaluación de impacto ambiental regulado en el artículo 23 de la Ley de Gestión Ambiental ecuatoriana, tal como se encuentra establecido en la norma, únicamente regula las consecuencias y los efectos que se producen por la ejecución de actividades derivadas del medio ambiente, más no prevé los daños ambientales que se pueden producir por el desarrollo de dichas actividades. Por tal razón la Ley debería incorporar alternativas tecnológicas

que a más de permitir el desarrollo de obras públicas, privadas o mixtas procuren el cuidado del medio ambiente, para ir de acuerdo con la necesidad de las personas a poder crear nuevas empresas para el desarrollo de los habitantes, pero cumpliendo con las leyes vigentes para el Distrito Metropolitano de Quito, aquí enumeramos algunos puntos de mayor importancia que se debe hacer antes de un proyecto o actividad:

1. Identificar y evaluar sistemáticamente los Impactos Ambientales generados en las fases de implantación, operación y ejecución;
2. Definir los límites de área geográfica a ser directa o indirectamente afectada por los Altos Impactos Ambientales;
3. Establecer los programas de monitoreo y auditorias para las fases de implantación;
4. Evaluar los efectos directos e indirectos sobre la salud humana por la contaminación Ambiental.
5. Realizar acciones para atacar causas y también efectos negativos que produce la contaminación de nuestro ambiente.
6. Proponer prácticas de concientización para darlas a conocer a la población.
7. Prevenir los problemas del ambiente y nunca ignorarlo porque si los dejamos crecer arriesgamos nuestra calidad de vida y esto disminuye las oportunidades del desarrollo.
8. Ordenar nuestras intervenciones en el ambiente.

El Reglamento para la Prevención y Control de la Evaluación de Impactos Ambiental “Alto Impacto Ambiental” debería incorporar, dentro de sus disposiciones, los requisitos mínimos necesarios para el desarrollo de actividades vinculadas con la contaminación del Medio Ambiente en el que vivimos.

4.6 Planteamiento de Propuesta y Solución

Si bien es cierto que en todas las sociedades siempre ha existido un cierto interés por la Madre Naturaleza, pero en las últimas décadas cuando se ha realizado un verdadero esfuerzo, de carácter internacional, para conseguir conjugar el desarrollo y la protección al Medio Ambiente mediante tratados, Acuerdos y Convenios no se ha logrado resolver el gran problema de la contaminación por qué no se cumple con dichos acuerdos internacionales.

Podemos calificar, de notable avance mundial, el hecho de que se considere la protección del Medio Ambiente como parte esencial del proceso de desarrollo, advirtiéndose que sin una protección ambiental adecuada se socavan las bases y posibilidades del desarrollo, y que sin desarrollo no habrá recursos suficientes para las inversiones que se requieren en las medidas de protección del Medio Ambiente.

El crecimiento de la población, el desarrollo de las ciudades, la explotación incorrecta de los recursos naturales y la contaminación, en el pasado y en nuestros días, junto con las perspectivas de los años futuros en lo referente a la población, consumo de agua, alimentos, energía, eliminación de residuos, contaminación, etc., nos manifiestan un evidente riesgo de un grave deterioro ambiental, al que habrá que enfrentarse, poniendo los medios, desde ahora, para mantener y continuar con nuestro desarrollo y conseguir un medio ambiente equilibrado, fijando prioridades, elaborando políticas ambientales para un desarrollo sostenido, planificando, gestionando y buscando las soluciones entre todas las personas y las empresas para poder dar en el futuro una mejor calidad de vida a los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito y a la humanidad entera.

En este trabajo vamos a hacer un recorrido por los esfuerzos que se han hecho, en este sentido, por parte de grupos de científicos e Instituciones Internacionales, desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, con un breve análisis de los principales planteamientos y propuestas, insistiéndose por nuestra parte en la necesidad de establecer una planificación, gestión y formulación de políticas ambientales, en todos los niveles y lugares, con un enfoque al futuro con proyectos de forestación de nuestros paramos, parques que son los pulmones de la ciudad.

La contaminación ambiental está llegando a tales extremos en el mundo y en el Ecuador y por ende en el Distrito Metropolitano de Quito ya que los seres humanos parece que estamos empeñados en destruir el ambiente en donde vivos, en una actitud suicida; pero mientras que en otros países se están tomando medidas muy serias para prevenir y controlar la contaminación, en el nuestro sólo existen acciones aisladas.

Para solucionar el problema de la contaminación es de urgente necesidad tomar algunas medidas que a continuación enumerare:

1.- El Estado debe preocuparse del problema de la contaminación, dando leyes severas, controlando su cumplimiento y sancionando a los transgresores. El problema ambiental es un problema que afecta al bien común y a la calidad de la vida, y, en consecuencia, no puede quedar al libre albedrío de las personas. El bien común es una responsabilidad del Estado como representante del bienestar de todos los ciudadanos.

2.- Una alta responsabilidad incumbe a los gobiernos municipales, responsables directos de la disposición de la basura y las aguas servidas; del control del parque automotor; de las áreas verdes; del control de los ruidos molestos; y de las emisiones contaminantes en su jurisdicción.

3.- Los ciudadanos deben tomar más conciencia del problema, exigir respeto por el medio ambiente y no contribuir a su deterioro. El aporte de los ciudadanos, individualmente, puede ser muy grande en algunos aspectos como:

- No arrojar la basura y los desechos en las calles ni en cualquier lugar.
- Evitar los ruidos molestos, tanto a nivel de barrio (escapes abiertos, bocinas, música fuerte) como a nivel doméstico.
- Erradicar hábitos sumamente contaminantes, como el escupir y hacer deposiciones en la calle o en los parques y jardines, etc.
- Sembrar árboles y colaborar en el mantenimiento de las áreas verdes.

- No utilizar productos que contienen contaminantes, como desodorantes en aerosol, gasolina con plomo, etc.
- 4.- Se deben usar alternativas menos contaminantes como abonos orgánicos en lugar de los sintéticos; transformar los desechos urbanos orgánicos en abonos; controlar biológicamente las plagas, es decir, combatir los insectos dañinos con sus enemigos naturales, etc.
- 5.- Prohibir la propaganda ciega para los insecticidas, herbicidas y otras sustancias tóxicas, debiéndose alertar obligatoriamente al usuario sobre los efectos contaminantes y letales de las mismas.
- 6.- Educar a la población a través de las escuelas y medios de comunicación (TV, radio, periódicos) en el respeto por el medio ambiente y en la erradicación de pésimas costumbres de contaminación ambiental, básicamente utilizar como medio de propagación masiva la televisión sobre causas y consecuencias de la no conservación adecuada del medio ambiente, así como prevenir la contaminación ambiental, las sanciones en las cuales se incurre al realizar determinada actividad típica administrativa o penal; en lugar de publicar tanta novela absurda, sin sentido, pornográfica, dramática, exagerada y paranoica que daña la mente y la cultura de la gente; el objetivo debe ser siempre educar buenos modales y modos de convivencia a la población y no lo contrario. Educar constantemente a toda la gente nacionales o extranjeros sobre medios y formas de protección del ambiente y evitar la contaminación esa debe ser la meta.
- 7.- El Ministerio del Ambiente debe asumir a plenitud su responsabilidad de controlar la contaminación en nuestro ambiente en un esfuerzo directo con los empresarios y los habitantes, y fomentar soluciones a los problemas, dando plazos de adecuación a las normas de control de la contaminación ambiental a nivel de todo el Distrito Metropolitano de Quito y a nivel nacional.
- 8.- expedir normas jurídicas de protección del ambiente que sean más severas e intolerantes con la finalidad de crear mucha objetividad antes de cometer una infracción contra la naturaleza o el medio; la finalidad de crear asombro y miedo en la sociedad antes de que se cometa una destrucción

de la naturaleza y el medio donde vivimos, así mismo incentivar la protección ambiental a través de políticas ambientales recuperadoras del medio verde.

9.- Establecer obligatoriamente la inversión en talento humano, ciencia y tecnología ecológica y proteccionista como política de estado, para rescatar y fomentar el aumento de la vida verde como la conocemos, así evitar la contaminación en nuestras ciudades, países y el mundo en general, ya que en países del primer mundo con la utilización del talento humano, la ciencia y la tecnología se está haciendo reverdecer el desierto, empero en el Ecuador sin nada de eso se está contaminando y desertificando los jardines mas floridos.

10.- Por último y creo que el más importante esta en educar obligatoriamente a las futuras generaciones hacia la responsabilidad con el medio ambiente y ayudar a la toma de conciencia sobre los daños de la contaminación ambiental a través de medios forzosos por el bienestar de la colectividad y la sobrevivencia del mundo como lo conocemos.

BIBLIOGRAFÍA

- Betancor R, Andrés (2001); “*Instituciones de Derecho Ambiental*” Editorial la Ley de Madrid – España.
- Cabanellas, G. (1954) “*Diccionario de Derecho Usual*”; Tomo 3, Edit. Arayú, Buenos Aires – Argentina.
- CEDA, C. E. (2004). *Manual de Capacitación en Derecho Ambiental y Código de Procedimiento Penal para Fiscales del Ministerio Público*. Quito: Fraga C. Ltda.
- Constitución de la República del Ecuador* . (2008). Montecristi – Ecuador Código Civil. Corporación de Estudios y Publicaciones; Edit. Profesional, Quito – Ecuador, 2013
- Código Civil*. Corporación de Estudios y Publicaciones; Edit. Profesional, Quito – Ecuador, 2013
- Código Penal*. Corporación de Estudios y Publicaciones; Edit. Profesional, Quito – Ecuador, 2015
- Competencias, O. 3. (s.f.).
- El Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental Artículos 60-61-62*. (s.f.).
- Guaranda, W. (2010). *Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos*. Cuenca: Sandra Naula.
- Hammond, R. (2008). *El Mundo en el 2003*. España: Yago.

Iara Dos Reis Pereira (2011) *“Análisis al Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación y Desechos Peligrosos.*

Ley de Gestión Ambiental (2004). Corporación de Estudios y Publicaciones; Edit. Profesional, Quito – Ecuador, 2013.

Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) . (s.f.).

Libro VI de la Calidad Ambiental (s.f.).

Ordenanza Metropolitana 321 (s.f.).

Ordenanza Metropolitana 404. (s.f.).

Ordenanza Metropolitana 0146. (s.f.).

Ordenanza Metropolitana 213 Art. II.380.64 . (s.f.).

Pereira, I. D. (2011). *Análisis al Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos.* Quito - Ecuador.

Pérez Camaño, Efraín (s/f) *“Derecho Ambiental y de los Recursos Ambientales”* Editorial Edino Primera Edición. Guayaquil- Ecuador.

Ray H. (2000) *“El Mundo en 2013”* Editorial Yago.

Wilton. , (2010) Mendoza “*Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos*” Editorial Sandra Naula. Cuenca –Ecuador.

CONSULTAS EN INTERNET:

español.answer.yahoo.com

<http://es.wikipedia.org>

<http://quitoambiente.gob.ec>

<http://tuspreguntas.misrespuestas.com>

[http://es.wikiupedia.org/wiki/Ministerio de Ambiente del Ecuador](http://es.wikiupedia.org/wiki/Ministerio_de_Ambiente_del_Ecuador). (s.f.).

<http://www.monografias.com>. (s.f.).

<http://www.quitoambiente.gob.ec>. (s.f.).

<https://www.google.com.ec>. (s.f.).